

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Tesis de Grado

**“Neuquén: Tierra de protestas,
confluencia de represiones. Las
representaciones sociales de las
autoridades provinciales entre
diciembre de 2001 y el asesinato de
Fuentaalba en abril de 2007”**

Director: Dr. Mauricio Schuttenberg

Tesista: Nicolás Alberto Koenig Puertas

La Plata, septiembre de 2014

Datos personales

Tesista: Nicolás Alberto Koenig Puertas

Legajo: N° 12316/7

Domicilio: Calle 4 N° 434 Bloque 2 Dpto.4

Teléfono: 0221-4272835

Correo electrónico: nicok14@hotmail.com

Sede de la Facultad en la que se cursó la carrera: La Plata

Título al que opta: Licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo

Datos de la tesis

Título: “Neuquén: Tierra de protestas, confluencia de represiones. Las representaciones sociales de las autoridades provinciales entre diciembre de 2001 y el asesinato de Fuentealba en abril de 2007”

Programa de Investigación: Comunicación, prácticas socio-culturales y subjetividad

Director: Dr. Mauricio Schuttenberg

Fecha de presentación: Septiembre de 2014

Resumen: Este trabajo describe el proceso que desembocó en el asesinato del docente Carlos Fuentealba por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Neuquén. Ese crimen se inscribe en un proyecto político que diagramó y ejecutó Jorge Sobisch y que tenía como meta final alcanzar la presidencia del país.

El objetivo es indagar las representaciones sociales de los funcionarios provinciales respecto a la protesta social y a quienes la protagonizan. El recorte temporal efectuado va de diciembre de 2001 hasta la muerte del trabajador de la educación en abril de 2007, lapso en el que es posible visualizar un discurso que buscó posicionarse ante la creciente conflictividad social.

Los procesos comunicacionales se caracterizan por su opacidad, en tanto se encuentran mediados por relaciones de poder, por las asimetrías y las desigualdades propias del tejido social. En ese marco, a través de la estrategia metodológica del análisis crítico del discurso, se procuró dar cuenta de las caracterizaciones, valoraciones e interpretaciones sobre los episodios de protesta, de manera de poder hallar elementos que dieran cuenta

de una criminalización de la protesta social y de marcar las construcciones de sentido efectuadas y las respuestas institucionales que estratégicamente se brindaron.

Palabras clave: Discurso - Representaciones sociales - Criminalización de la protesta social - Conflictividad social - Neuquén - Análisis Crítico del Discurso

Agradecimientos:

A mi papá y a mi mamá, por tanto amor, sacrificio, bondad, paciencia y libertad...

A Vero, Mario, Marti, Mate y Sofi, por alegrarme la vida todos los días...

A Ory (la luz que no se va a apagar nunca) por tantos años de amor, ternura, dulzura,
comprensión, compañía y aprendizaje...

A Mirta por los años de cariño y amabilidad, de hospitalidad incondicional...

A Mauricio por su generosidad, sabiduría y compromiso...

Sin el amor y el apoyo de todas esas personas el trabajo nunca hubiera podido entregarse... ni sin el afecto de muchas otras que se preocuparon y preguntaron tantas veces durante el extenso proceso de investigación.

ÍNDICE

Introducción.....	7
Capítulo 1: Marco teórico-metodológico.....	10
1.1 - Enfoque teórico-conceptual.....	10
1.2 - Estrategia metodológica.....	16
1.3 - La mirada desde la comunicación.....	22
1.4 – Antecedentes.....	23
Capítulo 2 - La gestación del discurso criminalizador (Dic. de 2001 a dic. de 2003).....	26
2.1 - El “Argentinazo neuquino” de diciembre de 2001.....	26
2.2 - 2002: La demonización al que protesta inicia su marcha.....	29
2.3 - 2003: La huelga docente de 71 días y la represión que le quitó un ojo a Alveal.....	35
2.3.1 - La cuestión educativa y el paro de 71 días.....	38
2.3.2 - La tarjeta social y los “casi Kosteki-Santillán neuquinos”.....	46
2.4 - Reflexiones parciales.....	49
Capítulo 3 - La mano dura y la tolerancia cero ante la protesta social (Dic. de 2003 a Dic. de 2005).....	52
3.1 - La era Manganaro.....	52
3.2 - 2004: Las víctimas de la mano dura.....	54
3.2.1 - El Plan Manganaro.....	57
3.3 - 2005 “Mar de conflicto social”.....	60
3.3.1 - La huelga de Salud.....	60
3.3.2 - La huelga docente de 2005.....	63
3.4 - Reflexiones parciales.....	68
Capítulo 4 - De la criminalización a la represión de la protesta social (Diciembre de 2005 a Abril de 2007).....	73
4.1 - El recambio en Seguridad.....	73
4.2 - 2006: Una montaña de obstáculos en la carrera a la candidatura Presidencial.....	75
4.2.1 - El caso “Zona liberada”: La antesala a Fuentealba.....	76
4.2.2 - Ecos de la “Zona liberada”.....	85
4.2.3 - El 2006 de Sobisch con vistas a 2007.....	86
4.2.4 - El otro foco de conflicto en educación.....	88
4.2.5 - Redondeando el Plan de Seguridad.....	91
4.3 - 2007: La puesta en práctica y difusión del plan.....	93

4.3.1 - El caso Fuentealba.....	94
4.3.2 - Post Fuentealba.....	98
4.4 - Reflexiones parciales.....	99
Conclusiones.....	104
Bibliografía.....	111
Anexos.....	115

INTRODUCCIÓN

La provincia de Neuquén está asociada a conflictos, muchos de ellos violentos. A partir de la década del 90' algunos de los casos más resonantes fueron la muerte por gatillo fácil de Pablo Ramírez (1993), el asesinato del soldado Omar Carrasco (1994), la muerte de Teresa Rodríguez (1997) como consecuencia de una protesta social, el violento desalojo de los docentes del puente que une Neuquén con Río Negro por la gendarmería nacional (1997) y los numerosos cortes de rutas y calles por desocupados y sectores disconformes con el accionar estatal, sin contar varios casos más de muertes en los que la policía estuvo directa e indirectamente vinculada y cuyas causas fueron archivadas.

La provincia patagónica, declarada capital de los derechos humanos, es gobernada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) desde la creación del partido en 1963. Surgido durante la proscripción del peronismo, en sus primeras décadas de vida su identidad se articuló alrededor de la herencia del peronismo, sin embargo a partir de los 90 adquirió un matiz fuertemente neoconservador con el primer mandato de Jorge Sobisch (1991-1995).

Desde allí se advierte una articulación entre partido y gobierno, es decir, un proceso de absorción que el Estado realizó del partido político. Se trata entonces de un enclave provincial de tipo feudal, con un sistema político que gobierna desde siempre con características de cerrado y clientelar. En ese marco, Sobisch inició su segundo mandato al frente de la provincia en 1999 y fue reelecto en 2003, por lo que fueron ocho años consecutivos de un proyecto neoliberal, con el Estado jugando un papel central en la actividad económica como principal distribuidor de trabajo y riqueza proveniente en su mayor parte de las regalías de petróleo, gas y electricidad, favorecido por la devaluación y el alza exponencial del precio del petróleo. En ese sentido, su gestión combinó a la perfección el uso del aparato clientelar y el aparato represivo.

El neoliberalismo trajo precisamente, además de un conjunto de políticas devastadoras para el país y para la provincia, un ejercicio del poder en el que se potenciaron las fuerzas represivas. Apenas diez días después de cumplirse diez años del crimen de Teresa Rodríguez (episodio que nunca fue juzgado) en el transcurso de una pueblada en Cutral Co, una nueva vida se perdió en el marco de una protesta social. El 4

de abril de 2007 el docente Carlos Fuentealba fue fusilado por un policía que estuvo involucrado en el asesinato de Teresa Rodríguez y que había sido procesado, condenado y luego exonerado de la fuerza por apremios ilegales. Sin embargo, fue reincorporado a la institución y el responsable del salvaje asesinato.

“Neuquén, tierra de confluencias” fue un slogan propagandístico que el gobierno implementó durante la década pasada, en alusión a la confluencia del río Neuquén y el río Limay en la provincia. Jugando con esos términos para titular esta tesis y retomando trabajos e investigaciones que abordan la criminalización de la protesta social y la conflictividad social en Neuquén, la propuesta aquí planteada continúa ese análisis. De ese modo, a partir de un hecho social significativo como lo fue el crimen del maestro neuquino, se procuró analizar de forma crítica a quienes poseen el poder, esto es, a los responsables políticos.

Las preguntas que guiaron al presente estudio fueron las siguientes: ¿Qué representaciones construyen a partir de su discurso los funcionarios gubernamentales respecto a la protesta social y a quienes la protagonizan? ¿Qué concepciones y caracterizaciones (interpretaciones, valoraciones, etc.) se encuentran presentes en las versiones oficiales de los episodios de protesta ocurridos entre diciembre de 2001 y abril de 2007? ¿Existe una continuidad entre la mirada estatal planteada en el plano discursivo con respecto a la intervención material en los conflictos? ¿Pueden encontrarse indicadores en el discurso del Movimiento Popular Neuquino (MPN) que den cuenta de una criminalización de la protesta social? ¿Existieron en el período de tiempo estudiado justificaciones y legitimaciones del uso de las fuerzas represivas o hubo condenas y autocríticas públicas sobre el tratamiento represivo aplicado? ¿El uso de la violencia institucional aplicada desde la Policía de Neuquén en episodios de protesta constituye una consecuencia no deseada o forma parte de una práctica recurrente con objetivos claros?

Lo que se procura es focalizar la problemática desde la comunicación y las construcciones discursivas, dando lugar a las miradas de los funcionarios del gobierno neuquino para comprender así las representaciones que poseen respecto a los que protestan. De esta forma, la investigación tiene como objetivo general indagar las representaciones sociales producidas por las autoridades provinciales respecto a la “protesta social”, en el marco de episodios de protesta, organización y lucha protagonizados por diversos sectores de la población neuquina entre diciembre de 2001 y abril de 2007. Mientras que los objetivos específicos serán: analizar e interpretar las

declaraciones emitidas desde diversos despachos oficiales y desde las fuerzas de seguridad difundidas en la prensa escrita en el período de tiempo escogido; describir las caracterizaciones efectuadas en torno a la conflictividad social y a los sujetos participantes en ella, así como las figuras, imágenes y visiones presentes en la interpretación y comprensión de los conflictos; reconocer aquellos elementos que den cuenta de la construcción de la criminalización de la protesta social por parte de las autoridades provinciales; examinar los acontecimientos de protesta más significativos del período abordado, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos, la coyuntura político-económica en que se desarrollaron y las consecuencias simbólicas y materiales de la estrategia asumida por el Estado desde su discurso y sus prácticas.

El relevamiento hemerográfico se llevó adelante en el Sistema Provincial de Archivos, ubicado en la capital neuquina. Allí se procedió a la lectura de los ejemplares del Diario “Río Negro” publicados durante el recorte temporal efectuado. En relación a esto, es pertinente aclarar que no es a partir de la crisis de 2001 que se criminalizó y penalizó a los sectores en lucha (desde 1996 en todo el país se produjo una enorme cantidad de cortes de ruta y la consecuente persecución judicial), sino que el recorte aquí propuesto persigue una lógica basada en la idea de que a partir de esa fecha se produjo un quiebre en múltiples sentidos, y que en el aspecto discursivo es posible advertir un punto de inflexión a partir del cual empezar a captar el proceso que luego desembocó en el fusilamiento de un docente por parte de las fuerzas de seguridad.

La exposición de la investigación está ordenada de la siguiente manera: en primera instancia se desarrolla el marco teórico-metodológico, la perspectiva comunicacional y los antecedentes; en el segundo capítulo se aborda la primer etapa de análisis, a través de la gestación del discurso criminalizador; en tercer lugar se analiza el quiebre que significó el recambio ministerial en el reforzamiento del planteo simbólico-discursivo del gobierno neuquino; mientras que en el cuarto capítulo se profundiza en la estrategia de las autoridades en el marco del objetivo del gobernador de cara a las elecciones presidenciales de 2007, con el Plan de Seguridad como un elemento central. Por último, se exponen las conclusiones y reflexiones que surgieron del estudio.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO

1.1 - Enfoque teórico-conceptual

El análisis aquí propuesto requiere la especificación del encuadre teórico conceptual desde el cual se busca desentrañar el objeto de estudio de la investigación. De esta manera, el primer concepto que amerita ser definido es el de discurso. Éste, no es un reflejo de la realidad sino que es el lugar mismo donde las relaciones sociales se construyen. Los discursos sociales no son textos cerrados en sí mismos, sino que se inscriben dentro de una red de discursos sociales que se interrelacionan. El discurso también se comprende con relación a lo que lo rodea, se produce en una situación social y nos permite percibir como los procesos y objetos se articulan dentro de una cadena de significaciones que integran la dinámica social.

El discurso no debe ser visto sólo como una parte del sistema de habla sino que también debe verse desde el punto de vista del orden sociocultural. Para Van Dijk (1991) el discurso desempeña un papel básico en la reproducción de las cogniciones sociales, y por lo tanto, en la reproducción y sostenimiento de las ideologías. Vasilachis de Gialdino (1993), siguiendo a Pierre Boudieu, aclara más aún este punto: “Los discursos no son solamente conjuntos de signos destinados a ser comprendidos, descifrados, sino signos de riqueza destinados a ser evaluados y apreciados, y signos de autoridad destinados a ser obedecidos.” (p.170).

Otro de los conceptos estructurales que se abordan en este trabajo es el de representaciones sociales. El estudio de las mismas permite una aproximación a la visión que tienen los grupos o personas acerca de determinados objetos sociales, y en función de las cuales resulta probable que actúen o tomen determinadas posiciones o prácticas sociales.

Las representaciones sociales refieren a aspectos significativos de la realidad y se constituyen en sistemas de creencias, valores, ideas y prácticas que orientan y

justifican los comportamientos de los individuos, así como en esquemas de pensamiento que permiten a los individuos interpretar, organizar y entender esa realidad y dominar el mundo social desde donde se ubican.

Se abordarán las representaciones sociales ya que pueden ser construidas a partir de los procesos de interacción y comunicación social, las conversaciones de la vida diaria, la recepción de los medios masivos y se cristalizan en prácticas sociales. Así, resultan pertinentes para este estudio puesto que adquieren un interés social manifiesto, ya que los contenidos de las representaciones, es decir, las imágenes concretamente construidas, no son neutros. Raiter (2002) afirma: “Tomamos decisiones, planificamos nuestra vida, elegimos objetivos, etc., a partir de, o teniendo en cuenta, o condicionados por, las imágenes que tenemos de los acontecimientos y hechos del mundo, las representaciones construidas” (p.16). No son neutros porque tienen consecuencias importantísimas en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad, así como consecuencias en el entorno de esa comunidad.

Este concepto trasciende el de opinión e incluso el de actitudes, las incluye a ambas. Constituye un conjunto organizado de informaciones, opiniones, actitudes y creencias respecto de un objeto dado. En definitiva, un tipo particular de conocimiento cotidiano necesario para desenvolverse en la sociedad, un conocimiento elaborado socialmente.

Son un modo de dar sentido para que las cosas sean miradas de una manera y no de otra. Van Dijk (1999) las define como la conexión entre el texto y el contexto, entendiendo este último como el marco en el que se interpretan y adquieren sentido las expresiones textuales. Ellas definen las opciones de expresión elegidas.

En este sentido, el marco puede concebirse tal como lo explica Erving Goffman (2006), esto es, como aquello que define la situación de interacción entre los actores sociales y otorga significado a los acontecimientos que se producen en la interacción. Esto implica que el aspecto relacional que incluye todo texto afecta su contenido y es un elemento básico para su interpretación. El marco permite, entonces, relacionar el discurso con sus condiciones de producción; por ejemplo la posición en el espacio social del enunciador.

El concepto de contexto también es relevante ya que marca la división entre los estudios discursivos y los puramente gramaticales. El discurso demanda percibir el marco en el que se elaboran y se manifiestan los fragmentos discursivos (las

declaraciones). “Se parte del principio de que el uso lingüístico se da en un contexto, es parte del contexto y crea contexto” (Calsamiglia y Tuzón, 1999, p.16).

Gialdino (1993) afirma: “El contexto - comunicativo y social – en el que el habla se produce determina el significado y alcance de las emisiones, la producción de éstas y el contenido de las interpretaciones. El contexto social es el de la sociedad global; el contexto comunicativo es el de la situación de habla concreta” (p.171).

Así, el contexto es todo lo que viene con el texto, es decir, las propiedades del “entorno” del discurso. Van Dijk (1999) lo define como “el conjunto estructurado de todas las propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la producción, estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación” (p.266). Los contextos son, en definitiva, las estructuras de propiedades de situaciones sociales que son relevantes para el discurso. Y lo central radica en que el hecho de especificar los contextos provee una visión de los detalles del ejercicio de dominación social y sus ideologías subyacentes.

Por otra parte, el concepto de la criminalización de la protesta social también será uno de los ejes estructurales sobre los que reposará el abordaje del objeto de estudio. Rodríguez Alzuet (2007) define con precisión este concepto: “Es una de las manifestaciones de la judicialización de la política, la posibilidad de transformar los conflictos sociales en litigios judiciales; de leer la realidad bajo la lupa del código penal. Criminalizar, entonces, será despolitizar y, por añadidura, deshistorizar, sacar de contexto a los conflictos sociales, emplazar a otras instituciones como interlocutores de los problemas sociales”.

La criminalización es el producto de todos los mecanismos que disputen el sentido de la legalidad/legitimidad de las protestas. Así, se busca que determinadas acciones colectivas y sociales se transformen en delito. En este sentido, Rodríguez Alzuet (2007) agrega: “Criminalizar también es la habilitación al poder punitivo del Estado para encarar dichos conflictos con la lógica de la guerra, legitimar la intervención represiva por parte de las fuerzas del Estado, de trate de la policía o la gendarmería. Criminalizando los conflictos sociales, se busca desencajarlos de la arena política. La criminalización impugna la palabra a los actores sociales para reencuadrarlos como “activistas”, elementos desestabilizadores del orden. Allí donde hay una protesta social, el Estado tenderá a ver un delito consumado o en vías de consumación y no dudará en caracterizar a los protagonistas de la protesta como

delinquentes profesionales o aspirantes y a la organización que la sostiene como una asociación ilícita”.

En definitiva, se la concibe como una estrategia de dominación, con la que se busca domesticar las disidencias, reducirlas, y subordinar a los sectores en lucha. Desde la perspectiva aquí propuesta, se adhiere al planteo de Roberto Gargarella (2005) sobre la necesidad de reivindicar el derecho a la protesta, considerado como “el primer derecho”, como “el derecho a tener derechos”. En el informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (2008) sobre Derechos Humanos, se profundiza esta noción: “El fenómeno de la criminalización de la protesta social consiste en la iniciación de miles de procesos penales al margen de la ley, con la única finalidad de controlar ilícitamente los reclamos sociales. Lo que con esta actividad se busca es desalentar la participación en manifestaciones públicas mediante el despliegue del gran poder coercitivo que un proceso penal implica para quien es imputado, independientemente del resultado final que ese proceso tenga”.

Por otro lado, desde otra arista analítica pero que complementa el encuadre hasta aquí explicado, el concepto de ideología también será utilizado. La necesidad de abordarlo recae en el hecho de que las ideologías sostienen una acción social y política concomitante. Es decir, se traducen en políticas reales, que se ejecutan en prácticas concretas, por ejemplo en este caso, las de las fuerzas de seguridad. El MPN atribuye muchos males a la presencia y la actividad de los que protestan, convirtiéndolas en las causas fundamentales de todo aquello que perjudica al bienestar general.

Para este trabajo, las ideologías serán, meramente, las representaciones sociales más esenciales que comparten los funcionarios provinciales, es decir, las que comprenden sus intereses y objetivos globales. Las ideologías representan la lucha social y son, ante todo y en primer lugar, sistemas de creencias. Operan tanto en el nivel global de la estructura social, por ejemplo, como “monitor” mental compartido socialmente que guía la competencia, el conflicto, la lucha y las desigualdades sociales, como en el nivel de las prácticas sociales situadas en la vida cotidiana.

Van Dijk (1999) señala que son la base ‘axiomática’ de las representaciones sociales compartidas por un grupo y sus miembros, esto es, son conjuntamente fenómenos sociales y mentales. Este autor definió y construyó una noción propia de lo que son las representaciones sociales y que es interesante recuperar. De esta manera, las define como “la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto significa que las ideologías les permiten a las personas, como miembros

de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia.” (...) También pueden formar la base de argumentos específicos a favor de, y explicaciones sobre, un orden social particular, o efectivamente influir en una comprensión particular del mundo en general” (p.163).

El concepto de ideología resulta significativo ya que el discurso tiene funciones ideológicas, entre las cuales pueden mencionarse, por ejemplo, la legitimación, la defensa y el control. Precisamente, en cuanto a la relación entre la ideología y el discurso, cabe señalar que éste último “tiene una función especial en la expresión, implementación y, especialmente, en la reproducción de las ideologías, puesto que es sólo por medio del uso de la lengua, el discurso o la comunicación (u otras prácticas semióticas) que ellas pueden formularse explícitamente. Esto es esencial en contextos de adquisición, argumentación, conflicto ideológico, persuasión y otros procesos de formulación y cambio de las ideologías” (Van Dijk, 1999, p.395).

Las funciones que tienen en la sociedad las ideologías es la de servir, típicamente, para legitimar el poder y la desigualdad. De esta manera, ocultan o confunden la verdad, la realidad o las “condiciones objetivas, materiales, de la existencia”. Son representaciones de lo que somos, de lo que sostenemos, de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras relaciones con otros grupos, particularmente con nuestros enemigos u oponentes, esto es, aquellos que se oponen a lo que afirmamos, amenazan nuestros intereses y nos impiden el acceso igualitario a los recursos sociales y los derechos humanos (residencia, ciudadanía, empleo, vivienda, status y respeto, etc.).

Siguiendo una vez más al autor holandés, podemos afirmar que las ideologías tienen el formato de un esquema de grupo que refleja los intereses sociales, económicos, políticos y culturales fundamentales. Así, pueden ser utilizadas para legitimar o velar el abuso de poder o, contrariamente, para resistir o denunciar la dominación o la desigualdad. Por lo tanto, “son necesarias para organizar nuestras prácticas sociales de tal modo que sirvan a nuestros intereses e impidan que los otros dañen tales intereses” (Van Dijk, 1999, p.95).

Aquí entra en juego entonces el concepto de legitimación, el cual constituye una de las principales funciones sociales de las ideologías. De esta forma, en el marco del análisis del discurso, puede definirse como un acto social (y político) que se lleva a cabo específicamente por el texto o la conversación. Van Dijk (1999) aclara esto: “Pragmáticamente, la legitimación está relacionada con el acto de habla de defenderse a

uno mismo, una de cuyas condiciones de adecuación es a menudo que el hablante provea buenas razones, fundamentos o motivaciones aceptables para acciones pasadas o presentes que han sido o podrían ser criticadas por otros” (p.321).

Las ideologías son un instrumento de legitimación. Las ideologías, como base de las representaciones sociales de los grupos y sus miembros, presuponen normas y valores. De esta manera, proveen el fundamento del juicio y la acción. La importancia de mencionar la cuestión de las ideologías es que pueden ser definidas en términos de su papel en la legitimación de la dominación. En definitiva, la ideología y la legitimación interactúan en el control de las relaciones entre grupos, como las de poder, dominación y resistencia.

En este trabajo de investigación se escoge hacer foco en las estrategias de los funcionarios gubernamentales debido al lugar que ocupan en la realidad social. Esas estrategias se desarrollan en el campo de negociación en el que luchan, se definen y se ponen en común los sentidos, entre otras cosas, sobre el acto de protestar y reclamar. De este modo, cobra relevancia mencionar el concepto de campo, noción fundamental en la teoría de Pierre Bourdieu (1995). El autor describe la sociedad mediante la metáfora del espacio social, el cual está definido por posiciones y está constituido por diversos campos, a los cuales corresponde un determinado tipo de capital. Los campos se presentan como espacios estructurados de posiciones cuyas propiedades dependen de su posición en el espacio social.

Un campo se define, entre otras formas, definiendo lo que está en juego en su interior. Dentro de cada campo se instala una dinámica que consiste en constantes luchas por obtener capital. La estructura de un campo es un estado de la relación de fuerzas entre los agentes o las instituciones que intervienen en la lucha, o de la distribución del capital específico que ha sido acumulado durante las luchas anteriores y que orienta las estrategias ulteriores.

De esta manera, también es preciso mencionar otro concepto central de la obra del mismo autor, el de capital. Cuando Bourdieu (1995, p.24) describe la sociedad mediante la metáfora del espacio social, no alude al mismo como un espacio físico, real, geográfico, sino que se define por posiciones. Es un espacio de relaciones, multidimensional y dinámico, constituido por diversos campos, a cada cual corresponde un determinado tipo de capital. Hay tres principales tipos de capital: el capital social se refiere a los contactos y las relaciones de los agentes; el capital cultural, asociado al conocimiento científico, el arte, la ciencia, la educación, etc. y el capital económico.

Existe también el capital simbólico, que es una traducción en términos de legitimidad de los otros tipos de capital. Cualquier tipo de capital puede transformarse en capital simbólico, al ser reconocido como socialmente legítimo. Cada agente se ubica en una determinada posición en cada campo según la cantidad de capital del que tenga posición. De esta manera, el capital refiere a lo que está en juego y es lo que permite participar a los agentes en un determinado campo social.

1.2 - Estrategia metodológica

En primer lugar debe señalarse que la intencionalidad que se persiguió en el presente trabajo fue la de comprender la realidad social que se estudia, y no la de comprobar o verificar dimensiones previamente definidas sobre ella. Así, el abordaje del objeto de estudio se llevó adelante desde una postura descriptiva, reflexiva e interpretativa de las acciones humanas, por lo que desde dicha aproximación, y haciendo uso de un marco metodológico cualitativo, se procuró dar cuenta de representaciones, significaciones, prácticas y procesos sociales.

A partir de ello, y teniendo en cuenta que el objetivo general del proyecto es indagar el discurso de los funcionarios gubernamentales de la provincia de Neuquén en torno a la protesta social y a los sujetos que en ella participan, se adoptó una perspectiva metodológica cualitativa, la cual se enmarca dentro del paradigma interpretativo, “...cuyo supuesto básico es la necesidad de comprensión del sentido de la acción social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes” (Vasilachis de Gialdino, 1992, p.9).

El diseño escogido para dar respuesta a los objetivos de la investigación fue de tipo descriptivo-explicativo, de modo de poder dar cuenta no sólo del significado que encierran las “huellas textuales” de los funcionarios, sino además del contexto en el cual tienen lugar sus palabras. En definitiva, analizar el discurso y a la vez, describir el marco en el que los dichos fueron efectuados.

Se trabajará con el análisis del discurso, en tanto campo interdisciplinario. El análisis aquí propuesto exige apelar no sólo a los saberes lingüísticos sino también a los de otras ciencias, ya que son las que pueden dar cuenta de las “prácticas sociales”. El

análisis del discurso devela lo que el sujeto no se propone decir pero dice por las opciones que hace. Esto habla de cómo los sujetos tienen un dominio parcial sobre su palabra, en la medida en que también es metafóricamente hablado por otro. De esta manera, no se pretende aquí ser un especialista de la interpretación de los textos, sino básicamente construir procedimientos que reflejen la acción estratégica de los sujetos.

Van Dijk (1990) explica uno de los propósitos de este tipo de abordaje: “El principal objetivo del análisis del discurso consiste en producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje al que hemos denominado discurso. Estas descripciones tienen dos dimensiones principales a las que podemos denominar simplemente textual y contextual. Las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales con diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores socioculturales” (p.47). De esta manera hay una orientación hacia el proceso, por lo que no se hace foco sólo en la estructura de los textos, sino que se apunta enfáticamente en la naturaleza estratégica de la producción y la comprensión del discurso.

Específicamente, se utilizará la herramienta metodológica conocida como Análisis Crítico del Discurso (ACD), la cual surge en el campo de la lingüística y parte del supuesto de que el lenguaje no es transparente y de la idea de que se presta muy poca atención al papel del lenguaje en la lucha por las relaciones de poder. De acuerdo a Wodak (2000) tiene como objetivo descubrir, desmitificar ciertos procesos sociales y hacer transparentes y explícitos los mecanismos de manipulación, discriminación, prejuicio, demagogia y propaganda.

“El análisis Crítico del Discurso interpreta el discurso – el uso del lenguaje en el habla – como una forma de “práctica social”. El hecho de describir el discurso como práctica social sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan. Ahora bien, una relación dialéctica es siempre bidireccional: el suceso discursivo está moldeado por las situaciones, instituciones y estructuras sociales pero a su vez le da forma. Otra manera de expresar este fenómeno es decir que lo social moldea el discurso pero que éste, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de estas y de los grupos entre sí. Las constituye en el sentido de que contribuye a transformarlo” (Fairclough y Wodak, 2000, p.367).

La elección de dicho enfoque se sustenta en la creencia de que desde esa óptica es posible efectuar un aporte al estudio de conflictos y problemas de relevancia social, en este caso una trama que culminó con el asesinato de un docente por parte de las fuerzas de seguridad. Siguiendo a Van Dijk (2003a) es posible afirmar que los rasgos que asume el discurso puede ser síntoma o forma de consolidar diferencias entre clases, entre razas, entre sexos, entre grupos, en razón de que el discurso desempeña un papel fundamental en la reproducción y mantenimientos de los procesos políticos de decisión.

De esta manera, las pautas metodológicas diseñadas y adoptadas responden a los lineamientos del ACD, pero son propias y surgieron producto de la utilidad que presentaban para cumplir los objetivos y fines investigativos. En este marco, se efectuó la lectura de los ejemplares del Diario “Río Negro” publicados entre diciembre de 2001 (crisis política, económica y social que estalló en todo el país y que derivó en la caída del gobierno de De la Rúa) y abril de 2007 (asesinato del docente Carlos Fuentealba) bajo el objetivo de indagar las representaciones sociales producidas por los representantes del Estado neuquino.

La delimitación del recorte responde a una lógica propia, construida en función de aquello que resultara más idóneo para el trabajo. De esta manera, si el punto de partida de la construcción del objeto de estudio fue la muerte del docente Carlos Fuentealba, el rastreo en el tiempo llevó a la conclusión de que lo más pertinente sería abordar el proceso en el cual se expresa una determinada lógica discursiva. Así, se verificó que diciembre de 2001 constituyó un quiebre en múltiples sentidos, y que en el aspecto discursivo era posible advertir un punto de inflexión a partir del cual empezar a captar el proceso que luego desembocó en el fusilamiento del maestro por parte de la policía provincial.

Es decir, si bien la gestión de Sobisch se enmarca en una manera de gobernar y gestionar la provincia cuyo inicio se halla en el comienzo mismo de su segundo mandato (gobernó Neuquén en los períodos 1991-1995; 1999-2003 y 2003-2007), para los fines de este trabajo el recorte se efectúa a partir de la crisis política, social y económica de diciembre de 2001, y finaliza con la muerte de un trabajador de la educación en abril de 2007.

Del mismo modo, es importante aclarar los motivos por los cuales se escogió la fuente que proporcionó los datos que sirvieron para el análisis. Si bien resulta una fuente que no es absolutamente pura, es decir, es una fuente sesgada en tanto fuente periodística, su elección obedeció a que resultaba la más pertinente debido a varias

razones. El Diario “Río Negro” es el de mayor tirada en la región, el que mayor caudal informativo manejó sobre la política neuquina, y pese a estar totalmente en contra de la gestión de Sobisch, el periódico patagónico tiene una línea editorial liberal. Durante todos y cada uno de los conflictos dejó en claro su postura en contra de los cortes de ruta y de los piquetes, así como de los reclamos salariales de los trabajadores. De esta manera, “caos”, “irresponsabilidad gremial” y varios calificativos en desmedro de los protagonistas de la protesta social eran publicados desde las páginas del diario.

“Río Negro” desde su origen fue un medio regional. Su planta impresora está en General Roca (provincia de Río Negro), pero posee una redacción dispersa. Páginas enteras del diario se editan en Neuquén a través de una vinculación digital y las corresponsalías y agencias cubren tanto el territorio neuquino como el rionegrino. El matutino fue uno de los pocos medios con una opinión diferente de la del gobierno neuquino, junto con la publicación mensual “8300” (hoy inexistente) y algunas radios de pequeño alcance. Allí radica el por qué de la elección de la fuente, puesto que de haber escogido al otro diario regional, “La Mañana del Sur” (en 2003 cambió su nombre y pasó a denominarse “La Mañana de Neuquén”), la obtención de datos no hubiere sido tan rica y compleja dada la simpatía y apoyo de este matutino a la gestión sobischista.

En este marco, lo que se escogió para comprender las representaciones e imágenes que los funcionarios construían en torno a la protesta social fueron las declaraciones públicas, es decir, las citas directas textuales, las “entrecomilladas”. En los casos en los que las mismas prestaban a confusión, fueron cotejadas con las vertidas en otros matutinos de manera de poder controlar el sesgo. Es decir, la búsqueda de declaraciones no se limitó a las publicaciones de este diario, sino que en muchas oportunidades, y cuando ciertos indicios así lo demandaban, se llevó adelante la lectura de ejemplares del otro diario regional y de diarios nacionales como “La Nación”, “Clarín” y “Página/12”. Asimismo, los estudios sobre el tema, ya sean libros o tesis al respecto, también colaboraron en la búsqueda de una comprensión lo más fidedigna posible de los sucesos y procesos en los que se enmarcan las declaraciones formuladas por los funcionarios.

En los años abordados en este estudio, el partido gobernante se esforzó en ejercer su influencia sobre la prensa, procurando mantener controlados a medios y periodistas. El despliegue propagandístico, producto de las intenciones de Sobisch de posicionarse como un candidato presidenciable, incluyó un amplio aparato informativo que llegaba a todos los rincones de la provincia y que incluyó informativos radiales y

televisivos donde se exaltaba la acción oficial y la figura del Gobernador. Tal como señala Verdú (2009), “se invisibilizan los hechos represivos directos mediante un control sobre los medios de prensa, que sistemáticamente ocultan los casos de gatillo fácil, las denuncias de torturas, los aprietes policiales o de patotas oficiales a militantes, la existencia de presos y de miles de encausados por razones políticas. Sólo un ínfimo porcentaje de esos hechos logra perforar el muro de silencio mediático, especialmente aquellos casos que permiten al propio gobierno mostrar su ‘independencia’ de los perpetradores, como si guardiacárceles, policías, jueces o grupos de choque del partido oficial le fueran completamente ajenos” (p.211). Aquí se halla entonces otro de los motivos que justifican el por qué de la fuente escogida y la posibilidad de encontrar allí un mayor número de elementos que puedan aportar al enfoque planteado.

De esta manera, a partir de un extenso corpus de datos obtenidos se procedió a la puesta en relación de ciertos rasgos discursivos que se fueron identificando con saberes no lingüísticos. Lo central, entonces, es la selección de las “huellas” (Verón, 1987, p.17), las cuales se convierten en indicios reveladores de regularidades significativas. Las huellas son propiedades del discurso que se relacionan con los procesos de producción social del mismo. Pueden hallarse desde huellas de valoración, de interpretación, ideológicas de quien produce el discurso, hasta huellas relacionadas con las condiciones sociales en que fue escrito.

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación se utilizaron en especial los aportes desarrollados por uno de los fundadores del ACD, Teun Van Dijk. En este sentido fueron importantes las denominadas “macrorreglas” (Van Dijk, 1996), ya que aunque se aplican en las notas periodísticas, aquí sirvieron para reducir la cantidad de información y para analizar el contenido de las declaraciones. De esta manera, “omitir” (suprimir información que no sea relevante), “seleccionar” (de lo que se mantuvo luego de la supresión, se omite lo que carece de importancia), “generalizar” (de lo esencial se propone algo que contenga al todo, es decir, que es posible ya construir categorías analíticas) y “construir o integrar” (a partir de una deducción se construye la globalidad, utilizando los elementos constituyentes) se convirtieron en un insumo fundamental para el trabajo.

Las dos primeras son reglas de anulación, las dos últimas son reglas de sustitución. Las reglas permiten decir más o menos exactamente que es lo principal y lo secundario, según el contexto de cada texto. Y si bien organizan en cierta manera la

información extremadamente complicada del texto, aquí se las consideró de utilidad en tanto operaciones para reducciones de información semántica.

De las declaraciones que resultaban pertinentes para el análisis propuesto se abordaron las distintas estrategias y construcciones a través de las cuales aluden a los que protestan y a todo lo que rodea a los conflictos sociales. De esta manera, se llevaron adelante diferentes preguntas:

- ¿Qué representaciones producen los funcionarios gubernamentales respecto a la protesta social?
- ¿Cómo se identifica al que protesta?
- ¿Con qué atributos se los relaciona?
- ¿Qué figura del protagonista de las protestas surge de las declaraciones?
- ¿Qué interpretaciones realizan sobre los sucesos conflictivos?
- ¿El uso de la violencia institucional es legitimada?

Con dicho punto de partida, se rastreó en la búsqueda de los sentidos que aparecían de manera reiterada y se organizó y explicó las creencias evaluativas básicas de los funcionarios, lo cual habla en un nivel que refiere a las representaciones sociales. Es importante tener en cuenta que el discurso de los implicados brinda los elementos informativos, será el análisis del investigador el que permitirá distinguir el proceso de la versión de los protagonistas. Ese ir y venir entre información y análisis, y requerimiento de nueva información va completando el espiral del trabajo de orden cualitativo.

Resulta crucial señalar también, en cuanto al recorte escogido, la intención de recolectar información bajo la necesidad de captar procesos y por lo tanto estar atento al desarrollo en el tiempo del fenómeno estudiado, tanto en lo que respecta a fenómenos objetivos como a la opinión y postura del gobierno.

Asimismo, los datos obtenidos no van a ser cuantificados, es decir, no serán codificados de tal manera que puedan ser tratados estadísticamente. Por el contrario, en un período amplio y específico de tiempo se efectuará un análisis cualitativo. Es importante señalar que con el abordaje de las declaraciones se procura que ello sea un medio y no un fin en sí mismo, para construir así un análisis reflexivo y que busque un pensamiento crítico.

En definitiva, se considera que el análisis aquí propuesto es el más pertinente puesto que desde ese lugar es posible hacer un aporte al estudio de conflictos y problemas de relevancia social. Los rasgos que asume el discurso pueden ser síntoma o forma de consolidar diferencias entre clases, entre razas, entre sexos, entre grupos, en

razón de que el discurso desempeña un papel fundamental en la reproducción y mantenimiento de los procesos políticos de decisión (Van Dijk, 2003).

1.3 - La mirada desde la comunicación

La perspectiva que esta investigación contiene concibe a la comunicación como un campo de investigación y formación multidisciplinario, que permite la reflexión desde la sociología, la psicología, la filosofía, la antropología, el derecho, la política, la historia y la economía, entre otras ciencias.

Aquí se abordará el fenómeno comunicativo como una práctica socio-histórica de construcción de sentido integrada al ámbito social y cultural. El objetivo es desnaturalizar significados dominantes y abordar la comunicación y la cultura como una relación en la que ambos conceptos no pueden entenderse el uno sin el otro.

“La comunicación no es todo, pero debe ser hablada desde todas partes; debe dejar de ser un objeto constituido, para ser un objetivo a lograr. Desde la cultura, ese mundo de símbolos que los humanos elaboran con sus actos materiales y espirituales, la comunicación tendrá sentido transferible a la vida cotidiana” (Schmucler, 1982).

De esta manera, la comunicación es concebida como un espacio transdisciplinar y multidisciplinar que se vincula directamente con el fenómeno cultural, que a su vez involucra lo político y lo social, en “su carácter de proceso productor de significaciones y no de mera circulación de informaciones” (Martín-Barbero, 2003, p.291). Siguiendo al autor, cabe señalar que los procesos de comunicación son procesos culturales. Dichos procesos no son transparentes y no siempre están visibles, puesto que existe una cierta opacidad que hace que la comunicación en su expresión no sea totalmente observable, visible y legible.

En la sociedad constantemente circulan y se enfrentan diferentes discursos que luchan por hacer prevalecer un sentido. Las declaraciones de los funcionarios del gobierno de Neuquén están insertas en un contexto cultural, lo cual implica una “batalla” por la definición social de los significados. Lo que se buscará es un acercamiento a las representaciones y su vínculo con las prácticas sociales.

Por lo tanto, resulta relevante reconocer la importancia de la dimensión simbólica, la producción de significados y representaciones sociales en los discursos que se producen y reproducen en las distintas instituciones y espacios sociales de los que participan. De esta manera, se analizará críticamente los mecanismos de naturalización y construcción de legitimidad de las desigualdades sociales en los discursos sociales.

Partir desde la comunicación implica partir de una realidad amplia en la que se ponen en juego relaciones de poder, es decir, la comunicación como campo en el que se producen relaciones de poder. Procesos de comunicación como espacios en los que se articulan y entran en conflicto distintas interpretaciones y significados acerca del mundo.

Los procesos comunicacionales se caracterizan por su opacidad, en tanto se encuentran mediados por relaciones de poder, por las asimetrías y las desigualdades características del tejido social. Las relaciones entre sujetos son siempre relaciones de poder, en tanto - mediante sus interacciones - diferentes grupos sociales chocan, resisten, negocian, construyen y reconstruyen la trama de la cultura. Así se produce una lucha en el campo de los sentidos socialmente construidos. De esta manera, el poder no es algo que se detente, sino que circula y se ejerce, se internaliza y atraviesa a los sujetos. Y la cultura aparece así como “arena de luchas”, como espacio de lucha por los significados válidos en una determinada comunidad.

En definitiva, la comunicación concebida como un proceso de interacción complejo en el que las personas participan con sus respectivas visiones del mundo. Y a través de este trabajo de investigación se pretende analizar la realidad social bajo la idea de que la opacidad de los discursos puede ser desterrada, o al menos disminuida en forma parcial.

Teniendo en cuenta todo esto y desde una mirada comunicacional, el aporte que la presente investigación persigue es el de explicitar los lugares desde los cuales se construyen los sentidos sobre la protesta social, las representaciones que se hacen sobre ella y quienes la protagonizan, en el marco de una disputa por la construcción del sentido.

1.4 - Antecedentes

El problema de investigación aquí planteado se nutrió y enriqueció de diversos trabajos relacionados, en mayor o menor medida, con el enfoque desarrollado en esta tesis. De esta forma, es importante señalar la importancia de la delimitación del objeto de estudio. Si bien existen planteamientos de problemas que giran en torno a cuestiones que también aquí se abordan, en este trabajo se va a disponer de información distinta, en la medida de que se trata de un enfoque particular y específico, propio también del marco teórico que se construyó. En definitiva, de alguna manera se resignifican los trabajos realizados sobre la temática aquí abordada y se propone una mirada nueva y singular.

Los trabajos más significativos que merecen ser señalados como antecedentes al objeto de estudio aquí propuesto son cuatro. En primer lugar, “Experiencias y mediaciones de criminalización de la protesta social”, tesis realizada por Fabián Atilio Viegas Barriga en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), donde se analizan los casos de Gabriel Roser y de los ex-trabajadores de YPF – PM. La misma se propone como objetivo reconocer las experiencias donde se visualicen de manera simbólica y concreta la criminalización de la protesta social. De allí es posible recuperar el funcionamiento de la criminalización y la existencia de los múltiples factores que participan en su construcción.

En segundo término, “La construcción de representaciones sociales en torno protesta social y a la represión institucional”, tesis realizada por Matías Artese en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, para optar al título de Doctor en Ciencias Sociales. Allí se abordan seis estudios de caso entre los años 1996 y 2002 y se rastrea en los discursos y a través de entrevistas indicadores que den cuenta de la construcción de representaciones sociales referidas a la violencia institucional aplicada en los casos escogidos. La estrategia metodológica incluyó un extenso registro y sistematización de documentos hemerográficos así como el traslado a los lugares en los que tuvieron lugar los episodios para escuchar las rememoraciones de los protagonistas. Artese comprueba que la estigmatización de la protesta en las calles y de la identidad piquetera fue denostada desde su primera aparición pública, es decir, que la criminalización de la protesta social no surgió post 2001 sino a partir de las experiencias originarias en Neuquén a mediados de los ’90.

En tercera instancia, “Criminalización y judicialización de la protesta social en Argentina: Cuando la lucha y la resistencia popular se vuelven delito”, tesina realizada

por Ana Musolino para obtener el título de Licenciada en Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, también amerita ser mencionada. Esta investigación se plantea como objetivo analizar las estrategias y respuestas implementadas desde el Estado para el tratamiento del conflicto social. Es valioso el aporte y la mirada que plantea Musolino, al pensar la criminalización de la protesta social como una cuestión de clase, lo cual refleja un carácter político además de jurídico en tanto construye tipos y rangos de ciudadanía y en función de ellas otorga diferentes políticas y formas de intervención y valoración de necesidades.

Por último, se mencionará un trabajo referido a Neuquén y a la protesta social, pero con objetivos muy diferentes al que aquí se propone. “Prensa escrita, violencia y protesta social. Neuquén, fines de 2001”, tesis realizada por Gerónimo Carlos Fernández Grecco en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (UNLP), estudia las representaciones que construyeron el Diario Río Negro y el Diario La Mañana del Sur respecto a las protestas sociales ocurridas en Neuquén en diciembre de 2001. Allí se aborda el posicionamiento de cada uno de los diarios, estableciendo similitudes y diferencias en el tratamiento de las noticias. Resultó importante de esta investigación cómo ambos matutinos vincularon directamente a los sujetos manifestantes con cualquier forma de violencia, al mismo tiempo que justificaron en repetidas ocasiones el uso de la fuerza policial. Fernández Grecco sostiene que a los diarios nunca les importó si quienes se movilizaban lo hacían pacíficamente, puesto que siempre estaban las fuerzas del orden “restituyendo la paz social en el lugar”.

CAPÍTULO 2

La gestación del discurso criminalizador

(Dic. de 2001 a dic. de 2003)

2.1 - El “Argentinazo neuquino” de diciembre de 2001

Diciembre de 2001 constituyó un parte aguas en la historia de la Argentina. Los acontecimientos que se extendieron en numerosos puntos del país, se expresaron con total crudeza en la provincia de Neuquén. En rigor, la movilización popular se venía manifestando a lo largo de todo el 2001, con numerosos cortes de rutas en toda la provincia y hasta puebladas en diversas localidades (en el mes de agosto en Zapala hubo una multitudinaria manifestación), que obligó al Gobierno provincial a tomar medidas estructurales con el objetivo de garantizar recursos productivos para todo el interior neuquino.

Sin embargo, el 30 de noviembre es el día en el que puede identificarse el inicio de una coalición de resistencia ante la crisis social en la región. Ese viernes los trabajadores de la fábrica de cerámicos Zanón protestaron frente a la casa de Gobierno Provincial, luego de haber recibido notificaciones de despidos ante un inminente lock out patronal. Junto a ellos se manifestaron también trabajadores estatales, que reclamaban por el rechazo al cobro de sus haberes mediante bonos. El accionar policial ante más de 2.500 manifestantes dejó un saldo de 9 heridos y 16 detenidos, previo uso de gases lacrimógenos y balas de goma.

Respecto a la intervención de las fuerzas de seguridad, el Ministro de Gobierno Jorge Gorosito sostuvo que la policía comenzó a reprimir cuando los uniformados “fueron agredidos” por los manifestantes y aclaró que dicha intervención se produjo en “el marco de lo que dice la Ley Orgánica de la Policía”. Por su parte, el diario Río Negro habló de escaramuzas y de “una verdadera cacería de trabajadores y dirigentes”, que obligó a varios heridos con balas de goma a ser asistidos en los hospitales, al igual

que una mujer con contusiones y varios afectados más por irritaciones que los gases lacrimógenos les ocasionaron.

En ese momento se conformó un frente político y social que aglutinó a diversos sectores para hacer frente a la crisis económico-social: trabajadores estatales; obreros de la cerámica Zanón; trabajadores desocupados; estudiantes y organismos de derechos humanos, todos ellos confluyeron ante un gobierno provincial que vivía una crisis muy fuerte, que se enmarcaba en la gran crisis económica y política nacional.

Así, en repudio al accionar de las fuerzas de seguridad del día 30, el 3 de diciembre casi cinco mil personas marcharon por la ciudad y pidieron reunirse con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. En esa protesta no se produjeron incidentes mayores, pero sí corridas y una persona detenida. Una carpa se había instalado frente a la casa de Gobierno, pero rápidamente un camión hidrante actuó y los piedrazos se desataron en la zona. Un vocero de la Policía señaló que la protesta de vecinos por el humo de un piquete, encabezado por desocupados de un barrio, fue la razón por la cual se abrió paso al camión hidrante.

El 4 de diciembre el gobierno provincial anunció que no podía pagar los salarios porque la Legislatura no había aprobado el pago a través de bonos, frente a lo cual decidió fragmentar el pago en dos cuotas. Los diversos sectores se pronunciaron en contra de esta medida y el día 7 de diciembre, una vez efectivizada la decisión de pagar sólo el 50% de los haberes, la respuesta se hizo visible en la calle. Alrededor de cuatro mil manifestantes se movilizaron a Casa de Gobierno y los trabajadores estatales lanzaron un paro por tiempo indeterminado. La respuesta del gobierno fue expresada por el Vicegobernador Jorge Sapag: “Es ilegítimo no trabajar en los hospitales, en las escuelas. Este es un paro por las dudas. ¿No ven lo que pasa en la República? El país volcó, descarriló” (Diario Río Negro, 11/12/2001, p.8).

La siguiente jornada conflictiva fue la del 13 de diciembre. En rigor, fue de las más conflictivas en la historia de la capital provincial. Al producirse un día jueves, los diarios regionales la compararon con el “jueves negro” del 9 de octubre de 1997, cuando se produjeron saqueos y destrozos en numerosos comercios debido a que la Legislatura había convalidado una reducción salarial. Sin embargo, en esta oportunidad la envergadura de los acontecimientos no radicó en los 13 heridos y no menos de 6 detenidos, sino en las circunstancias que se vivieron en la jornada en la cual una huelga general nacional oficiaba de contexto. Si bien en varios puntos del país se registraron incidentes, en la capital neuquina el descontento social fue extendido y dejó varios

comercios y entidades bancarias destrazadas, con una manifestación protagonizada por casi cinco mil personas y con varios piquetes en el centro neuquino. A lo largo de casi cinco horas la policía actuó con balas de goma y gases lacrimógenos, los cuales fueron arrojados en forma indiscriminada incluso en el Hospital Central, donde la gente buscaba refugio. Finalmente, por orden judicial las fuerzas represivas dejaron de sitiar el hospital y el comisario Oscar Canales señaló al respecto: “Nosotros no estamos adoptando una actitud disuasoria sino expectante, y nos mantenemos a 200mts. del hospital. Si entraron gases será porque los llevó el viento” (Diario Río Negro, 14/12/2001).

Los hechos ocurridos el jueves fueron repudiados por toda la plana oficial, lo cual incluyó una denuncia penal en la que se acusaba a los sindicatos de preparar, ordenar y dirigir los incidentes y de “infundir temor a la ciudadanía”. En los días posteriores, el clima de tensión continuó y el propio Gobernador reclamó la colaboración de la Gendarmería “con la Policía provincial en el mantenimiento del orden”. Al mismo tiempo, descartó la posibilidad de diálogo con los dirigentes de los gremios estatales, a los que calificó de “violentos e intolerantes”, que “se escondieron en un hospital” y actúan “como marginales” (Diario Río Negro, 14/12/2001, p.6).

La estrategia del partido para contener la conflictividad social estaba claramente formulada: reprimir, judicializar el conflicto, demonizar a las organizaciones gremiales y movilizar a las redes clientelares en los barrios para la distribución de la ayuda social. De manera programática, en la sede del partido, los discursos de los dirigentes presagiaron los detalles de la estrategia que adoptaría el gobierno del MPN para sortear la colosal crisis que se desataría en los próximos años (Bonifacio, 2011, p.216).

En ese marco, para las jornadas del 19 y 20 de diciembre (las más trascendentales en el plano político nacional, con la caída del Presidente Fernando De la Rúa) los sucesos conflictivos se volvieron a producir en Neuquén y los saqueos fueron numerosos. El día 19 por la tarde se produjo el primer saqueo en un supermercado “Topsy” e inmediatamente, como reacción en cadena, se desató una protesta que por casi 72hs. desbordó las instituciones de la capital, con consecuencias también en las localidades de Cutral Có y de Centenario. El día 21 unas 300 personas tomaron las instalaciones de la Subsecretaría de Acción Social de la Provincia, de donde se llevaron lo que allí había; posteriormente, la policía detuvo a más de 130 personas por presunta vinculación con robo de mercadería y destrozos.

En definitiva, durante casi 72 horas las tres ciudades más importantes de la provincia sufrieron saqueos y un clima de tensión ininterrumpido. Producto de los “enfrentamientos” (calificación otorgada por el Diario Río Negro) entre manifestantes y fuerzas policiales que hubo el 19 y 20 en la capital provincial, casi 200 personas fueron detenidas. La Multisectorial reclamó por “violaciones a los derechos humanos” por parte de la policía provincial, al mismo tiempo que se presentaron 25 denuncias por apremios ilegales y se llevó a cabo una marcha en protesta ante los allanamientos indiscriminados, las amenazas y falsas acusaciones a dirigentes. Del otro lado, el Gobernador se jactó de dar una respuesta ejemplar ante semejante nivel de conflictividad: “Pocas provincias reaccionaron como Neuquén” (Diario Río Negro, 24/12/2001).

Lo cierto es que la conflictividad social producto de años y años de derrotero neoliberal se cristalizaba en acciones directas de parte de los sectores desaventajados. Las estadísticas señalan que una importante franja de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza. Esa realidad se traducía en falta de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, marginalidad, exclusión, inseguridad física, social y económica. En definitiva: en desintegración social. Ello, en gran parte, condujo a un inevitable clima de violencia. Y el Estado neuquino apeló, como vía de resolución ante la conflictividad social, a la respuesta represiva, penal y punitiva. El abordaje de los conflictos se moverá de aquí en adelante en esos ejes.

2.2 – 2002: La demonización al que protesta inicia su marcha

Como se señaló anteriormente, la movilización popular y el malestar generalizado de amplias franjas de la población producto de la situación económica social que el país atravesaba no tuvo su inicio ni en noviembre de 2001 ni en diciembre de dicho año. Para los fines de este trabajo, se identifica a partir de ese período un quiebre en la manera de enfrentar y dar respuestas al proceso de exclusión social en Neuquén, con estrategias claras y concretas respecto a cómo contener la crisis y el ciclo de protestas que no avizoraba límites. De todas formas, si bien el alto nivel de conflictividad no nace allí, se verifica que la magnitud de los acontecimientos que tuvieron lugar el 19 y 20 de diciembre repercutieron fuertemente en la clase política

provincial: el poder político local actuó inmediatamente y desplegó el uso del aparato represivo como estrategia de disciplinamiento, al mismo tiempo que aceitó y fortaleció el sistema clientelista que ya venía desarrollando.

Entre los últimos días de noviembre y todo el mes de diciembre, quedó evidenciada la violencia material desplegada por las fuerzas de seguridad por un lado; y por el otro, un común denominador a la hora de observar y definir los sucesos acontecidos por parte de la clase política provincial, apelando a críticas y términos denostativos hacia los protagonistas de las movilizaciones. El uso de declaraciones con una fuerte carga negativa para con aquellos sectores que llevaron adelante protestas y paros fue una constante en los funcionarios, desde la dirigencia de menor rango hasta llegar a la máxima autoridad política. Así, se sucedieron en ese período ejemplos de este tipo:

- Gloria Sifuentes, Presidenta de la Seccional del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de Neuquén Capital: En marzo, cuando deba iniciarse el ciclo lectivo, “Iremos a las escuelas para exigir a los docentes que den clase sí o sí a nuestros hijos” (Río Negro, 14/12-2001).
- Juan Carlos Lezcano, Jefe de la Policía de la Provincia, ante la consulta por heridos de balas de goma que no participaron de los saqueos señaló: “Es posible que haya ocurrido, pero es inevitable en esas circunstancias” (Río Negro, 23-12-2001, p.20).
- Jorge Gorosito, titular de la cartera de Gobierno: Respecto a los dirigentes estatales sostuvo que “son enemigos de la sociedad neuquina y están en contra de las instituciones” (Río Negro, 14-12-2001, p.6).
- Jorge Sapag, Vicegobernador: A “esa banda de delincuentes los vamos a llevar a la Justicia” y con esos “intolerantes y fundamentalistas no vamos a dialogar”, que actúan “como marginales”, en relación a quienes protagonizaron los incidentes del 13 de diciembre (Río Negro, 14-12-2001, p.6).
- Jorge Sobisch, Gobernador: “El Gobierno actuará con toda la fuerza de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y de las leyes vigentes” (Río Negro, 14-12-2001, p.6).

Si bien en algunas oportunidades también se produjeron declaraciones de tipo conciliadoras o en cierto modo más comprensibles para con la situación que atravesaban los sectores en protesta (“No estamos contra los estatales, sino a favor de todos”, Gloria

Sifuentes; “No cabe duda de que actuaron activistas políticos, pero no es el momento de hacer acusaciones”, Jorge Sobisch), aquellas que descalifican o repudian el accionar de los protagonistas de las marchas son claramente mayoría, y además prevalecen en una ola de contradicciones fácilmente reconocible al efectuar el análisis del corpus de trabajo.

Con este “escenario discursivo” oficiando de contexto, el año 2002 se inició tan convulsionado como el final del anterior y los ecos de diciembre se visualizaron a lo largo del año. El 10 de enero desocupados cortaron la Multitrocha (Ruta 7) solicitando puestos de trabajo y la respuesta de la Policía fue nuevamente feroz. Cuatro horas de enfrentamientos, que se iniciaron según las fuerzas de seguridad porque una patrulla salió a perseguir a jóvenes que habían intentado asaltar una estación de servicio, generaron balas de goma y gases lacrimógenos. Una represión de similares características se repitió el 27 de marzo: también en la capital neuquina, durante dos horas, jóvenes con piedras y policías con balas de goma y gases fueron los protagonistas de la jornada, que arrojó un saldo de ocho heridos (dos de ellos pertenecientes a la fuerza de seguridad). En este caso, la “excusa” del accionar policial fue detener un intento de saqueo, puesto que un grupo de manifestantes pedía bolsones de comida para sus familias en un barrio del oeste de la capital. Y en octubre nuevamente la represión ante una protesta social. Un grupo de desocupados mantenía cortado el tránsito en el Barrio Industrial de la capital, descontentos porque el gobierno nacional había excluido a 2.500 beneficiarios neuquinos de los Planes Jefes y Jefas de Hogar¹.

Allí la represión fue ordenada por la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Alejandro Cabral, mientras el comisario a cargo del operativo explicaba que a los manifestantes se les había notificado que despejaran la ruta, para lo cual tenían dos horas. Como en ese lapso de tiempo nada de ello ocurrió, la Policía intervino con balas de goma y gases lacrimógenos desalojando la ruta 7, que une la capital con la localidad de Centenario. Inmediatamente luego del accionar policial, el Fiscal admitía errores estratégicos: “no tener en cuenta que el corte era muy cerca del Barrio Parque Industrial, que tiene diferencias históricas con la Policía, y que los vecinos iban a salir en respaldo de los manifestantes” y señalaba no poseer información referida a civiles heridos, pero sí de policías. Lo cierto es que la situación derivó en un choque feroz entre los

¹ El Ministerio de Trabajo de la Nación decidió dar de baja a los beneficiarios de los Planes Jefes y Jefas de Hogar que no tuvieran carga familiar. De esa manera, en Neuquén Capital se vieron perjudicadas casi 2.500 personas.

uniformados y quienes protagonizaban el piquete, sufriendo éstos últimos la peor parte. Uno de ellos relataba lo sucedido luego de recibir atención médica: “El médico me dijo que seguramente pierda la visión en ese ojo” (Río Negro, 30-10-2002, p.8). Menos de una semana después, el gobierno neuquino reactivó la instrumentación de los programas de promoción laboral, urgido por las sucesivas protestas sociales que se estaban desarrollando e inscribió a casi cien desocupados del barrio en el que durante cuatro días la ruta había estado cortada.

El nuevo escenario político que se había configurado post diciembre 2001 había generado el reajuste de las redes clientelares del partido gobernante, movilizándolo los recursos estatales para controlar la situación. Las quejas por el manejo de la asistencia social eran numerosas y muy fuertes, con denuncias desde la oposición por vínculos entre funcionarios y punteros y un manejo discrecional de los planes de ayuda social. Ese gigantesco clientelismo llegó al marco jurídico en 2002: en el mes de octubre el Caso “Zapallito” Molina², en el que se investigó una probable asociación ilícita entre funcionarios municipales y desocupados, derivó en la renuncia del Intendente de Centenario, salpicado por la resonancia de los hechos denunciados. Del mismo modo, también se presentaron en ese mismo período denuncias en los barrios Sapere y Parque Industrial, entre otros, de afiliaciones compulsivas al MPN a cambio de ayuda social.

Pero el sistema de corrupción no se acababa allí en lo que a cuestiones judiciales se refiere. Al mes del escándalo desatado por el caso de los subsidios, en los canales de televisión abierta nacional se difundió una cámara oculta³ en la que el gobernador estaba intentando imponer a tres abogados de su confianza en el Tribunal Superior de Justicia.

Por otra parte, la demonización y ataque hacia los dirigentes gremiales a través de los medios de comunicación, que se había iniciado en diciembre de 2001, se expresaba en el ámbito judicial. El 11 de enero cuatro gremialistas fueron detenidos acusados de coacción agravada y lesiones al administrador del Instituto de Seguridad

² Héctor “Zapallito” Molina estuvo veinte días detenido en 2002, junto a otros seis desocupados, en una causa judicial en la que se investigaba malversación de fondos públicos. En el año 2012, tras casi once años de abierta la causa judicial, la Justicia definió la prescripción de la causa. Molina, el ex intendente de Centenario y otros doce ex funcionarios municipales, vecinos y pequeños comerciantes fueron acusados de presuntas maniobras con subsidios.

³ Producto de una cinta de video se inició una causa judicial que nunca llegó a juicio. En noviembre de 2002 un diputado opositor al oficialismo filmó con cámara oculta al entonces gobernador Jorge Sobisch y al jefe del bloque de Diputados del MPN, Jorge Ferreira. Supuestamente le ofrecieron una coima para que prestar el quórum legislativo que necesitaba Sobisch para designar a dos vocales en el Tribunal Superior de Justicia.

Social del Neuquén (ISSN) y otros funcionarios de la entidad. Los sindicalistas estuvieron dos semanas detenidos hasta que fueron liberados, excepto uno de ellos. En ese marco, la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) daba a conocer cifras elocuentes de la persecución y criminalización de los protagonistas de la protesta social en la provincia y en el país. Lo que quedaba claro era que el Gobierno neuquino no quería pagar el costo político de reprimir y pretendía que la labor de contener la conflictividad social la ejerciera además la Justicia, por ello señalaba estar esperando a que alguien fuera preso.

De este modo, el año 2002 estuvo marcado por los embates del gobierno contra los que disentían con su proyecto. En febrero hubo declaraciones cruzadas con el gremio docente, producto de los reclamos de éste por obras de reacondicionamiento en los establecimientos educativos. Mientras Sobisch marcaba la cancha advirtiendo que “El sindicato no fija la política educativa” ni fija pautas sobre “obras escolares”, las diferencias entre las cifras brindadas por ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén) y el CPE (Consejo Provincial de Educación) respecto a los relevamientos efectuados sobre fallas edilicias era contundente. Finalmente el inicio de actividades se produjo sin medidas de fuerza, pero con varias dificultades en numerosas escuelas. Algunos colegios tenían problemas de infraestructura graves, lo cual impidió que dictaran clases hasta tanto no se completaran las obras requeridas.

Asimismo, en la marcha que tuvo lugar en la ciudad el día 24 de marzo al cumplirse el aniversario número 26 del último golpe militar, Sobisch arremetió contra los gremialistas nuevamente: “Vándalos que destruyeron los hiper, los bancos y atacaron a gente inocente. La gente inocente no tiene por qué pagarlo y los que destruyeron cosas tienen que tener el castigo que se merecen. Porque antes que organizaciones sindicales, son mafiosos” (Río Negro, 27/03/2002, p.19). En aquella oportunidad, varios incidentes y destrozos se produjeron en la ciudad, aunque las fuerzas de seguridad no llevaron a cabo ningún tipo de accionar desmedido.

Del mismo modo, con la misma lógica confrontativa aplicada a la dirigencia gremial, el Gobernador se expidió en abril sobre los trabajadores desocupados. Luego de que un grupo de personas “tomara” el edificio de la Subsecretaría de Trabajo reclamando la entrega de 200 subsidios, Sobisch las calificó como “personas que sólo quieren el desorden y pretenden que se los subsidie sin trabajar”. Estas declaraciones tuvieron como marco la defensa de un modelo de gestión a su criterio ejemplar: “Algunos sectores no se resignan a entender que somos una provincia ordenada que

apuesta a la producción y al empleo y están todos los días tratando de inventar algo para provocar un paro” (Río Negro, 13/04/2002, p.13).

En rigor, el reclamo había nacido debido a que las autoridades se habían comprometido en un acta, firmada el 7 de febrero, a entregarles 200 subsidios. El acuerdo entre las partes nunca se produjo, el Gobierno cortó el diálogo y la salida al conflicto llegó cuando los desocupados recibieron planes de Nación y no lo que originariamente estaba pautado. Las expresiones de Sobisch formaban parte de un corpus ideológico que el MPN ya tenía incorporado y lo divulgaba a viva voz. El dirigente del partido oficialista, Federico Brollo, en un acto de jóvenes del MPN realizado en junio, felicitaba a éstos “porque no se han dejado arrastrar a los piquetes y la quema de cubiertas” (Río Negro, 30/06/2002, p.14). Asimismo, en agosto un documento de la Seccional de la capital neuquina repudiaba la convocatoria de los trabajadores estatales a una marcha en reclamo por mejoras salariales. En dicho documento se afirmaba: “estos señores de la CTA pretenden que esos dineros pasen a engrosar sus propios bolsillos”, en alusión a que el Gobierno reconocía un “mejor momento económico”.

Lo cierto es que Neuquén pese a la gravísima situación financiera que atravesaba el país, recibía ingresos muy por encima de la media del resto de las provincias (por regalías petrolíferas fundamentalmente), y al mismo tiempo era una de las jurisdicciones que presentaba mayores conflictos sociales. La continuidad de los paros de los estatales neuquinos pese a que recibían sus sueldos en tiempo y forma contrastaba con, por ejemplo, el caso de la provincia de Río Negro, en la que los paros presentaban una menor frecuencia a pesar de que sus trabajadores cobraban sus sueldos con meses de retraso y en un alto porcentaje en Lecops.

Esa formidable caja de la cual disponía el Gobierno, producto esencialmente del excedente cada vez mayor en la recaudación de regalías petrolíferas debido al aumento internacional del precio del barril de petróleo, empezó a ser puesta en discusión por diversos sectores. Sobisch, acorde a un estilo cada vez más definido y claro a la hora de expresarse respecto a sus interlocutores, fue terminante: “Qué me vienen ahora con que el presupuesto se haga ahora de tipo participativo. En Neuquén el presupuesto lo manejarán las autoridades legítimamente elegidas (...) Si alguien quiere hacer asambleas públicas para determinar el presupuesto, que primero gane las elecciones. Mientras eso no ocurra el presupuesto lo van a ejecutar las autoridades”. Una iniciativa del Partido Justicialista (PJ) referida a que los montos “extras” recibidos por regalías sea

definido por todos los sectores de la sociedad fue el detonante de las palabras del Gobernador: “Esperen un año y ganen las elecciones”, sentenció (Río Negro, 06/10/2002, p.9).

En definitiva, lo que se desprende de cada una de las intervenciones de los funcionarios hasta aquí mencionados es la presencia de un lenguaje en el que no hay respeto por las minorías y los sectores más vulnerables. Siguiendo a Gargarella (2006) por momentos aluden a la idea de “un Estado que habla exclusivamente el lenguaje de la violencia, en lugar de optar por un discurso destinado a la “educación moral” de sus ciudadanos para promover en ellos sentimientos de reciprocidad y solidaridad. Esta idea el autor la aplica para con el sistema jurídico argentino, criticando a los jueces que no les brindan protección a las minorías en relativa desventaja en cuanto a recursos de poder. Alude a un conjunto de medidas que frente a cortes de calles, rutas y otras formas similares de protesta derivan en una “criminalización de la protesta social”. En el piquetero deberíamos ver, siguiendo al autor, a un actor de una democracia exigente por su “gesto valiente, meritorio, aun heroico”, al movilizarse en condiciones de vulnerabilidad para demandar por derechos que la Constitución le ofrece, pero que el sistema político no hace operativo.

Estos lineamientos pueden extenderse a la clase gobernante neuquina, en la cual no se observa ni respeto ni solidaridad hacia los sectores más desprotegidos y los que se enfrentan al gobierno, sino una prepotencia y una descalificación constante para con todo aquello que pueda alterar el “orden” de las cosas. El MPN nunca se enfocó en generar y asegurar mecanismos de convivencia respetuosa; por el contrario, se observa que el gobierno provincial construyó un marco de relación basada en la confrontación, la provocación y un manoseo permanente de la pobreza a través de su política clientelar.

2.3 - 2003: La huelga docente de 71 días y la represión que le quitó un ojo a Alveal

2003 fue un año político marcado por una confrontación permanente entre el gobierno provincial y los diferentes sectores opositores. En el mes de febrero, el Gobernador Sobisch decretó la devolución del 20% adicional por zona desfavorable a todos los estatales. Ese porcentaje les había sido recortado a los trabajadores en octubre de 1997, en aquel “jueves negro” en el que la ciudad se convirtió en un caos con casi 100

detenidos y múltiples destrozos en calles y comercios. La medida que adoptó Sobisch la efectuó en un momento clave de la política neuquina, con las elecciones provinciales a realizarse a finales del año, pero fundamentalmente de cara a los comicios municipales a desarrollarse a la brevedad en la ciudad capital. Allí, el MPN disputaba con el radical Horacio Quiroga (en ese entonces Jefe comunal, luego de las elecciones resultaría reelecto) el principal distrito.

Pese a la trascendental medida, los conflictos y cruces con el mandatario fueron una constante. Justamente al tratarse de un año electoral, la enorme cantidad de discusiones o enfrentamientos discursivos se potenciaban al máximo y cada sector especulaba con sacar la mayor tajada posible a la hora de la distribución de los ingresos de una provincia realmente privilegiada, con recursos de sobra debido a los beneficios que la devaluación le había generado. El inicio de año respecto a las protestas sociales y la conflictividad no fue el mejor. Ya en la segunda quincena de enero se desató el primer conflicto, que en rigor es absolutamente minúsculo, pero que dará la pauta de la estrategia adoptada por el Gobierno ante los reclamos de diferentes sectores de la sociedad.

En este caso los protagonistas fueron los miembros de la Comunidad Mapuche, que reclamaban la propiedad de unas tierras ubicadas al pie del Cerro Chapelco en San Martín de los Andes. Allí tuvo el lugar el incidente, luego de que unos 40 manifestantes agraviaron al Gobernador producto de la negativa de éste a recibirlos. Un forcejeo y algunos tumultos con los policías llevaron a Sobisch a vivir un mal momento: “Los intolerantes tendrán que responder ante la Justicia”, afirmó. En el mismo sentido, el Secretario de Turismo Raúl Miguel señaló respecto a los episodios: “son las mismas personas que año tras año vienen cortando la ruta, deteriorando cada vez más nuestra imagen, haciendo de esta manera cada vez menos confiable nuestro destino turístico, hoy por hoy, única fuente de ingreso genuino de nuestra gente” (Río Negro, 20/01/2003, p.8). Inmediatamente la seccional local del MPN emitió un comunicado repudiando los hechos y el blanco elegido para atribuir responsabilidades estaba explicitado: “...hechos de violencia provocados por agitadores políticos y gremiales, incentivando a grupos minoritarios de las comunidades mapuches a elegir un camino equivocado para evacuar sus reclamos”.

El incidente si bien puede ser menor, describe los rasgos que caracterizarán al discurso oficial sobre los protagonistas de reclamos: “El tema está en la Justicia, y por

ello no pienso recibirlos porque soy respetuoso de la ley”⁴ (Río Negro, 19/01/2003, p.16). Esa idea de “no diálogo”, de no poseer interlocutores ajenos al oficialismo ni de aceptar reuniones con sectores gremiales que solicitaban encuentros de debate, darán forma a la actitud que el partido gobernante tomará de aquí en más.

Mientras tanto, el accionar represivo de las fuerzas de seguridad seguía intacto y conservaba las características que había expresado en 2002. El día 7 de mayo en la localidad de Zapala (ubicada a casi 200km. de la capital provincial) un centenar de subsidiados de Vialidad Nacional reclamaban en ese edificio un incremento salarial, y como metodología de protesta llevaron adelante la “toma” del establecimiento. El saldo de aquella jornada fue de seis detenidos y varios heridos, con un feroz operativo policial que incluyó gases lacrimógenos, balas de goma y la indignación generalizada luego de los episodios. Una persona debió ser internada con lesiones de bala de goma, ante lo cual el juez que intervino en el caso señaló ante la prensa sorprendido: “Le pedí expresamente al jefe del operativo que no se registraran heridos”⁵. El propio Intendente de la localidad, Raúl Podestá (representante del partido Frente Grande, opositor al oficialismo provincial) también se manifestó muy ofuscado y repudió enérgicamente la represión emprendida por las fuerzas de seguridad. Desde las filas del MPN quién salió a dar testimonio sobre los hechos fue el Ministro de Gobierno, Oscar Gutiérrez, el cual instó a “desinstalar la anarquía” de la sociedad. Además de esa, otras declaraciones también fueron por demás contundentes:

- “No se puede prender gomas y cortar calles donde se quiere” porque la función que posee es “garantizar los derechos de quienes reclaman mientras lo hagan en el marco de la Constitución y la ley, y si lo hacen fuera de ese marco, pasan a delinquir, y quienes delinquen son delincuentes”.
- “Pareciera que acá hay que cuidar un resto ínfimo de la sociedad que sale a delinquir”.

⁴ Los mapuches reclamaban al gobierno provincial que escrituración de tierras. En ese contexto, el gobernador fue increpado el día 18 de enero ante su negativa a recibir a las comunidades en audiencias y bajo el argumento de que el conflicto estaba en manos de la Justicia. Las comunidades difundieron inmediatamente un escrito en el que marcaban la existencia de acuerdos formales desde 1999 y actas firmadas tanto por el Vicegobernador como por el Ministro de Desarrollo Social en mayo y septiembre de 2002, asumiendo el compromiso de entregar los títulos de propiedad a más tardar en noviembre de 2002. Finalmente en marzo se selló el acuerdo definitivo tras la intervención del Jefe de Gabinete José Brillo, quien accedió a los reclamos de las comunidades.

⁵ El jefe de ese operativo fue Julio Trepát, que en diciembre de 2003 pasó a ocupar la subjefatura de la policía provincial.

- En relación al accionar policial al desalojar la delegación de Vialidad, sostuvo que “no hizo más que cumplir una orden de la Justicia” (Todas del diario Río Negro, 11/05/2003, p.11).

En este contexto, luego de un año agitado y con numerosas cuestiones polémicas en relación al accionar de la Policía de Neuquén⁶, el Ministro de Gobierno manifestó en noviembre su respaldo a las fuerzas de seguridad provincial: “Por la institución policial de mi provincia pongo las manos en el fuego”. Lejos de asumir una mirada crítica respecto al accionar policial, Gutiérrez llevó adelante una enfática defensa, incluso en el medio de un caso de investigación que derivó en el desbaratamiento de una banda delictiva integrada por integrantes de la fuerza. A lo anterior agregó: “No somos Capital Federal ni Buenos Aires donde no sólo la inseguridad es todo un tema (...) En esto estamos orgullosos de decir que nuestra fuerza lleva un trabajo preventivo que la sociedad lo palpa día a día” (Río Negro, 07/11/2003, p.29).

2.3.1 - La cuestión educativa y el paro de 71 días

En lo que respecta al plano educativo, cabe señalar que previo a la apertura del ciclo escolar 2003, al igual que en el año anterior, se produjeron acusaciones cruzadas entre el gremio docente y el Gobierno. El primero había advertido que el ciclo no iba a comenzar en aquellos colegios en los que estuvieran trabajando las empresas constructoras, puesto que los antecedentes en la materia no eran para nada felices: “Tenemos el recuerdo de Silvia Rogetti”⁷, declaraba Arturo Nahuel, el Secretario General de ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén). Finalmente, luego de quedar en evidencia los numerosos problemas que varias escuelas tenían debido a la no finalización de las obras pautadas, el Gobierno se vio obligado a

⁶ El 14 de junio de 2003 fue visto por última vez el joven estudiante universitario Sergio Ávalos. Había concurrido a un boliche bailable con amigos, pero allí adentro se desencontraron y nunca más lo vieron. Se hicieron investigaciones y varios allanamientos al local nocturno, pero nunca se pudo probar nada. Para la querrela fue clara la intervención de las fuerzas de seguridad en la desaparición de Sergio, puesto que el personal de seguridad que cumplió funciones aquella noche eran policías que hacían adicionales.

⁷ En junio del año 2000 Silvia Roggetti, profesora de Educación Física, falleció al incrustarse el hierro de una malla metálica en un ojo. El accidente se produjo en una escuela en la que se realizaban obras de mantenimiento al mismo tiempo que se dictaban clases. Ese episodio marcó un quiebre entre el gremio docente y las autoridades, a partir de lo cual cada año el sindicato reclamó por la terminación de las obras escolares en tiempo y forma.

reconocer los inconvenientes, pero desviando en parte el foco del asunto: “Estamos jugando al límite. Los flujos migratorios se sienten con fuerza en los secundarios y esto está repercutiendo en la calidad educativa”.

En el mes de mayo un nuevo punto de conflicto afloró y las causas que lo originaron se hallaban en un plan de estudios⁸ que el CPE (Consejo Provincial de Educación) había aprobado en abril y puesto en funcionamiento en dos colegios. Una gran cantidad de estudiantes, apoyados por varios padres, se opusieron a esa medida y decidieron llevar adelante varias marchas en señal de repudio a la decisión gubernamental. Un reclamo de corte netamente técnico (los jóvenes rechazaban el nuevo plan y pretendían la implementación de planes de estudio comunes) adquirió un fuerte matiz político. Mario Pilatti, titular de la cartera educativa provincial, fue el responsable del Gobierno que se expresó respecto al conflicto suscitado. Sus declaraciones fueron muy elocuentes respecto a la concepción de “protesta” y “diálogo” entre los dos sectores en pugna:

- “Muchos de estos padres son militantes de partidos políticos fuertemente opositores al gobierno provincial”.
- “No vamos a discutir en el marco de las protestas”.
- “Quienes organizan las protestas y nos piden que atendamos a los estudiantes cuando marchan no tienen vocación de diálogo”
- “El hecho de que los jóvenes se movilizan es delicado porque se pueden generar situaciones imprevistas”.
- “Nosotros como funcionarios no tenemos por qué estar expuestos a estas manifestaciones, que no son constructivas y no pasan de ser meros aprietes. (Los gremialistas) no buscan el diálogo, a lo que nosotros estamos dispuestos. Pero confiamos en que la gente repudia este tipo de protestas” (Todas del Diario Río Negro, 24/05/2003, p.13).

La postura del gobierno fue inicialmente absolutamente intransigente: se negaba a dialogar en tanto las marchas se continuaran efectuando. Sin embargo, luego de una movilización que reunió a cerca de mil personas y otra, menos de diez días después, con casi dos mil manifestantes, obligó a Pilatti a recibir a los estudiantes y llevar adelante

⁸ El polémico Plan 320 fue instrumentado por el gobierno provincial con carácter experimental en dos colegios. El mismo estaba destinado a alumnos repitentes y adultos, pero era rechazado por la mayoría de los estudiantes y por el gremio docente puesto que, entre otras razones, se reducía la cantidad de materias dictadas y se las suplantaba por talleres.

una reunión. Pese a que había aseverado ese mismo día que no iba a dar de baja el Plan, finalmente luego de casi un mes de conflicto el CPE derogó el polémico “Plan 320”.

A los pocos días, el Gobernador Sobisch se pronunció en relación a este conflicto y afirmó: “Lo que si se nota a simple vista es que algunos sectores gremiales están buscando todos los días potenciar algún conflicto dado el período que estamos viviendo y yo voy a tener la suficiente tranquilidad y serenidad para tomar las medidas que sean necesarias para mantener la paz social” (Río Negro, 03/06/2003, p.14). Al mismo tiempo, si bien defendió el Plan 320, le pareció atinado que el CPE lo derogue, de manera de evitar conflictos.

Por otra parte, en el ámbito universitario también se producían episodios de protestas y descontento generalizado. A fines de junio en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) se iba a sesionar para reformar la composición del Consejo Superior y el Consejo Directivo, pero agrupaciones estudiantiles impidieron la entrada de los assembleístas. Dicha problemática - que se inició esa jornada pero que se extendió durante un período extenso - mantuvo paralizada a la Universidad por diversas protestas (que incluyeron la toma del Rectorado, con sede en la capital de Neuquén), no serán tenidos en cuenta para el corpus analítico de este trabajo. El abordaje de dicho conflicto, que en rigor incumbe no sólo a Neuquén, sino además a la provincia de Río Negro, merecería un tratamiento separado, específico y profundo, que tenga en cuenta las especificidades del caso. Sin embargo, es inevitable su mención, puesto que da cuenta del contexto local y regional en el que se desarrollan todos los restantes hechos descriptos.

Respecto al segundo semestre del año, se debe señalar que se trató de uno de los más ríspidos y difíciles en mucho tiempo en cuanto a las relaciones entre los funcionarios del gobierno provincial y el sindicato que nuclea a los trabajadores de la educación neuquina. Lo que se denominó como el “conflicto docente” se empezó a gestar en el primer semestre, pero luego de intentos infructuosos de parte del gremio de obtener una reunión con el Gobierno sobre diversas temáticas educativas, ATEN decidió encarar un plan de lucha. En rigor, los pedidos de audiencia que el gremio le solicitaba al Ejecutivo Provincial se habían iniciado en marzo. El día 27 de ese mes el Secretario General de ATEN declaraba ante la prensa: “Algunas cuestiones las puede solucionar el CPE, pero otras no; por eso queremos hablar con el Gobernador”. En aquella ocasión, el titular de Educación de la provincia recibió a los docentes y el

gremio le entregó un petitorio con once puntos, uno de los cuales aludía a un pedido de recomposición salarial.

Con el transcurrir de los días y luego ya de meses con falta de respuestas ante el pedido de diálogo con el Ejecutivo provincial, ATEN empezó a evaluar la posibilidad de efectuar medidas de fuerza. Así, en julio se debatió la realización de paros laborales luego del receso invernal, para los días 30 y 31. Inmediatamente, las voces de los funcionarios se levantaron contra la medida del gremio:

- “La propuesta que traen los gremios es absurda”. Y los acusó de “instalar una problemática en medio de un proceso electoral”, Claudio Salvestrini, Subsecretario de Hacienda (Río Negro, 11/07/2003, p.8).
- “La sociedad neuquina no se merece un paro prolongado en el marco de este contexto electoral, en el cual cada sector quiere obtener una porción mayor del presupuesto provincial”, Mario Pilatti, titular de la cartera educativa de la provincia (Río Negro, 11/07/2003, p.8).
- “Una medida injustificada y extemporánea”; “Los gremios estatales neuquinos no se han caracterizado por movilizarse en función de los intereses de los trabajadores, sino de sus intereses políticos en las internas que tienen”, Alfredo Pujante, Ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos (Río Negro, 31/07/2003, p.6).
- “Aquí hay campaña política y están tratando de sacar alguna ventaja”, Jorge Sobisch, Gobernador de Neuquén, en una declaración previa a las medidas de fuerza y ante la posibilidad de que se efectivice la huelga luego del receso invernal (Río Negro, 05/07/2003, p.8).

Con el trasfondo de la disconformidad gubernamental, las jornadas de paro se llevaron adelante y a partir de allí se inició un conflicto entre ATEN y el Gobierno Provincial que duró hasta el 8 de octubre. Fueron en total 71 días de conflicto, con declaraciones cruzadas desde los dos sectores. Mientras el sindicato buscaba una respuesta al petitorio de once puntos presentado en el mes de marzo, el Gobierno se rehusaba a abrir un canal de diálogo hasta después de las elecciones, previstas para el 28 de septiembre. Además, la negativa rotunda a otorgar un aumento salarial se amparaba en la escasez de recursos para financiar la suba, ante lo cual el gremio afirmaba la existencia de tales recursos debido al excedente extraordinario que se preveía ingresar a la provincia por regalías.

El Gobernador pidió licencia para poder dedicarse de lleno a la campaña política, de cara a las elecciones en las que ponía en juego su reelección, de manera que a partir de agosto quien se hizo cargo del Ejecutivo interinamente fue el Vicegobernador Jorge Sapag. Éste fue el principal portavoz del Gobierno, el encargado de llevar adelante las negociaciones con ATEN y remarcó, al inicio mismo del conflicto, la postura a adoptar: “La educación constituye una herramienta central para este gobierno”.

Desde el principio el Gobierno utilizó como pretexto para no entablar un diálogo con los representantes gremiales la realización de medidas de fuerza de ATEN. De esta forma, Sapag expresaba el día 7 de agosto: “Nosotros estamos tranquilos y ante peticiones responsables de diálogo vamos a dialogar responsablemente. Mientras hay medidas de fuerza no se produce un diálogo sino un monólogo o un diálogo forzado”. Además, agregaba: “Tienen el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de huelga, pero el estado provincial tiene también obligaciones de mantener la tranquilidad y la paz social y de defender el equilibrio económico financiero” (Río Negro, 08/08/2003, p.9).

La administración emepenista reposaba sobre la escasa - a su entender - repercusión de las huelgas y apostaba a la estrategia del desgaste. Sin embargo, las marchas y convocatorias que el gremio lanzaba eran sumamente numerosas. ATEN, en respuesta al planteo de Sapag de no reunirse en tanto las medidas de fuerza existieran, ofreció a mediados de agosto una iniciativa arriesgada y contundente: proponía dialogar en una mesa de discusión buscando un acuerdo, pero si ello fracasaba lanzaba un paro por tiempo indeterminado. El mismo Sapag se rehusaba a aceptar esa propuesta y arremetía contra el gremio: “Ahora sentarse con dirigentes gremiales porque así lo disponen o porque amenazan con una huelga a mí no me parece serio” (Río Negro, 23/08/2003, p.9).

A estas palabras le siguieron una tregua de dos semanas decidida por ATEN, puesto que a fines de agosto el gremio decidió efectuar dos jornadas de paro los días 27 y 28 y allí la postura del Gobierno fue algo más abierta de cara a la posibilidad de dialogar, pero más fuerte en cuanto a desacreditar la protesta de los docentes. De esta forma, por un lado Sapag habilitaba la instancia de diálogo bajo ciertas circunstancias: “Podemos sentarnos a discutir temas educativos, pero por el aumento no hay posibilidades porque no hay plata”; y por otro lado arremetía fuertemente contra ATEN una vez que éste ya había decidido lanzar un paro por tiempo indeterminado: “No son

tiempos para fundamentalismos”; “Ningún dirigente gremial se puede apropiarse de las escuelas”; “El paro no tiene eco en la población y se aprovechan de los tiempos electorales para insertarse en una sociedad que no los entiende” (Río Negro, 04/09/2003, p.9).

El mes de septiembre transcurría y el conflicto se agudizaba cada día más, sin un horizonte de resolución a la vista. El Gobierno apostaba cada vez más al desgaste e iniciaba una escalada discursiva desprestigiando y atacando al gremio. Mientras el día 5 de septiembre casi cinco mil personas marchaban por la ciudad, Sapag sostenía: “No hay recursos económicos disponibles. Y me pregunto ¿es legítimo reclamar lo que no se puede pagar? No hay dinero para pagar los reclamos demagógicos y electoralistas de los gremialistas” (Río Negro, 06/09/2003, p.8). Consideraba al paro “irracional” y mostraba una postura cada vez más férrea ante el conflicto.

La prolongación del conflicto llevó a la adopción de medidas cada vez más extremas y ATEN decidió, en el marco de las asambleas de discusión interna, realizar cortes de rutas. Dicha medida llevó a que se mantuviera bloqueado el puente carretero que une la capital de Neuquén con Cipolletti (Pcia. de Río Negro). Ante esa postura, Sapag inmediatamente arremetió “El corte es una actitud de provocación, pero el gobierno va a ser muy sereno y prudente. Sin embargo, mantendrá la firmeza de que se cumplan las leyes”. Respecto al movimiento de protesta cada día más prominente, afirmó que dichos movimientos “...tienen un alto contenido de especulación electoral, política e ideológica”, al mismo tiempo que aseguró establecer una instancia de diálogo “siempre y cuando levanten las medidas de fuerza y continúen garantizando los derechos de los niños” (Río Negro, 17/09/2003, p.9).

En esos días de gran tensión, otros funcionarios también salieron a reforzar la idea del Gobierno. El Ministro de Desarrollo Social Jorge Lara afirmó: “Ellos no quieren diálogo, quieren monólogo”; “Buscan el caos y del sector ideologizado que conduce todo” y “Vamos a ser muy prudentes porque nuestra ciudad y provincia están empeñadas en buscar salidas al tema de la crisis” fueron algunas de las reflexiones más significativas del funcionario. Al mismo tiempo, surgió la iniciativa conjunta del Intendente de la Ciudad de Neuquén Horacio Quiroga, y del de la de Cipolletti Julio Arriaga, quienes realizaron una presentación ante la Justicia Federal solicitando que se arbitren las medidas necesarias para evitar los cortes de los puentes.

Hacia el 20 de septiembre ATEN presentaba su pedido de audiencia número 32, otra vez sin éxito. El conflicto se agudizaba cada día más, ninguna de las partes cedía en

sus posturas y ante ese panorama arribó a la región el Ministro del Interior Aníbal Fernández, quién dejaba en claro la postura del Gobierno Nacional: “Lo primero que le dijimos (en relación a los dirigentes gremiales) es que estamos absolutamente en contra del corte de puente” (Río Negro, 21/05/2003, p.14). Al mismo tiempo, afirmaba que el Gobierno Nacional “no reprimirá a los manifestantes”. Inmediatamente el Gobernador Sobisch criticó a Fernández por “reunirse a escondidas con gente que altera la paz social” (Río Negro, 23/09/2003, p.8).

La postura de ATEN se iba endureciendo y ahora la decisión que las asambleas habían adoptado era la de cortar no sólo el puente que une Neuquén con Cipolletti, sino además el que comunica Centenario (provincia de Neuquén) con Cinco Saltos (provincia de Río Negro), dejando como única vía de comunicación libre entre ambas provincias el paso ubicado sobre el Dique Ballester (que cuenta con una sola mano de paso). Producto de esa decisión, el Gobierno decidió finalmente aceptar una reunión y el lugar asignado para que la misma se desarrollara era un ámbito neutral, el Obispado, acordado entre las partes. Previo a la reunión Sapag ya anticipaba: “No vamos a negociar nada”, dejando en claro la línea estratégica a asumir.

El encuentro se llevó adelante en los plazos establecidos pero no se arribó a un acuerdo. Ante ese panorama el gremio docente decidió profundizar las medidas de fuerza multiplicando los cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Frente a ello Sapag sí convocó a ATEN y fue terminante: “el diálogo se terminó”. Disconforme con la actitud adoptada por el gremio, les señaló que en lugar de levantar los piquetes, las rutas anegadas eran cada vez más. A su vez, el Ministro de Planificación, Alfredo Esteves, se expidió al respecto y acusó a ATEN de “antidemocrático y fascista” (Río Negro, 25/09/2003, p.6).

Por su parte, el Diario Río Negro publicó en sus páginas con absoluta claridad la postura que detentaba de cara al conflicto y más específicamente respecto a los cortes de ruta. “Irresponsabilidad gremial”, siembran el “caos” y críticas a la metodología adoptada por ATEN fueron una constante en el matutino, el cual a lo largo del período estudiado no modificó su posición. Si bien estuvo claramente enfrentado con el MPN, y en especial con Jorge Sobisch, dejó sentada su concepción de protesta social y los límites de ella.

Finalmente, las elecciones previstas para el día domingo 28 de septiembre, pese a los cortes de ruta, se desarrollaron con absoluta normalidad. El Juez Federal Guillermo Labate había intimado el desalojo pero la policía no actuó. Jorge Sobisch se

consagró nuevamente Gobernador de la provincia, luego de obtener el 56% de los votos válidos. Las rutas fueron despejadas en la madrugada del día posterior a los comicios, después de haber estado cortadas desde el 18 de septiembre.

Apenas Sobisch triunfó decidió abrir una mesa de diálogo, la cual ATEN aceptó. Sin embargo, no levantó el paro por tiempo indeterminado. Recién el día 6 de octubre se produjo la reunión en la que se llegó a un acuerdo y ATEN decidió levantar las medidas de fuerza luego de un conflicto sumamente extenso, en el que ninguna de las partes quiso ceder un solo centímetro y en el que los dos actores intervinientes adoptaron una postura férrea e intransigente. Una semana después del acuerdo, el Gobernador se despachó contra el sector que había estado en lucha: “Con los sueldos que se pagan hoy en la Argentina y en la provincia, pretender que este sea un reclamo serio es una barbaridad. Fue un reclamo político porque lo único que pretendían era que se suspendieran las elecciones en Neuquén” (Río Negro, 18/10/2003, p.16).

En rigor el reclamo docente se venía arrastrando desde comienzos de año. Las demandas del sector figuraban en un documento de once puntos, el cual hacía alusión a diferentes aspectos de la política educativa entre los cuales el salarial era tan sólo uno de ellos. En ese contexto, tanto el Gobernador Sobisch como el Vicegobernador al momento de cumplir interinamente dicha función (por ausencia del primero debido al pedido de licencia para dedicarse de lleno a la campaña electoral), se negaron a recibir a los dirigentes del gremio. Esa actitud confrontativa se extendió a todos los gremios estatales, pero con este en particular la dureza fue realmente marcada. Así, en lugar de concebir a estos dirigentes como representantes de intereses sectoriales y reconocerles dicho papel, los fueron colocando entre sus principales enemigos políticos. La cerrada negativa a recibirlos y a escuchar sus reclamos se presenta como un intento por torcerles el brazo y mostrarles quien manda.

Por otro lado, al mes siguiente de haberse alcanzado el acuerdo, un nuevo foco de conflicto en relación al tema educación afloró en la provincia. Y estuvo íntimamente vinculado a la larga lucha adoptada por el gremio a lo largo del año 2003. El Consejo Provincial de Educación implementó la Resolución 163, la cual obligaba a los directivos de las escuelas a informar qué docentes adhieren a un paro y quienes no (la misma ya había sido sancionada a fines de 2002).

La mención de la citada normativa tiene validez en el contexto en el cual se aplica, puesto que se trata de un claro intento de regular el derecho a huelga. En decir, consiste en un mecanismo que suele utilizarse en los casos en los que la represión

requiere de otra faceta. Si bien en la larga disputa entre el gremio y el Gobierno, que mantuvo cortadas las rutas por largo periodo de tiempo, no se llevaron adelante medidas represivas, un mes después del conflicto lo que se aprecia es una “vuelta de tuerca” al mecanismo represivo. Si bien la represión no fue física, si fue instrumentada desde lo legal. Es decir, el derecho a huelga se lo reprime de diferentes formas y una variante lo es la criminalización y otra también lo es la reglamentación excesiva. En definitiva, la estrategia del gobierno neuquino de cara a la contención de la conflictividad social fue clara: los demonios tienen nombre y apellido, por lo tanto, se debe saber con exactitud quiénes son cada uno de ellos.

2.3.2 - La tarjeta social y los “casi Kosteki-Santillán neuquinos”

Inmediatamente luego del conflicto entre el Gobierno y el gremio docente, un nuevo núcleo problemático se instaló en la provincia patagónica.: la bancarización de los planes sociales. El Gobierno decidió, después del contundente triunfo electoral y de forma unilateral, distribuir una tarjeta de débito para los desocupados. “Terminar con los punteros” declaraba el Presidente del Banco Provincia del Neuquén y uno de los principales impulsores de la iniciativa. Es decir, la idea era transparentar la ayuda social mediante la sustitución del pago en efectivo de los planes de desempleo por un crédito en una tarjeta plástica (provista por el Banco Provincia del Neuquén), que se podía utilizar sólo para compras de artículos de primera necesidad. La medida, aseguraban los funcionarios, perseguía un objetivo primordial: “Vamos a desterrar el clientelismo político”, afirmaba el Gobernador.

Para poder llevar adelante tal decisión el Gobierno estableció un calendario para censar a todos los desocupados (más de 25 mil personas en toda la provincia, cerca de 8 mil en la capital neuquina), y el primer día de empadronamiento fue el 25 de noviembre. Allí, un grupo de trabajadores desocupados se manifestó rechazando la aplicación de la tarjeta, puesto que pretendían conservar el manejo de los 150 pesos en efectivo. La protesta, que se realizó en la misma sede de encuentro entre los encuestadores y los desocupados (en el Estadio Ruca Che, ubicado en un barrio del oeste de la capital), derivó en una brutal represión que dejó un saldo de numerosos heridos - varios con

balas de plomo - y algunos detenidos. El saldo más lamentable se conocería en las siguientes horas: uno de los heridos había perdido un ojo.

José Alveal, trabajador ceramista, era la nueva víctima de las fuerzas policiales neuquinas. Junto a Heriberto Chureo, Aldo Velásquez, Rubén Troncoso, Claudio Muñoz, Eziser Zapata, Miguel López Navarrete, Jorge Peralta y Horacio Fernández recibió heridas de bala de plomo. Todos ellos se convirtieron en los “casi Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”. Pero Alveal perdió la visión de su ojo izquierdo producto de la salvaje agresión policial. Las balas en el barrio San Lorenzo fueron iguales a las de Avellaneda, aunque de casualidad el suceso no se transformó en otra masacre con víctimas fatales.

No hubo ningún tipo de explicaciones ni detalle alguno brindado por los funcionarios respecto a dónde había surgido la orden de reprimir. La única voz que enfrentó a los medios de comunicación fue la del Jefe de Gabinete Jorge Brillo: “La policía hizo lo que tenía que hacer, actuó en defensa de la gente, de las instalaciones y de la seguridad de las personas” (Río Negro, 27/10/2003, p.6). Quedaba claro que la metodología que el Gobierno aplicaba no era la de negociar y consensuar con los sectores en protesta; por el contrario, se delegó el conflicto en las fuerzas de seguridad. El saldo final: 34 personas heridas, una de ellas con 64 impactos de balas de goma que le causaron la pérdida de un ojo, 12 personas heridas con balas de plomo y siete personas intoxicadas por gases lacrimógenos, incluido un niño de cuatro años.

Al día siguiente cerca de tres mil personas se movilizaron para repudiar los hechos. Inmediatamente el proceso de empadronamiento fue suspendido por decisión del Vicegobernador, quien se encontraba a cargo del Ejecutivo debido a que Sobisch estaba en una gira de trabajo por Brasil. El objetivo del freno a la reinscripción era el de “mantener la paz social”, en propias palabras de Sapag. El Gobierno flexibilizó su plan informando rápidamente, frente a los episodios de protesta, que la tarjeta también serviría para extraer dinero en efectivo. Pero el empadronamiento fue nuevamente puesto en práctica. Al respecto, Brillo señaló que los incidentes se produjeron por un grupo de “120 revoltosos que quieren perturbar este proceso y no lo van a lograr, porque está la definición política clara del gobierno de seguir con este proceso”. También la subsecretaria de Seguridad, Justicia y Trabajo, Alicia Comelli se expresó sobre el conflicto: “Esta es una movida política. Y los medios periodísticos dan información falsa sobre el manejo de los planes” (Ambas en diario Río Negro, 26-11-2003, p.8).

Los funcionarios gubernamentales no pronunciaron palabras con tinte autocrítico o de repudio del accionar policial. El jefe de la Policía de la provincia, Juan Carlos Lezcano, una semana después de los hechos afirmó: “Nosotros en el uso de la fuerza pública hemos sido muy cautelosos durante toda la gestión, con líneas claras de cómo se debe trabajar. Lo hemos sido también en esta oportunidad, pero hay circunstancias de violencia y de agresiones permanentes en que la policía, dentro del marco que establece la ley, debe actuar también dentro de un marco legal”. (Río Negro, 30/11/2003, p.8). Y diez días después del salvaje accionar policial nuevamente se expresó la funcionaria Comelli, dejando en claro una vez más la esencia del pensamiento del Gobierno en casos de estas características: “Por el registro de los hechos que hay en la fiscalía y en la policía podría determinarse un exceso del uso de la fuerza en algunas circunstancias y si es así lo que nos queda claro es que el uso del arma es legítimo, el uso de la fuerza es legítimo pero tiene que tener un correlato con la justa medida de las circunstancias”. A ello agregó: “somos una de las policías del país que ha hecho una mayor depuración y sanción en abusos como esos y seguiremos en el mismo camino” (Diario Río Negro, 03/12/2003, p.15).

En relación a este caso cabe señalar que lo ocurrido allí fue un hecho gravísimo. Se usaron balas de plomo para reprimir la protesta y nunca se supo quién emitió la orden para que la policía actuara. La adopción de herramientas disuasorias muy difícilmente hubiese causado la pérdida de un ojo a una persona. Las fuerzas de seguridad se excedieron en sus procedimientos y actuaron con ensañamiento y salvajismo. Y luego quedó en evidencia un consentimiento del desborde represivo de la policía, que se extendió a todo el arco político oficialista. No hubo autocríticas ni condenas enérgicas por lo sucedido, sino justificaciones del proceder policial.

La represión a los manifestantes fue tan salvaje que los medios nacionales abordaron el conflicto. Lo señalado no es un dato menor, puesto que la metodología adoptada frente al conflicto se daba en el medio del intento del Gobernador Sobisch de lanzar su proyecto político a nivel nacional. De esta manera, el día de la casi masacre de Alveal se visualizó un escenario perfectamente delimitado: por un lado, las luchas y resistencias de las clases subalternas; por el otro, un Gobierno que apelaba a la represión para contener la protesta social y el conflicto social.

El MPN sentaba las bases de su estrategia ante los grupos desaventajados. La postura adoptada por el Gobierno desde el plano simbólico, evidenciada en la nula autocrítica de los funcionarios ante lo sucedido el 25 de noviembre con el ataque a

Alveal, fue reafirmada en la toma de decisiones inmediatamente posteriores a los hechos. El 16 de diciembre asumió Walter Cofré al frente de la Policía Provincial, mientras que como subjefe lo hizo Julio Trepát, quien había estado a cargo del operativo represivo en el Barrio San Lorenzo. Estos cambios de mando respondieron al nuevo mandato de 4 años que Sobisch iba a emprender, luego de haber alcanzado un triunfo contundente que lo habilitaba a continuar al frente de la provincia hasta 2007.

2.4 - Reflexiones parciales

Los sucesos de diciembre de 2001 daban cuenta de cómo la irrupción popular reflejaba el agotamiento político del sistema político, económico y social. La ruptura la marcaron las jornadas del 19 y 20 de diciembre, las cuales culminaron con la destitución del gobierno de Fernando De La Rúa, la sucesión de varios presidentes hasta la proclamación de Eduardo Duhalde, y un saldo de represión que marcará un antecedente en las políticas represivas que se sucederán.

En Neuquén, el partido gobernante montó una estructura clientelística y represiva. A partir de ello se pueden visualizar determinados marcos de lectura predominantes acerca de la conflictividad social, los cuales fueron impulsados por el gobierno ante los medios de comunicación. En ellos se subrayan las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, desatención en hospitales públicos, entre otros) o apuntan a denunciar su carácter “eminente político”.

La herramienta teórico-metodológica del análisis crítico del discurso permite abordar las declaraciones teniendo en cuenta la línea histórica que aquí se desarrolla. “Según el ACD todos los discursos son históricos y por consiguiente sólo pueden entenderse por referencia a su contexto. Así, la noción de contexto es crucial para el ACD, ya que explícitamente incluye elementos socio-psicológicos, políticos e ideológicos, y por tanto, postula un procedimiento interdisciplinar” (Wodak y Meyer, 2003). Numerosos autores que abonan esta perspectiva sostienen que el ACD debería basarse en una juiciosa teoría del contexto, entre los cuales se encuentra Van Dijk, quien afirma que la teoría de las representaciones sociales (RS) desempeña un papel principal.

En este sentido, las representaciones sociales constituyen una herramienta útil para visualizar el contenido de las declaraciones de los funcionarios. Si bien se trata de un concepto complejo, definido por una gran cantidad de autores, son relativamente fáciles de captar, pese a la complejidad de los fenómenos de los que da cuenta. Diferentes autores ponen énfasis en distintos aspectos, pero todos comparten el hecho de su importancia para la comunicación, la interacción y la cohesión de los grupos sociales.

La definición más precisa para los fines de este trabajo es la que las ubica como aquellas que “refieren a aspectos significativos de la realidad y se constituyen en sistemas de creencias, valores, ideas y prácticas que orientan y justifican los comportamientos de los individuos, así como en esquemas de pensamiento que permiten a los individuos interpretar, organizar y entender esa realidad y dominar el mundo social desde donde se ubican” (Sautu, 2007).

De esta manera, las representaciones constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Con las representaciones sociales se puede entender la dinámica de las interacciones sociales: la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente. Y a través de ellas las personas producen los significados que se requieren para comprender, evaluar, comunicar y actuar en el mundo social.

Del material recabado se desprende que el gobierno neuquino no trata de esconder la conflictividad, más bien de presentarla como criminal e ilegal. Sobisch considera que la conflictividad social no emerge producto del pesado lastre que dejaron las políticas de los 90's que excluyeron a enormes sectores de la población, sino que forman parte más bien de un presente ocioso en el que la vagancia y la apatía ocupan un papel fundamental en las grandes masas. Además, no cree Sobisch en la convivencia pluralista, más bien cree que el poder es uno solo y que pertenece al que gana. A menudo incurre en excesos verbales, equiparando a los desocupados con los vagos y desprestigiando a los piqueteros deslegitimando las razones de sus reclamos: “cortan rutas y destruyen la propiedad. De esta forma son ellos los que ejercen la verdadera represión al no permitirle a la gente ir a trabajar, a estudiar y a circular” (Río Negro, 26/06/2004, p.3).

Además, las RS expresan normas, prejuicios y estereotipos. La construcción de estos últimos implica básicamente asignar características comunes a los miembros de un

mismo grupo y marcar diferencias con relación a otros grupos. Con la creación de estereotipos en los que los luchadores sociales son negativizados, la situación que generan al protestar es concebida como caótica. Es decir, una figura es creada y de allí se deriva que su accionar perjudica y conspira contra otros. De este modo, se invierte la figura de la víctima, ya no es el que reclama por derechos no garantizados sino que emerge una supuesta víctima del hecho puntual de la acción emprendida por el protagonista de la protesta. El impedimento del tránsito, por ejemplo, hace que aparezcan los usuarios como víctimas de daños irremediables y entonces surgen los “rehenes del conflicto”, desvirtuándose la ecuación.

En este sentido, es necesario resaltar primordialmente que la expresión de un reclamo significa la desatención y/o violación previa de un derecho, ya que de otra manera el reclamo no existiría. Refleja, entonces, un incumplimiento estatal, y la necesidad de buscar un mecanismo para que el Estado en cuestión asuma la responsabilidad correspondiente. Los grupos desaventajados, siguiendo a Gargarella (2009), no están bregando por una abstracta reivindicación de sus derechos expresivos, sino exigiendo que se ponga fin a violaciones de derecho a la salud, educación, alimentación o vivienda. Pero para Sobisch los ejes son otros: “Es necesario defender la libertad individual de cada hombre y mujer. Y los piqueteros no pueden mandar más que la Constitución y la ley” (Río Negro, 26/06/2004, p.3).

Lo que se observa es una acción cultural de parte de los funcionarios dirigida a presentar las batallas por los derechos sociales como delitos y a los sujetos sociales que las promueven como delincuentes. Del mismo modo, a las protestas sociales se les oculta las motivaciones de las mismas, la legitimidad de las demandas y se enfatiza en las formas más o menos violentas de expresión del descontento social. Los funcionarios abonan la idea de que lo que está en curso no es una reivindicación de derechos, sino un delito.

Así, es en estos discursos donde se asientan los fundamentos del endurecimiento de las políticas represivas y de control social. Y en definitiva, las representaciones que generan en el imaginario de la población “presa de los que cortan calles”. Así, se desvía la atención de los problemas reales intrínsecos al sistema en su totalidad, posibilitando la instauración y perduración de las políticas generadoras de pobreza, desigualdad e injusticia.

CAPÍTULO 3

La mano dura y la tolerancia cero ante la protesta social (Dic. de 2003 a Dic. de 2005)

3.1 – La era Manganaro

El 10 de diciembre de 2003 es posible identificar un quiebre en lo que respecta al contenido del discurso de los funcionarios provinciales. Dicho quiebre se visualiza con la llegada al Gabinete de Ministros de Luis Manganaro, quién se convirtió en el flamante titular de la cartera de Seguridad y Trabajo. La asunción del funcionario se dio en el marco de un recambio de autoridades, producto del inicio del segundo mandato en forma consecutiva de Jorge Sobisch como gobernador provincial, el tercero en su carrera política (el primero fue entre 1991 y 1995).

El discurso que Sobisch emitió el día que asumió tuvo ribetes conciliadores: convocó “a todos los sectores, incluidos los gremios estatales” a una mesa de diálogo. Así, llamaba a la reflexión y al debate de cara al año 2004, que finalmente comenzó con la realización de “mesas de diálogo” en las que estuvieron todos los sectores del arco político no oficialista. Sin embargo, esta actitud del gobierno se sostenía tenuemente, ya que esos esfuerzos tendientes a consolidar el sistema democrático no guardaban relación con el contenido de las declaraciones que aludían a los sectores disidentes, especialmente a los protagonistas de la protesta social.

A la semana de asumir, Manganaro dejó en claro las características que adquiriría el discurso gubernamental. Las bases de su pensamiento respecto a la seguridad, la conflictividad social y los sectores que protagonizan protestas pueden observarse en las siguientes declaraciones:

- “Cortar rutas, sacarle dinero a los desocupados de los subsidios, destruir y saquear comercios, impedir transitar a la gente y golpear a los funcionarios, son algunas de las nuevas formas de esta represión que estamos viviendo hoy en día”.

- “Nos enfrentamos a un nuevo tipo de violencia, impulsada por intereses políticos mezquinos que buscan desestabilizar con hechos lo que no han conseguido en las urnas”.
- “Vamos a defender los derechos humanos como siempre lo hemos hecho, pero consideraremos humanas a todas las personas, no solamente a las que tengan pensamiento de izquierda o sen infractores de la ley”.
- “Si Manganaro es duro o blando no es el debate que pretende la gente sobre seguridad. Además es menospreciar la angustia de muchas personas que demandan una solución concreta. No elijo la confrontación o el diálogo, opto por la ley” (Todas en Diario Río Negro, 17/12/2003, p.8-9).

En esta segunda “etapa”, identificada a partir del análisis discursivo, se aprecia un pasaje de la demonización hacia la aplicación de la mano dura y la tolerancia cero con las protestas sociales. Y más aún: el gobierno provincial no duda en vanagloriarse de ello. De esta manera, se mantenían y profundizaban los imaginarios en los que los sectores en protesta aparecían denostados y deslegitimados. Ya en el mes de febrero el gobernador arremetía contra los piqueteros y los métodos que empleaban a la hora de llevar adelante sus reclamos: “A mí no me eligieron para que calme y decir éste es malo y aquél es bueno. Me eligieron para algún momento dar la orden – que no es agradable y más de una vez me quitó el sueño – de decir: Señores, hay que desalojar esto porque son casas de la democracia”. Además agregaba: “si toman la Casa Rosada o la Municipalidad o la Corte Suprema y nadie dice absolutamente nada, y la Justicia y la fuerza pública miran para otro lado, un día van a ir a la casa de un vecino. Y luego cuando le pidan plata y le cobren peaje al vecino para circular, vamos a decir: Que tarde nos dimos cuenta de que aquí tiene que imperar la ley y el orden” (Ambas en Diario Río Negro, 17/02/2004, p.13).

En esa oportunidad fue más lejos aún, intentando demostrar convicción y seguridad en torno al uso de la fuerza pública para resolver los conflictos que incluyeran cortes de rutas o tomas de espacios públicos: “El dirigente político tiene que tener el sentido común de ver cuando hay que aplicar, no digo la represión, sino la defensa de las instituciones de la democracia. No nos eligieron para mirar para otro lado, sino para asumir responsabilidades” (Río Negro, 17/02/2004, p.13).

Las palabras del gobernador cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial continuaron la misma lógica. Aquel día Sobisch, con un estilo fuertemente confrontativo, criticó al Gobierno Nacional y reafirmó uno de

sus posicionamientos centrales: “El gobierno de la provincia va a profundizar el respeto por las instituciones armadas y de seguridad de la democracia. Debemos consolidar las instituciones de la República para que sean el fiel reflejo de la consolidación de la democracia” (Río Negro, 02/05/2004, p.8). Además, calificó a la policía provincial como “una de las fuerzas de seguridad más modernas del país” y a las tareas en materia de seguridad como fructíferas: “nos ha permitido esclarecer el 82% de los delitos graves, siendo éste uno de los mejores de la Argentina” (Río Negro, 02/05/2004, p.9).

3.2 - 2004: Las víctimas de la mano dura

Si bien el año 2004 se inició con relativa tranquilidad en los primeros meses, con “las mesas de diálogo en funcionamiento”, luego del primer trimestre el panorama se modificó. Así, es posible visualizar una gran cantidad de episodios que presentan rasgos comunes y al que la oposición denominó “escalada represiva”. En el lapso de unos pocos meses es posible identificar diferentes sucesos significativos, todos ellos con especificidades propias pero al mismo tiempo con rasgos y características en común. Estos giran en torno a una idea de “mano dura”, de abuso de poder, y a un modo de proceder en el que no existen autocríticas de cara a la sociedad por posibles errores cometidos en la gestión. Los casos más significativos de 2004⁹ fueron los siguientes:

- Caso Víctor Guíñez: En el mes de abril en una disputa de vecinos en el Barrio Confluencia, la policía intervino con gases lacrimógenos y balas de goma. El proceder policial dejó como resultado doce personas heridas, entre ellas un estudiante de 20 años, Víctor Guíñez, quien aguardaba el colectivo a pocos metros de los incidentes y recibió impactos de bala de goma que le provocaron la pérdida de un ojo. En el rastreo exhaustivo de los diarios regionales no se encontró pronunciamientos de funcionarios de ningún tipo, ni provinciales ni municipales.

- El conflicto con los estudiantes secundarios: Surgió producto de la organización de los propios estudiantes en torno a problemáticas comunes en diferentes establecimientos educativos, tales como falencias de infraestructura, la designación de docentes y la falta de personal de servicios. Los estudiantes pretendían tener un

⁹ Ver anexos, allí se encuentran otros casos ocurridos en el año 2004 en los que la policía provincial estuvo involucrada.

encuentro con las autoridades gubernamentales y poder presentar los reclamos en una reunión, pero producto de la negativa del gobierno a formalizar el acercamiento y ante la falta de respuestas a los problemas, la Central Única de Estudiantes Secundarios (CUES) decidió encarar un plan de lucha: “toma” de establecimientos educativos, realización de “sentadas” (con cortes de calles) y asambleas como método de discusión y toma de decisiones, las cuales incluían no sólo a alumnos, sino también a docentes, directivos y padres.

Nuevamente, tal como venía sucediendo con los gremios estatales y organizaciones de trabajadores desocupados, la estrategia del Gobierno ante el conflicto consistió en dejar acrecentar la disconformidad de los demandantes ante la dilación en la resolución del reclamo. De esta manera, el Gobierno en un principio no recibió a los estudiantes pero sí un petitorio elaborado por ellos. En un momento álgido de la protesta, ésta incluyó cortes de ruta y de varias calles céntricas de la capital. Desde el oficialismo se cuestionaban los métodos, las formas y el reclamo en sí. Finalmente luego de casi veinte días en conflicto, el ministro Kaiser los recibió y a partir de allí se logró destrabar la situación.

Durante la duración del conflicto, en menos de quince días la CUES presentó seis denuncias por amenazas, intimidaciones y aprietes de parte de la policía hacia los jóvenes. Esta persecución ya se venía aplicando desde septiembre de 2003, cuando en otro conflicto en los que los estudiantes mantenían ocupados algunos establecimientos previo a las elecciones, la Justicia citó a dos de ellos: a uno por cortar la calle frente a su escuela y a otro por ocupar la suya.

- Caso U11: En mayo salió a la luz un caso gravísimo ocurrido el mes anterior en la Unidad de Detención N°11 de la capital provincial. Más de 40 privados de su libertad denunciaron haber sido víctimas de castigos físicos y psicológicos en represalia a un motín. Si bien este episodio no remite al encuadre “protesta social” clásico, aquí es mencionado debido a que son las fuerzas de seguridad las que protagonizaron los episodios. Debido a la inexistencia de un Servicio Penitenciario en la provincia, quien se encargaba en ese entonces de tratar con los internos era personal policial y no personal especializado en esas tareas.

Lo cierto es que estas denuncias¹⁰ no se enmarcan como hechos aislados, sino que forman parte de una problemática añeja. En ese mismo momento se tramitaban

¹⁰ La denuncia presentada por los sucesos de abril de 2004 fue llevada a juicio y 27 policías debieron ser investigados. En el año 2010 la Justicia determinó que sólo dos de ellos tuviesen condena efectiva (uno de

otras dos causas judiciales contra el personal de la U11: una, por apremios ilegales cometidos el 1 de enero de 2002; la otra, efectuada luego de una represión realizada en abril de 2003, y que derivó en la remoción de las autoridades de la cárcel.

- Intento de reforma a la Ley de Minoridad: El Ministro de Seguridad decidió convocar a una discusión pública referida la modificación en la legislación sobre los menores de edad. El proyecto fue expuesto por Manganaro en agosto en la Legislatura pero finalmente nunca prosperó. La idea del Gobierno era reformar sólo algunos artículos de la Ley 2.302 de “Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, sancionada en 1999.

Según los dichos del Ministro, lo que se buscaba era “cambiar el enfoque de la cuestión criminológica”. Pero lo que se advierte en cada una de sus intervenciones a lo largo de la embestida en pos de la aprobación del proyecto, es una idea de la necesidad de leyes penales más rigurosas, es decir, un discurso que planteaba aumentar las penas como solución a la crisis desatada por una ola de inseguridad, que desde la óptica del gobierno se estaba padeciendo.

El rechazo a la reforma de Manganaro fue amplio y el repudio incluyó el pronunciamiento de las Abuelas de Plaza de Mayo hasta el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Se realizaron varias marchas de las que participaron una gran cantidad de personas y se conformó el “Foro en Defensa de la ley 2.302”. Este ejemplo, quizá minúsculo, refleja una idea de “resistencia neuquina”, adoptada por sectores que no quedan callados ni pasivos ante el Gobierno. La iniciativa del Foro ante la propuesta del ministro responde a una determinada lógica que Aiziczon (2009) menciona. El autor alude a un “espíritu militante”, “habitus” dirá él (siguiendo a Bourdieu), que se explica a partir de diversos factores, de lo que suelen denominarse procesos enmarcadores, es decir, marcos culturales y simbólicos que dotan de sentido a la acción colectiva. Y que se fueron construyendo en torno a sentimientos de injusticia, inclusive antes de la última dictadura militar. De esta manera, el Choconazo (1970), la acción en pos de los derechos humanos del obispo Monseñor Jaime de Neves y las huelgas masivas de los gremios de la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina) y ATEN (Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén) en los 80 y 90 resultan antecedentes en la materia y que luego fue recogida

cuatro años, otro de tres años y medio), cuatro recibieran condenas condicionales y los restantes veintiuno quedaran absueltos. Las acusaciones por torturas fueron desestimadas por el tribunal interviniente.

por los obreros de la fábrica de cerámicos Zanón y su posterior transformación en Fasinpat (Fábrica sin patrones).

De esta manera, el autor grafica a través de Bourdieu su mirada sobre la provincia patagónica: "...pretendo metaforizar lo que creo que ocurre en Neuquén: un campo de protesta, un espacio social dinámico de lucha entre las distintas posiciones objetivas que en él ocupan los agentes; éstos se encuentran dotados de un conjunto de disposiciones y capacidades subjetivas para entrar en juego en el campo, pero lo que los caracteriza, en definitiva, es la disposición - constituida históricamente - a la acción colectiva directa" (p.65).

Retomando los hechos transcurridos en 2004, cabe señalar que su enumeración y el abordaje de todos estos acontecimientos buscan explicitar el contexto en el cual tienen lugar las declaraciones. Es decir, poner en relación (no directa, pero si enmarcadora) lo que los funcionarios expresan y las prácticas que las fuerzas de seguridad implementan. Así, es posible observar una sintonía entre los planteos de Manganaro y la estrategia política de Sobisch, el cual buscaba apoyo entre los sectores afines al discurso de la "mano dura".

3.2.1 – El Plan Manganaro

El arribo de Manganaro al Ministerio de Seguridad derivó en la implementación de un nuevo Plan de Seguridad. El denominado Plan Integral de Seguridad (PIS) fue exhibido por las autoridades como una de las llaves maestras con la que era posible combatir el delito y la violencia. La puesta en práctica del plan, "único en Latinoamérica" y un "ejemplo a nivel nacional que otros distritos ya están mirando" (Río Negro, 07-12-2004, p.10), incluía un paquete de medidas amplio: compra de helicópteros, patrulleros, cámaras ocultas de vigilancia, sistema de comunicación moderno y varias compras directas más que totalizaron, de acuerdo a declaraciones del gobernador en un programa de televisión en Buenos Aires, la suma de 50 millones de dólares.

En este contexto, un año después de haber asumido y luego de un 2004 repleto de casos de abuso de poder de las fuerzas policiales, en el acto de egresados de los agentes policiales, y con la presencia del Gobernador y el Jefe de la Policía, Manganaro sostuvo que los delincuentes son aquellos "que roban, matan, violan, cortan rutas,

toman edificios públicos e impiden a los demás ejercer sus derechos” (Río Negro, 07/12/2004, p.10). Allí también cargó contra los trabajadores de la fábrica Zanón, a quienes los acusaba de haberse apropiado “de forma antijurídica“ de la fábrica, “incumpliendo la ley con consignas simpáticas”. Los obreros habían aportado centenares de manifestantes a las luchas contra el gobierno entablada desde diversos sectores y se encontraban a la espera de que la Justicia les otorgara la administración de la fábrica pero bajo el nombre FASINPAT (Fábrica Sin Patrones).

Estas declaraciones llegaron a la plana de los diarios nacionales y tuvieron el repudio de diferentes dirigentes políticos. Así, en la semana marcharon por la ciudad cerca de 1500 personas denunciando un “Estado policial” en Neuquén. Por esos días también Sobisch sostenía ante la prensa: “La inseguridad es consecuencia de la falta de respeto por la ley” (Río Negro, 17/12/2004, p.13).

Las palabras de las autoridades reflejaban la idea de instrumentar prácticas punitivas contra aquellos que disienten. De esa forma, se promovía “el orden en las calles” a través de un plan que intensificaba la capacidad represiva del Estado. Las medidas de mayor presupuesto, más hombres y más tecnología no es condición para disminuir el delito y menos aún los niveles de violencia. El Plan de seguridad no contemplaba acciones tendientes a disminuir los niveles de violencia institucional. Si bien se debe entender que la violencia policial en buena medida es una herencia del Estado autoritario, también urge señalar que las imágenes y estereotipos que los funcionarios construían en torno a los que protestan y los que delinquen los ubica a éstos en otro lugar, en un ámbito ajeno y distante del de la sociedad, de lo que ellos denominan “gente común”.

Surge así, por ejemplo, la asociación piquetero-criminal. El piquetero es ubicado en el mismo plano que la inseguridad, como si fueran elementos lineales que se potencian. En el fondo, la concepción de seguridad que las autoridades planteaban es la de centrar los objetivos en las consecuencias de la acción delictiva y no sobre las múltiples causas que la originan. Hay una lógica represivo-autoritaria, que impide ver que una de las causas fundantes de la inseguridad es la desigualdad existente y generada por la estructura económica y social de la Argentina, propia de un capitalismo cada vez más explotador.

Esta lógica criminalística no es desarrollada en profundidad aquí puesto que no conforma el eje vertebrador que este trabajo plantea, pero requiere de su mención puesto que forma parte del entramado ideológico desde el cual se nutre el Gobierno. Y lo que si

se puede afirmar es que “protesta social”, “conflictividad” y “piqueterismo” son abordados bajo una misma lógica: la de la intolerancia, la estigmatización y el desprestigio.

A lo largo de todo el 2004 se identificaron pronunciamientos en los que manifestaba una oposición abierta contra los piqueteros. Las palabras del vicegobernador Federico Brollo en junio son elocuentes: “En Argentina no se van a arreglar las cosas con intolerantes, con manifestaciones extemporáneas y sin reconocer que tenemos dificultades (...) Debemos ser realmente positivos, asumiendo los problemas y poniendo voluntad y no resignación para resolver las necesidades con comprensión, esfuerzo, sacrificio, disciplina y orden, porque no se puede demandar con una cacerola o un corte de ruta, sino trabajando” (Río Negro, 03/06/2004, p.7). Estos dichos se daban en el marco de un desprestigio del piqueterismo. Los medios de comunicación insistían con esa idea y difundían encuestas que mostraban como la sociedad (otrotra aliada) les daba la espalda a estos movimientos. Pero la cruzada antipiqueteros no sólo ponía el acento en lo referido a una idea de no querer trabajar, sino que remitía además a una asociación piqueterismo-inseguridad.

Manganaro y el gobierno del que formó parte concebían a la protesta con el Código Penal en la mano. No importaba si quienes participaban en ella eran niños, mujeres u hombres sin derechos. Ni tampoco si estaban bajo el desamparo o la pobreza. Básicamente se los abordaba como delincuentes y debían ser tratados esa manera. Así, se aprecia un discurso que asocia al piquetero con el criminal, lo cual va a llevar a la judicialización de sus prácticas y formas de protesta. De esta forma, por reclamar derechos conculcados se los procesará (y en muchos casos condenará) o se los reprimirá.

Así, el Ministro de Seguridad llevó adelante durante su gestión un discurso “belicista”. Los graves hechos en que incurrió la policía provincial guardaron relación también con la conducción política que tenían. En el fortísimo discurso efectuado en el egreso de los agentes policiales (con arenga incluida) se desprende que los principales problemas de la seguridad neuquina provienen del conflicto social, y por consiguiente, los dirigentes políticos, sociales y sindicales son enemigos de las fuerzas de seguridad.

Tanto el ministro como el gobernador durante el período que Manganaro estuvo al frente de la cartera de seguridad (en julio de 2005 debió abandonar su cargo debido a

una enfermedad¹¹), tuvieron discursos agresivos, con desbordes y exabruptos: “Voy a ir por los barrios marginales, de la mano de la policía para defender a la gente honesta y a los delincuentes los vamos a sacar a patadas en el culo” (Jorge Sobisch en Diario Río Negro, 26/03/2004, p.23). En este como en tantos otros casos, se manifiesta ausencia de decoro, modestia, cautela, tolerancia, respeto y pluralismo. Más bien hay provocación, pasión y polémica. Es decir, en lugar de consenso y amplitud de voces, hubo personalismo e intolerancia. De esa forma, la escalada de violencia verbal creó condiciones para otro tipo de violencia, de la que los protagonistas de la protesta social serán las víctimas.

3.3 - 2005: “Mar de conflicto social”

El 2005 se avizoraba como un año plagado de disputas, enfrentamientos y cruces discursivos entre el Gobierno y los sindicatos. En los últimos días de enero el Gobernador anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y si bien se mostraba abierto a discutir cualquier cuestión conflictiva, el tono y los modos que Sobisch empleaba tenían su sello: “Ahí vamos a ver quienes son los que quieren discutir en serio, dentro del convenio colectivo de trabajo, amparados por la ley y la Constitución, y quiénes son los que no quieren discutir y quebrar la paz social, que todos hemos construido” (Río Negro, 27/01/2005, p.13).

Durante el año hubo dos grandes ejes conflictivos de los que el Gobierno formó parte. Por un lado, “la crisis de Salud”, que ya se había iniciado en septiembre de 2004 pero que durante 2005 llegó a niveles insospechados; por otro lado, la lucha docente, relegada en primera instancia por la otra, pero ubicada en primer plano rápidamente tras la falta de acuerdos.

3.3.1 - La huelga de Salud

¹¹ El plan de seguridad nunca lo puedo desplegar en su totalidad, pero el Gobernador afirmó que su reemplazante ineludiblemente debía ejecutarlo.

El conflicto de Salud se inició en septiembre de 2004 y recién a fines de 2005 se logró abrir una instancia de diálogo. La postura del gobierno para comprender los episodios reparaba en la idea de no aceptar un diálogo “bajo presión”. De esta forma, en marzo de 2005 se llevaba adelante el paro número 45 y recién ahí las partes al fin entablaban un acercamiento mínimo.

La falta de acuerdo en esos primeros encuentros, con el acarreo de tantos meses de ocultamiento del conflicto, derivó en posturas intransigentes. El gremio no aceptaba las ofertas del gobierno y las medidas de fuerza se fueron profundizando. El fiscal de Estado, Raúl Gaitán, efectuaba una denuncia contra el secretario general de ATE, Raúl Dobrusín, porque “el gremio no garantizó los planteles mínimos de atención en los hospitales públicos”.

En ese marco, los trabajadores de Salud efectuaron cortes de ruta parciales, al mismo tiempo que intensificaban las medidas de fuerza. Ello adquiría consecuencias significativas, puesto que el sistema comenzó a colapsar, se derivaron pacientes y las clínicas privadas no daban abasto. La iglesia exhortaba a un “diálogo maduro” y el gobierno ante el rechazo de su propuesta dictaminaba la conciliación obligatoria.

Por su parte, Sobisch hacía llamados a la reflexión y al mismo tiempo atacaba a los dirigentes sindicales. Los acusaba de carecer “sentido de solidaridad” y de tener “una gran perversidad, están esperando construir un muerto en provincia”. El rechazo a la conciliación obligatoria ofuscó al gobernador: “Están buscando un muerto para nacionalizar el conflicto”. El diálogo se cortó a fines de abril y en mayo, en la apertura de sesiones ordinarias, el primer mandatario provincial no hizo alusión al conflicto con Salud, solamente mencionó que “la inversión en salud no es comparable con cualquier otra efectuada en provincia alguna”.

En mayo el conflicto se reintensificó y hubo medidas fuertemente confrontativas. El gremio estaba muy molesto por la actitud del Jefe de gabinete, al que acusaba de sostener una cosa en las negociaciones y ante la prensa algo totalmente distinto, por lo que decidió tras una asamblea efectuar un escrache en la Casa de Gobierno contra el funcionario. “Chorro”, “mafioso” y “delincuente” eran algunas de las pintadas que se leían en las paredes del edificio gubernamental, lo cual brindaba la pauta del tenor del enfrentamiento entre las partes.

La hipótesis del conflicto que tenía Sobisch y el Gobierno era que existía una campaña de desprestigio contra la provincia, con el objetivo de desacreditar la imagen del Gobernador en el resto del país. Sin embargo era evidente que el Gobierno había

tardado en reaccionar y no le encontraba una salida al conflicto. Éste se dilató durante 9 meses (durante 40 días fue de manera ininterrumpida) e incluyó renunciaciones de directores y jefes de servicio de hospitales de la capital y del interior provincial. Se convirtió así, prácticamente, en una huelga indefinida.

En última instancia, el conflicto también se presentaba como un verdadero fracaso de Sobisch, quien no podía jactarse de ser un excelente conductor y administrador. Fue una crisis profunda, a la que finalmente se unieron el resto de los gremios. Los principales perjudicados por la puja salarial eran los pacientes y la resolución no estaba a la vista.

En el mes de junio la situación era prácticamente caótica. En una de las tantas marchas efectuadas habría sucedido un “ataque bacteriológico”. Así lo denunció el Gobierno, quien afirmaba que en bolsas de consorcio se habían arrojado “jeringas y gases con distintos fluidos orgánicos sobre las vallas que están en Casa de Gobierno”. El Ministro de Salud, Fernando Gore, calificaba el episodio como “una verdadera salvajada” y sostenía que el hecho no era “un atentado contra el Gobierno, sino contra la sociedad”. (Río Negro, 03/06/2005, p.13). Finalmente, la denuncia penal quedó en la nada puesto que la justicia no contaba con elementos para determinar la peligrosidad de las muestras recolectadas con el fin de obtener las pruebas. Así, todo quedaba en un presunto atentado y el conflicto se volvía cada vez más tenso. Los trabajadores estaban muy molestos por la actitud de las autoridades, denunciaban un “montaje” y una “ridiculez”, y admitían que sólo se habían arrojado “guantes, barbijos y Pervinox”.

A los pocos días, la intensificación de las medidas de fuerza de los trabajadores derivaba en la realización de cortes totales (durante algunas horas, estipuladas con antelación) en los puentes que unen Neuquén con Río Negro. Esta modalidad, diferente de la instrumentada hasta ese entonces, generó el repudio enérgico del Jefe de Gabinete Lara. Éste sostuvo, muy enojado, que la metodología empleada apuntaba a “llegar al gobierno de cualquier forma; esto es una política golpista usada por los militares en su momento” (Río Negro, 07/06/2005, p.7). Anteriormente los cortes habían sido parciales y permitían pasar el tránsito de forma intermitente en sólo una de las manos de la vía, pero de ahora en adelante las medidas iban a ser más drásticas.

Finalmente, y sorpresivamente, el Gobernador junto a su Vice y gran parte del Gabinete se presentaron en una conferencia de prensa y anunciaron la tan dilatada recomposición salarial. De esta manera, vía decreto, el Gobierno efectuaba una suma que en rigor no difería prácticamente en nada los montos de propuesta anteriores ya

rechazadas por los gremios. En esa jornada, Sobisch se mostró desafiante. No hubo en el anuncio gestos de cordura o de búsqueda de aceptación de su propuesta, sino mayor intolerancia todavía: “Nosotros cumplimos: hicimos el análisis de los sueldos de todo el país del sector. Habíamos quedado en que si eran más bajos que la media los subíamos y si no, que los gremios expliquen por qué dejaron de atender a la población”. Además habló de “ignorancia” y “perversidad” de parte de los gremios y se mostró muy molesto porque a su entender los gremios no querían reconocer los datos referentes a los sueldos de otras provincias: “¿No lo tienen? ¿No lo quieren tener porque no los favorece o porque quieren seguir de huelga?” (Río Negro, 16/06/2005, p.9).

En definitiva, la huelga de salud mostraba el estilo del gobierno y del propio Sobisch. Cuando se logró la resolución del conflicto el mandatario mantuvo un tono desafiante y provocador, que instaba a la búsqueda de enfrentamientos permanentes. Las huelgas y protestas no serán nunca bien vistas ni aceptadas dentro del juego democrático del gobernador. El Gobierno concibió a estas protestas con cierto desprecio, dejando ir las cosas demasiado lejos para recién luego – y muy tarde – encontrar una solución al conflicto. Recién más de medio año después tomó cartas en el asunto. Esta estrategia aquí adoptada se inserta dentro de una actitud que se extendió a los otros sectores que reclamaban y a los que el Gobierno consideraba enemigos políticos. Luego de casi un año, y muy lentamente, las actividades en los hospitales públicos de la provincia se fueron normalizando. La agenda política tenía un nuevo eje y la disputa con ATEN pasó a ocupar el primer plano, de cara a las elecciones de convencionales constituyentes a desarrollarse en octubre.

3.3.2 - La huelga docente de 2005

En lo que respecta al área educativa, luego de un 2004 en el que las clases se vieron interrumpidas por paros docentes y protestas estudiantiles en reclamo de un mayor presupuesto educativo ante la gran cantidad de escuelas en mal estado, para el 2005 las autoridades provinciales decidieron invertir una suma muy grande de dinero para obras de mantenimiento y refacción de establecimientos. ATEN veía en esa abultada inversión “una imprevisión que busca un efecto mediático” y vaticinaba otro año con problemas edilicios. En rigor, apenas iniciado el ciclo lectivo en marzo, los problemas saltaron a la luz y quedaron evidenciadas nuevamente las fallas y demoras en las obras, que no

permitieron que las clases aempezaran con normalidad, más allá de cualquier cifra instrumentada.

Asimismo, para la inauguración del ciclo lectivo en el mes de marzo, se produjo la llegada a la cartera educativa de un nuevo ministro, Mario Ever Morán, quién inmediatamente al arribo en su función marcó la cancha. En sus primeras declaraciones a la prensa, aseguró: “La provincia paga los mejores salarios docentes del país, no sólo porque son los más altos sino porque además no se le suman bonificaciones adicionales”. Y al mismo tiempo, mostró su rechazo a los reclamos gremiales: “Me queda la tranquilidad de decir que este reclamo no es lo suficientemente sólido porque estamos en una provincia que está pagando sueldos transparentes en tiempo y forma” (Diario Río Negro, 08/03/2005, p.10).

La pulseada entre el gremio, que reclamaba mejoras salariales, y el Gobierno, que se resistía a efectuar subas, ya estaba esbozada. Era un conflicto que en los primeros meses del año ocupaba un segundo plano, ya que la huelga de Salud iniciada en septiembre del año anterior ocupaba la principal atención. Pero a medida que transcurrieron los pedidos del gremio de reuniones y las autoridades las denegaban, el escenario se fue complejizando. A principios de abril el atentado contra la casa de un dirigente del gremio docente, inserto en una ola de episodios que los protagonistas de la protesta social sufrían¹², marcaba la pauta del nivel de enfrentamiento entre los actores en disputa.

La protesta se había unificado con la de Salud y ATEN pedía también por todos los medios la conformación de una mesa de diálogo para discutir no sólo subas salariales, sino además un plan de obras en las escuelas con intervención de la comunidad educativa y la incorporación a planta permanente de los beneficiarios de subsidios provinciales.

El encuentro entre las partes no se realizó, por lo que los docentes llevaron adelante un paro de 48hs y el Ministro de Educación se pronunció: “no se acepta el diálogo para la construcción, no se acepta analizar, y sí de alguna manera se potencia el conflicto a través de la profundización” de las medidas de fuerza. Morán responsabilizaba al gremio de no buscar una solución a los reclamos por vía del diálogo, mientras que desde el sindicato, a través del secretario de la seccional provincial, Marcelo Guagliardo, se afirmaba: “le hemos pedido más de 60 audiencias al Gobierno”

¹² Ver en Anexos el listado de hechos en los que la policía estuvo involucrada durante el año 2005.

(Diario Río Negro, 21/05/2005, p.11) en los últimos años. Los paros se producían como consecuencia de la falta de respuesta a las solicitudes de audiencia, sostenían. Y esa jornada de huelga culminó con una olla popular, de la que participaron además trabajadores de los hospitales públicos, organizaciones de desocupados y partidos de izquierda.

En rigor, se trataba de una metodología que el Gobierno había aplicado en uno de los conflictos anteriores y que ahora se hacía extensivo a los docentes: se posicionaba como el actor abierto al diálogo, en contraposición a los gremialistas, quienes carecían de esa vocación. Pero lo cierto es que los pedidos de reunión se habían tramitado - sin la realización de paros - en el CPE, en el Ministerio y en casa de Gobierno, y nunca se los recibía.

El último día del mes de mayo se produjo una de los momentos más significativos del conflicto. El gremio le trasladaba la responsabilidad a las autoridades: “La continuidad de las clases hoy depende del gobierno” y solicitaban una “reunión urgente”. Al mismo tiempo, instalaba una “globa” en las afueras de la Casa de Gobierno, en la que iban a permanecer durante toda la semana realizando distintas actividades y hasta tanto se los atendiera. Sin embargo nada de todo eso ocurrió, puesto que la Policía intimó en tres oportunidades a los manifestantes a retirar la carpa, y ante la pasividad de quienes allí se encontraban, procedieron haciendo uso de la fuerza: gases lacrimógenos, balas de goma y un camión hidrante. A partir de allí numerosos incidentes y un saldo de cuatro heridos con diversas lesiones.

El Subsecretario de Seguridad, Hugo Acuña, presentó ante la Justicia un pedido de investigación penal sobre los hechos ocurridos y ofreció distintas explicaciones respecto a los episodios:

- Señaló que la policía estaba recibiendo “ataques a mansalva de los manifestantes”, que se trataba de una “violencia irracional” ante la cual se decidió “no reprimir, sino restablecer derechos estaban siendo conculcados” (Río Negro, 03/06/2005, p.13).
- En referencia a dónde surgió la decisión de reprimir sostuvo: “la orden la dio la misma situación (...) los criterios de oportunidad existieron” (Río Negro, 03/06/2005, p.13).
- Justificó la represión afirmando que “la gente vio tocada su integridad física y moral con los epítetos que proferían los manifestantes por el sólo hecho de que ellos entraban a trabajar a Casa de Gobierno”. Además, agregó que “no se

permitió el libre tránsito de automotores, y de la gente que libremente concurría a sus trabajos” (Río Negro, 01/06/2005, p.6).

A partir de allí, ATEN decidió endurecer su postura y diagramó un plan de lucha por el reclamo salarial. De esa manera, decretaron un paro de 48 hs y la realización de una movilización a casa de Gobierno para el día siguiente a las medidas de fuerza adoptadas ante un nuevo aniversario de la muerte de Silvia Roggetti. En la segunda jornada de paro se produjo una coincidencia para nada fortuita: la militancia del MPN se movilizó hacia la Casa de Gobierno y realizó un acto de apoyo a la gestión, en el que ofrecieron un discurso tanto el Gobernador como el Vicegobernador. Se trataba de una demostración de fortaleza en un momento álgido del conflicto y ante las cada vez más cercanas elecciones a convencionales de octubre. Ambos grupos, los protagonistas de la protesta docente como los del acto de apoyo al MPN, se agredieron con escupitajos e insultos.

Si para los trabajadores de la educación esto se trataba de una “provocación”, el contenido del discurso de Sobisch abonaba esa hipótesis: “Se han unido para derrotar al MPN pero no tienen ninguna propuesta (...) Enfrente vamos a tener dirigentes que han cambiado de partido para ganar la contienda electoral. Nosotros, el pueblo del MPN y la mayoría silenciosa una vez más optará por la seriedad, el respeto, la solidaridad y la propuesta” (Río Negro, 09/06/2005, p.8). Nuevamente se aprecia un discurso que no sólo plantea tópicos con la lógica amigo-enemigo, sino que además alude a una supuesta cordura y sensatez en el abordaje de las relaciones con otros sectores cuando nada de ello es posible visualizar. Sobisch invoca los términos “respeto” y “solidaridad” y ambos estaban muy lejos de caracterizar los vínculos que el partido gobernante iba tejiendo.

La convocatoria docente había logrado convocar a casi dos mil personas, entre las cuales estaban también las organizaciones de desocupados, partidos de izquierda, y los trabajadores de la Salud. Además, se proclamaba un apoyo a los trabajadores de Zanón, quienes se encontraban en plena lucha para poder quedarse definitivamente en la fábrica. En definitiva, una confluencia de actores, todos en disputa con el Gobierno y no sólo en el plano salarial y alusivo a reivindicaciones laborales, sino también en el plano simbólico discursivo.

A fines de junio el gremio lanzaba un nuevo paro de 48hs. y evaluaba la posibilidad de volver a instalar la carpa, con el objetivo de que sea compartida con otros sectores en lucha como Salud y Zanón. La medida finalmente se efectivizó y se llevó

adelante conjuntamente con el corte de tránsito en la localidad “petrolera” de Rincón de los Sauces. Durante casi diez horas y con intermitencias, docentes junto a trabajadores municipales y estatales impidieron el acceso a los yacimientos de los operarios petroleros.

Esa decisión formaba parte de la estrategia sindical. Ahora se decidía levantar la carpa y dar por “finalizado el intento de diálogo”, luego de una nueva presentación de pedido de audiencia. Inmediatamente apareció Morán y ante la prensa afirmó: “levantar una medida de fuerza no es levantar una carpa porque no tienen cómo sostenerla, porque no va nadie; levantar la medida de fuerza es levantar un pedido de diálogo, sin ningún tipo de medidas de fuerza: si eso se produce nosotros inmediatamente vamos a actuar en la búsqueda de una mesa de diálogo”. (Río Negro, 25/06/2005, p.8).

Era evidente que el conflicto se había convertido en una pulseada. Finalmente, cuando el receso invernal se avecinaba, el Gobierno anunció un aumento a los docentes, cuyos números estarían atados al presentismo y otros indicadores de calidad de servicio. La medida, adoptada a través de un decreto, incluía además a los policías. En el resonante anuncio Sobisch volvió a cargar contra los gremios estatales: “Si hubiéramos dado un millón de pesos por persona de aumento, igual hubieran dicho que estaba mal. No me sorprendería. Lo que sí, ahora como mínimo los gremios tendrán que dar una muestra a la sociedad de que están dispuestos a discutir estos indicadores (...) Son posiciones políticas, ideológicas y me parece bien que las discutan y defiendan. Lo que no me parece bien es el escrache, el insulto, la agresión, el corte de ruta. Que no estén de acuerdo no es malo, lo malo es la agresión” (Río Negro, 16/07/2005, p.8).

Frente al decreto, el gremio se mostró ofuscado y anunció la presentación en la Justicia de la inconstitucionalidad de la decisión, puesto que a su criterio se atacaba el derecho a huelga imponiendo el presentismo, ya que la mejora salarial estaba condicionada a las jornadas de trabajo. En el mes de julio los sectores de Educación y Salud acudieron a la Justicia en contra de los decretos y en el mes de agosto hubo un cruce de cartas entre el gremio docente y el Gobernador. Éste le envió a cada trabajador de la educación de la provincia una carta en la que lo instaba a analizar el conflicto y las diferencias suscitadas producto del último aumento. ATEN inmediatamente respondió con otra carta, en la que dejaba sentada su postura: la suba decretada no existe porque “ningún aumento puede variar de mes a mes”.

El conflicto nunca terminó de expresarse. Los docentes siguieron llevando adelante medidas de fuerza: paros, marchas y reclamos por problemas edilicios. Por esto

último, se denunció a funcionarios por no garantizar la seguridad de los estudiantes y de los trabajadores, ante los problemas severos de infraestructura (pérdidas de gas) en varios establecimientos que derivaron en la suspensión de clases en el mes de septiembre. Incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad fue la tipología que recayó sobre los denunciados: el Ministro de Educación Morán y su Subsecretaria y Presidenta del CPE, Eva Chaquírez.

En definitiva, los paros de los maestros que habían comenzado el 7 de abril generaron consecuencias. Entre huelgas convocadas por el gremio neuquino y la CTA hubo al menos 27 días sin clases. Evidentemente la actitud asumida por el Gobierno refleja una política de Estado ante los sectores en lucha. Así, la ausencia de diálogo que empezó como una mera estrategia, al extenderse en demasía se convirtió luego en la gota que rebalsó el vaso. El sindicalismo estatal adoptó entonces medidas de fuerza contundentes y masivas, que repercutieron en la relación con el gobierno y en la capacidad de los actores en la obtención de consensos.

Sobisch se mostró en contra de las protestas desde el primer momento: “no hay derecho que se ataque a los niños y los jóvenes ingresando la política dentro del sistema educativo”, sostuvo. Eso daba cuenta del discurso del poder, donde no se tolera una lectura crítica de la realidad. El rechazo de la no intervención de los alumnos en la construcción de la comunidad educativa revela una forma de pensar y de actuar. Revela el nudo que opera desde el poder para con los sectores subalternos.

3.4 - Reflexiones parciales

A partir del enfoque planteado en este estudio es posible develar ciertos mecanismos utilizados desde el poder para cuestionar, desde el plano discursivo, las demandas sociales de la población. El gobierno de la provincia de Neuquén llevó adelante en este período una descalificación constante de la protesta social. La llegada al gabinete ministerial de Luis Manganaro generó una línea de pensamiento mucho más marcada aún en cuanto a los rasgos reaccionarios. La visión del funcionario forma parte de una corriente de opinión que en materia de seguridad está asociada a la posición sostenida por los sectores de la derecha política reaccionaria nacional. Desde esa óptica se busca endurecer el sistema penal, aumentar los presupuestos en materia de seguridad, dotar a

las fuerzas de seguridad de elementos más modernos, sacar la policía a la calle, invertir en tecnologías de control social, entre otras medidas; pero lo que no se logra es terminar con el delito.

El plan Integral de Seguridad (PIS) puesto en marcha por el gobierno provincial seguía la lógica de combatir con una política de seguridad lo que el Estado debería solucionar con políticas sociales. El paquete de medidas que se instrumentaron se encuadra dentro lo que se denomina “mano dura”, “tolerancia cero” u “orden o caos”. Así, emerge un discurso de Seguridad Ciudadana que actúa como mecanismo fragmentador en tanto distingue entre ciudadanos (los que supuestamente no cometen delitos) y los no ciudadanos (generalmente pobres, productores de inseguridad).

En la línea del discurso de seguridad ciudadana, del orden y normalidad institucional, se ubicará a la protesta en un marco de ilegalidad y se la criminalizará para que la situación no se vuelva incontrolable. Se trata, en definitiva, del discurso, manifiesto en la práctica, de criminalización de la protesta, que apela a la “inseguridad” como justificativo para la aplicación de la violencia estatal sobre los “no-ciudadanos” (que no son la “gente común”). Esto se articula, por un lado, mediante la aplicación de mecanismos represivos a través del accionar de las fuerzas de seguridad y, por el otro, con la persecución penal, donde la descripción de la situación como ingobernable viene a justificar esta represión.

A partir del ingreso de Manganaro es posible observar una línea muy clara respecto a cómo concibe la protesta social el gobierno. En este sentido el concepto de ideología resulta útil abordarlo, puesto que bajo la lógica de Van Dijk (2003a) puede entenderse como las representaciones sociales más esenciales que comparte un grupo, es decir, las que comprenden sus intereses y objetivos globales. De esta forma, se puede afirmar que “Las ideologías operan tanto en el nivel global de la estructura social, por ejemplo como ‘monitor’ mental compartido socialmente que guía la competencia, el conflicto, la lucha y las desigualdades sociales, como en el nivel de las prácticas sociales situadas en la vida cotidiana” (Van Dijk, 1999, p.22).

La relación entre discurso e ideología está dada precisamente por las prácticas sociales, ya que las ideologías se reproducen por medio de los discursos, a partir de la persuasión, donde quien emite el discurso busca convencer y cambiar la mentalidad de los receptores, mediante la comunicación de creencias, actitudes y valores, entre otros. Dicha función está también relacionada, de manera estrecha, con el poder, asociado también al control "sutil" sobre las mentes de un grupo determinado.

De acuerdo con Jäger, los discursos son un factor de poder, ya que "son capaces de inducir comportamientos y de generar (otros) discursos. De este modo, contribuyen a la estructuración de las relaciones de poder en una sociedad". (Citado en Wodak y Meyer, 2003: 68). Por medio de los discursos es que se transmiten los saberes e ideas, que inciden directamente en la conciencia colectiva. En las declaraciones del gobernador se visualizan representaciones a través de las cuales se crea de un "sentido común" que estigmatiza a los movimientos de resistencia. De esta forma, se construye una demanda de "normalidad", y tras las banderas de "seguridad ciudadana" se organiza culturalmente las bases de un estado de "orden".

Sobisch construye y explicita una propuesta político-ideológica que por momentos adquiere las formas de un proyecto de poder personal más que de un proyecto colectivo. Sus declaraciones revelan un estilo político con rasgos autoritarios y ajenos a la obtención de consensos. Su lenguaje es el del orden, de la defensa de la propiedad privada. Y todo aquel que expresa oposición o disenso es víctima de amenazas, descalificaciones o agravios. Los ejemplos son varios: brutales represiones contra desocupados y otros sectores que reclaman por sus derechos, ataques a estudiantes, descalificaciones a trabajadores de la salud y reiterados ataques al periodismo crítico. De esta manera, los hechos represivos no son excepciones. La consideración fragmentada de cada hecho represivo como excepción, resulta funcional a la legitimación de las políticas neoliberales a las que Sobisch adhiere y al ocultamiento de la modalidad general que asume la dominación.

Del mismo modo, se puede afirmar que cuando se critica y descalifica al piquetero se produce "un hilo de continuidad entre las políticas de criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social, que fue produciéndose en simultáneo con la criminalización de los movimientos populares. La ubicación de l@s exclud@s como amenaza, y de sus acciones como delitos, interfieren la simbología que consideraba al luchador o a la luchadora social como militantes solidarios, justicieros" (Korol, 2009).

De esta forma, el problema ya no será el sistema, sino el hecho de que alguien está violando la ley. Es decir, se corre la demanda de la calle al tribunal, se la despolitiza. "La respuesta será antes que socioeconómica, policial o penitenciaria. De esa manera se criminaliza la realidad cuando se la interpela desde las categorías legales. La ley y sus intérpretes se caracterizan antes que por visualizar un problema social, por

encubrirlo (...) la ley no se dispone para la comprensión o resolución de los conflictos sino para su perpetuo aplazamiento” (Rodríguez Alzueta, et al., 2003, p.31).

Entonces, el Estado responde con el código penal en la mano, consolidando un modelo que identifica disenso y ejercicio de derechos con ilegalidad, e invita a canalizar las demandas en una institucionalidad que generalmente no funciona y cuando lo hace tiene una lógica individualizadora y compartimentada de tratamiento de lo social. En este sentido, no sólo asocia la lucha a la ilegalidad, sino que legaliza las formas y figuras a través de las cuales aborda los conflictos. Este proceso de criminalización suele ser puesto en marcha por el Estado sobre todo cuando el conflicto social supera los niveles tolerables, es decir, cuando pueda poner en peligro el normal curso de los acontecimientos. Es aquí cuando intenta encuadrarlo en acciones típicas y antijurídicas: cuando lo presenta como delito.

Cuando se criminaliza la protesta se utiliza el Código Penal para “castigar” a quienes expresan las grietas del sistema. De esa forma, el Estado apunta a varios objetivos: primero, acallar y frenar el conflicto social, pues la discrepancia expresa no sólo las fallas, sino las dificultades para invisibilizarlo y lograr imponer un determinado proyecto; después, correr el eje de discusión, ya que la voluntad estatal, como expresión de la clase dominante, lejos está de querer resolver la demanda poniendo en debate ya no la injusticia, sino la violación de ley. Y además, con la criminalización no sólo se disciplinan acciones puntuales, sino que se convierte en una herramienta para desmovilizar y romper la organización popular en el sentido de mostrar cómo responde el Estado, marcando antecedentes a la futura organización popular.

El comportamiento político, judicial y policial aquí descripto se inscribe entonces en el entramado que luego de diciembre de 2001 se empieza a aplicar para con los sectores más vulnerables, que protestan y luchan en pos de obtener derechos consagrados por ley. La paradoja es clara: se acude a la ley para reprimir; pero no para garantizar derechos fundamentales y esenciales como el trabajo, la vivienda y un salario digno. El objetivo será, entonces, “penalizar cualquier actividad política organizada” (Svampa y Pandolfi, 2004).

En el conjunto de declaraciones transcritas en este segundo período de análisis es posible rastrear ciertas regularidades y constantes significativas. Sobisch encontró en Manganaro a su principal espada política y ambos en el poder persiguieron una lógica autoritaria, intolerante y persecutoria de las diferencias ideológicas y políticas. Hubo una identificación del adversario político como delincuente y un aliento a las fuerzas

públicas de seguridad a perseguir y atentar contra quienes se opusieran al proyecto del Gobierno. Esas prácticas discursivas, que siguen una lógica amigo/enemigo, son muy explícitas y buscan dejar una huella en la sociedad. Ésta será la lógica utilizada en este período abordado. En la siguiente fase de estudio, habrá un giro mucho más autoritario y reaccionario, donde la puesta en práctica del plan de seguridad terminará cobrándose la vida de un docente.

CAPÍTULO 4

De la criminalización a la represión de la protesta social (Diciembre de 2005 a Abril de 2007)

4.1 – El recambio en seguridad

El inicio de una tercera etapa en lo que hace al entramado discursivo del gobierno de Neuquén se produjo el primer día del mes de diciembre de 2005. En aquella jornada, el Gobernador dispuso la remoción de la cúpula policial provincial y anunció “una nueva etapa en la policía”. De esa forma, fueron relevados de sus puestos un total de 18 profesionales: el jefe, el subjefe y la plana mayor de la institución.

Allí mismo, Sobisch se expresó respecto a la puesta en práctica de la totalidad del plan de seguridad y afirmó que las demoras en su instrumentación integral iban a hacer que recién para mayo entrara en plena vigencia. El Plan Integral de Seguridad, que se planteaba como uno de los más modernos del país y de América Latina, era elogiado por las nuevas autoridades policiales. En flamante jefe de la institución, Carlos Zalazar, se refirió al tan promocionado y dilatado plan: “Es un gran plan que involucra a Salud, Educación, a la Policía y a varios entes formales e informales. Compromete inclusive a las municipalidades y a los ministerios (...) Es un plan integral donde la policía es una pequeña pata” (Diario Río Negro, 31/12/2005, p.13).

El recambio de autoridades en las fuerzas de seguridad generó un conflicto significativo. El cinco de diciembre, día de la jura de los nuevos mandos, un grupo de esposas y familiares de policías reclamó en la puerta de la jefatura un aumento salarial. Allí hicieron entrega de un petitorio en el que figuraban una serie de solicitudes, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los agentes. Pero a las pocas horas de ese episodio, las mujeres adoptaron medidas más fuertes y, de esa manera, llevaron las protestas a las comisarías. Así, en la localidad de Centenario y de Cutral Co surgieron

los primeros conflictos, que se extendieron luego a otras dependencias ubicadas en la capital neuquina y en Rincón de los Sauces.

La medida inicialmente se denominó “ocupación pacífica” de las comisarías, puesto que no impedía el normal funcionamiento de las dependencias. Sin embargo, a los pocos días el panorama se complicó, no se aceptó la propuesta que el gobierno efectuó y de repente el conflicto adquirió un matiz más denso. Casi 300 mujeres mantenían tomadas ocho comisarías en la provincia, mientras la Ministra de Seguridad y Trabajo intentaba minimizar el reclamo. No se trataba de un repudio o de una descalificación de la protesta, sino de una relativización de los hechos acusando responsabilidades a la prensa: “El conflicto policial no es como lo plantean los medios” y la protesta “no influye porque es un lugar donde generalmente sólo se reciben denuncias y se realizan trámites”, afirmaba Susana Arévalo en relación al ámbito en el que sucedían los reclamos (Diario Río Negro, 21/12/2005, p.8).

En rigor, el conflicto llevaba más de una semana y no se encontraba una salida que descomprimiera el clima cada vez más tenso. Finalmente, el 27 de diciembre la Ministra recibió a las esposas de los agentes luego de que desistieran en la continuidad de las medidas de fuerza y allí el problema rápidamente se resolvió. Respecto a este episodio en particular las dos máximas autoridades de la provincia se expresaron en los medios: el gobernador Sobisch calificó a la problemática como “una protesta más, como la que han hecho otros actores” sociales durante el año (Diario Río Negro, 10/12/2005, p.12); mientras que el vicegobernador Brollo prefirió no emitir opinión respecto al conflicto: “no participo ni conozco como funciona la fuerza, sería un imprudente si opinara sobre razones que se pueden leer o imaginar pero que no conozco realmente” (Diario Río Negro, 08/12/2005, p.11).

La protesta, es necesario señalar, se debió en parte a una interna policial desatada a partir del recambio de autoridades que el gobierno había determinado, y frente a lo cual la cúpula desplazada formuló críticas públicas por la decisión. Además, el gobierno provincial había otorgado hacía algunos meses un aumento que oscilaba entre el 8 y el 20% según la jerarquía. Pese a ello, los familiares de los agentes mantuvieron los reclamos tenazmente y llegaron a efectuar “tomas” de comisarías durante casi veinte días en las localidades de Centenario, Cutral Co y Plaza Huinul. Excepto la suba salarial del 30%, los demás pedidos fueron satisfechos por el Gobierno: incrementos en los adicionales, vestimenta para los uniformados y becas para sus hijos.

Cabe señalar que no se advierte aquí la misma actitud del gobernador o de los otros funcionarios en cuanto al abordaje de la protesta, en comparación a la protagonizada por los gremios estatales o por los grupos piqueteros. Se observa una actitud contemplativa, de aceptación y comprensión del reclamo, más allá de las medidas que las esposas de los agentes estaban desarrollando, sumado a ello la muy baja cantidad de manifestantes que protagonizaban el reclamo. Sin embargo, también es preciso mencionar que desde un principio el gobierno adoptó la misma postura que utilizaba con los gremios estatales, es decir, la indiferencia ante el pedido de audiencia con el gobernador y el no recibimiento de la ministra del área en cuestión hasta tanto no se abandonen las medidas de fuerza.

4.2 - 2006: Una montaña de obstáculos en la carrera a la candidatura presidencial

2006 fue el año en el que Sobisch lanzó oficialmente su candidatura a la presidencia de la Nación de cara al 2007. Pero el camino que recorrió fue arduo y denso, con varias dificultades producto de numerosas problemáticas locales. Con la protesta policial, se había cerrado un convulsionado 2005 en el que los reclamos de diversos sectores marcaron el panorama político de la provincia. Pero los conflictos nunca mermaron, puesto que durante el mismo diciembre y hasta febrero del siguiente año la reforma a la Constitución de Neuquén ocupó el centro de la escena. En consecuencia, se generó una efervescencia reformista y antirreformista y se movilizaron amplios sectores políticos y sociales de la provincia, todos dispuestos a imponer sus posturas.

Cuando se inició la Convención Constituyente, durante las primeras jornadas en el mes de diciembre, se produjeron incidentes entre militantes gremiales, partidarios del MPN y la policía, que incluyeron piedrazos, gases y balas de gorma, ocasionando trece heridos y algunos detenidos. Era la represión¹³ contra quienes se manifestaban en contra de la reforma (entre ellos los trabajadores de Zanón) y fue un accionar que aconteció en la primera sesión, donde la oposición abandonó el recinto ya que se negaba a participar de la convención aduciendo desconocer a las autoridades dispuestas por el MPN.

¹³ Ver en anexos el listado de hechos represivos de 2006 en los que participaron las fuerzas de seguridad provinciales.

Más adelante se logró, fruto de intensas negociaciones, que la Convención se desarrolle con normalidad. Allí Sobisch jugó un papel fundamental, en su carácter de Gobernador-presidente de la Convención. Dejó atrás la inicial y modesta propuesta de un reconocimiento cultural a los mapuches, para finalmente a último momento otorgarles una gran cantidad de derechos en la nueva carta constitucional provincial. Además fue crucial el papel que jugaron las organizaciones sociales y políticas, que obligaron al oficialismo a negociar con la oposición y garantizar entonces el reconocimiento de los pueblos indígenas neuquinos, yendo más allá inclusive de lo que establece la Constitución Nacional.

Fue, en definitiva, un proceso agitado y polémico de acuerdo a la prensa regional. Como se señaló anteriormente, en el caso del reconocimiento de los pueblos originarios hubo una primera idea que debió ser abortada, fundamentalmente gracias a la presión y pelea de las comunidades (que protagonizaron episodios de tensión y represión de la policía provincial) junto con el apoyo del obispo neuquino Marcelo Melani, del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y de distintas organizaciones sociales y políticas. Todo ese núcleo de resistencia obligó al oficialismo a abandonar su idea primaria y establecer un consenso con la oposición.

4.2.1 - El caso “Zona liberada”: La antesala a Fuentealba

2006 también fue un año atravesado por reclamos salariales, en el que los dirigentes sindicales del ámbito estatal y privado de la región pusieron el foco en el incremento de los sueldos. Ya en diciembre de 2005, la CTA neuquina realizó un congreso provincial y resolvió coordinar acciones para lanzar un plan unificado por recomposición salarial. De esa forma, ATE (estatales), ATEN (docentes) y Sejun (judiciales), los gremios más importantes de la central sindical, dieron un fuerte reclamo en pos de reivindicaciones laborales.

Desde el gremio docente, a principios de enero le enviaron una nota expresando el pedido a la presidenta del CPE y Subsecretaria de Educación, Mara Alvarez. Y en febrero, el secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, describía el panorama: “El reclamo salarial es impostergable y no hay otra forma de lograrlo que con la huelga, si no comienza el 6 de marzo será más adelante, pero este año vamos a recuperar el

salario” (Diario Río Negro, 06/02/2006, p.11). Asimismo, advertía al gobierno sobre posibles medidas de fuerza: “Los docentes neuquinos tienen que recibir una fuerte señal del gobierno que permita recomponer salarios que fueron pulverizado durante la última década; si no hay mejora, el ciclo lectivo será conflictivo” (Diario Río Negro, 13/02/2006, p.10).

El día pautado para el inicio de las clases era el 6 de marzo y el gremio se mantenía fuerte en el reclamo. De esta manera, ante la ausencia de una decisión del Gobierno, el 1 de marzo definió en un plenario de secretarios generales no iniciar el ciclo lectivo. Ese mismo día, el Ministro de Educación Mario Morán declaraba que reconocía el derecho a huelga, que era respetuoso de ello, pero que descontaría los días no trabajados.

Ante la estrategia de ATEN el Gobierno rápidamente tomó cartas en el asunto: dos días después del anuncio del gremio, Sobisch otorgó un incremento salarial que se aplicaría desde el mismo mes de marzo, y parte de la suba estaría atada al presentismo, ítem que el gobierno había incorporado el año anterior. ATEN no se amilanó ante la decisión del Gobernador y tres horas después ratificó el paro, considerando insignificante las subas otorgadas. Así, se iniciaba una nueva pulseada entre dos actores que ya venían protagonizando cruces cada vez más fuertes en los últimos años.

Ante esa decisión, Sobisch se mostró muy molesto y manifestó no entender la realización de paros, criticando con dureza la protesta: “utilizan el sistema educativo para tener como rehén a la sociedad y como consecuencia de ello desestabilizar un gobierno”. La jornada de paro tuvo un alto acatamiento y el titular de la cartera educativa se pronunció ante la prensa en el mismo sentido: “El gremio no tiene jerarquía para poder sintetizar la opinión de los afiliados. El asambleísmo lo ha llevado a no tener conducción” (...) “Es como si el Gobierno quisiera definir todas sus acciones en asambleas con los empleados públicos; de esa forma no se puede hacer nada”¹⁴. Además, en el acto de apertura del ciclo lectivo sostuvo: “debemos recibir a los chicos con alegría porque los estamos esperando, no en la calle, sino en las escuelas para que

¹⁴ Uno de los rasgos principales de ATEN es la estructura asamblearia. Las determinaciones surgen de las disidencias, puesto que cada decisión del gremio debe sortear el debate y la búsqueda de consenso en toda la provincia, para llegar así al plenario de secretarios generales, donde se emiten los pronunciamientos. De esa forma, el gremio decide los paros en votaciones de su plenario. En el caso de huelgas, cada secretario general representa a la participación de su asamblea; los matices de cada medida de fuerza si son establecidos por el plenario, con un voto por representante.

estudien, aprendan y vivan, no para que salgan a manifestarse y protestar” (Ambas en Diario Río Negro, 07/03/2006, p.8).

Respecto al conflicto, la posibilidad de negociación quedaba reducida a las pretensiones y condiciones del gobierno. Como tantas otras veces las expresiones se repetían, el Ministro sostenía que ya había convocado a una mesa de diálogo y que había obtenido como respuesta un paro, que con esas medidas no se podía negociar: “el gremio rechazó la instancia de negociación”, afirmaba. Mientras tanto, ATEN interrumpía su plenario y se dirigía a Casa de Gobierno con el objetivo de entrevistarse con Sobisch y con Morán. Era más bien una chicana, una estrategia que buscaba mostrar que el gobierno no estaba interesado en dialogar con el gremio.

Fruto del disenso, ATEN resolvió prolongar las medidas de fuerza, con lo cual toda la primera semana de clases se vería alterada. El plan de lucha incluía movilizaciones y cortes de ruta, que se llevaron adelante en puntos estratégicos. En la ruta del petróleo, en cercanías a Rincón de los Sauces, se interrumpió el paso permitiendo solamente que los operarios de los yacimientos regresaran a la localidad pero no a sus puestos de trabajo. La medida adoptada por el gremio recibió además el apoyo imprevisto de los trabajadores del petróleo, y el secretario general del sindicato de Petróleo y Gas Privado manifestó públicamente su apoyo al reclamo docente, al igual que otros referentes políticos de la zona. Dicho apoyo en realidad se sostenía fundamentalmente en motivos políticos, en un marco de alianzas e internas dentro del MPN. La facción opositora a Sobisch prestaba colaboración con el reclamo educativo y el conflicto, de esa forma, adquiriría mayor potencia y visibilidad.

En ese marco, las señales de acercamiento no se producían. De un lado y del otro se cruzaban declaraciones y la posibilidad de acuerdos era muy remota. La oposición política intentaba promover instancias de acercamiento para poder efectuar reuniones, con el objetivo de encontrar soluciones salariales y de infraestructura. En este último aspecto, la situación tampoco era positiva. Numerosos establecimientos continuaban con problemas edilicios debido a demoras en las obras, y si bien la proporción de colegios en óptimas condiciones era superior a la cantidad de escuelas paralizadas por deficiencias, las protestas efectuadas para satisfacer esos pedidos eran intensas. Tanto en Cutral Có, Plaza Huinul, Buta Ranquil, Villa Pehuenia y Aluminé hubo focos de conflicto.

La situación no se descomprimía y el enfrentamiento discursivo iba en crescendo. Sobisch era categórico a la hora de denostar el accionar del sector en

protesta: “Parece que si las cosas no llegan en el tiempo y forma que las necesitamos, la solución es cortar la ruta; pero cada vez que cortamos una ruta cerramos el camino de un niño que no puede ir a la escuela” (Diario Río Negro, 10/03/2006, p.10). Estas declaraciones se produjeron en el marco del quinto día consecutivo de huelga, que tuvo además movilizaciones y que desde el tercer día incluían cortes de tránsito en las rutas que conectan las áreas petroleras.

Para la semana siguiente, ATEN resolvió continuar la medida de fuerza por 72 horas más (por lo menos) y profundizar los cortes de ruta en la zona petrolera, obstruyendo los accesos a los yacimientos. El apoyo logístico a los maestros en reclamo fue brindado por el sindicato de los petroleros, cuyos dirigentes jugaban una pulseada contra el Gobernador. El fin de semana ya se apreciaba el endurecimiento de los piquetes, con cortes totales en las rutas provinciales 5 y 6. Hasta ese momento, sólo se perjudicaba a las empresas petroleras pero no al gobierno provincial, ya que la producción de petróleo en ningún momento se detuvo. Los trabajadores de la educación sostenían firmemente su postura: “De la ruta no nos vamos hasta que el gobierno de muestras de diálogo” (Diario Río Negro, 12/03/2006, p.10).

El panorama con el correr de los días se fue complejizando y oscureciendo. Por un lado, el gremio se mostraba dispuesto a negociar cuando el gobierno efectuara una propuesta; por el otro, el gobierno no dialogaría con medidas de fuerza de por medio. En ese abroquelamiento, los cortes de ruta se extendieron a otros puntos de la provincia. Y con ello el aumento del nivel de confrontación discursiva. La suba otorgada estaba lejos de las expectativas de los docentes y su secretario general repetía una y otra vez que deseaban un aumento en el sueldo básico (al que ubicaban como uno de los más bajos del país) y el blanqueo de las sumas en negro. Pero fundamentalmente pretendían una propuesta del gobierno, para recién allí definir en el marco de las asambleas la aceptación de la oferta o no y así abandonar los cortes de ruta y la protesta. Morán, muy ofuscado, declaraba ante la prensa: “Esta es una cuestión ajena al sector educación, es una medida muy irracional, con un reclamo salarial docente empezamos por intentar parar toda la producción; solamente puede caber en alguien que tiene una conducta realmente perversa” (Diario Río Negro, 15/03/2006, p.8).

El conflicto sufrió algunos cambios a partir del octavo día de huelga. El gobierno movió una ficha del tablero y Sobisch se reunió con el secretario del sindicato petrolero. Éste modificó su apoyo a la protesta y los trabajadores de su sector dejaron de contribuir en la lucha docente, por lo que algunos piquetes fueron levantados y los

trabajadores de la educación vieron acotarse su poder ante el gobierno. Sin embargo, lo que se sumó al conflicto salarial fue el reclamo de la localidad de Rincón de los Sauces. El problema docente, que ya generaba desabastecimiento y repercutía fuertemente en la provincia, en la localidad petrolera se padecía mucho más aún. Así, muchos ciudadanos encabezaron una protesta numerosa en la que solicitaron diversas obras y acciones para mejorar la ciudad.

Tras dos semanas de paros, el gobernador finalmente convocó a una mesa paritaria para discutir con el gremio. En rigor, el impacto del conflicto no era tanto por el nivel de adhesión a la huelga, sino por los problemas que se estaban empezando a producir en la producción de gas y petróleo ante los cortes en toda la provincia. En la tercera semana de huelga, el gremio manifestaba no acceder a la paritaria y el gobierno finalmente envió una propuesta concreta. ATEN no la aceptó y lanzó rápidamente una contrapropuesta. El gobierno la recibió como una terquedad del gremio y el jefe de gabinete Lara señaló: “se respondió con más beligerancia”. En ese momento del conflicto los cortes de ruta se mantenían en toda la provincia. El piquete en Rincón de los Sauces se había logrado flexibilizar, luego de un acercamiento entre los docentes y los trabajadores del petróleo, de manera que éstos pudieran tratar de normalizar la situación en cuanto al abastecimiento, ya que los problemas iban a repercutir inclusive a nivel nacional.

El Gobierno no accedió a la contrapropuesta y el conflicto se estancó nuevamente. Morán salió a atacar al gremio y nada hacía preveer una salida, puesto que consumada la tercera semana de paro ATEN resolvía continuar la medida de dureza y sumar un nuevo piquete en la localidad turística de San Martín de los Andes. Sobisch declaró ofuscado: “Ya no hay un objetivo salarial, sino un objetivo político de desestabilizar al gobierno del MPN...”. Además, calificó de “salvaje” la metodología de cortes de ruta y se desligó de posibles respuesta represivas: “Se está buscando por todo los medios que el gobierno desaloje las rutas para aparecer la dirigencia de ATEN como víctimas de un gobierno autoritario, que utiliza la fuerza” (Ambas en Diario Río Negro, 26/03/2006, p.10).

Hacia fin de mes el conflicto se intensificó de manera tal que los cuatro accesos a una refinería de Plaza Huincul estaban bloqueados, por lo que la mayoría de las estaciones de servicio de Neuquén y Río Negro sufrían el desabastecimiento de los combustibles. ATEN había resuelto profundizar las medidas de fuerza, fundamentalmente en las zonas de producción petrolera de Rincón de los Sauces y

Cutral Co-Plaza Huincul. De esa manera, a los pocos días los problemas eran visibles y los efectos del reabastecimiento se hicieron sentir. Municipios y comunas de Neuquén y de Río Negro restringían y limitaban diversos servicios, puesto que experimentaban múltiples trastornos en el transporte y las comunicaciones.

Mientras tanto, el Gobierno nacional se había comunicado con las partes e intentaba aportar soluciones. Neuquén era la única provincia donde luego del acuerdo con CTERA Nacional (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) las clases no habían comenzado, y la ley nacional que exige el cumplimiento de un mínimo de 180 días de clase por año, estaba en riesgo (el año anterior Neuquén tampoco había alcanzado esa cifra). Las voces contra las medidas adoptadas por el gremio docente se escuchaban desde todos los ámbitos.

El desabastecimiento del sistema productivo provincial era repudiado por todo el arco político local. Algunos gestos desataban cruces fuertes y ninguno de los actores en disputa aflojaba¹⁵. Sin embargo, en ese contexto tan ríspido, un nuevo acercamiento entre las partes podía producirse. El Ministro Morán se reunía con otras autoridades en busca de una solución, y ante una posible participación de miembros de ATEN sostenía: “si toda la conducción del gremio quiere dialogar, tienen que levantar las medidas de acción directa en toda la provincia”. Se trató de una mesa de diálogo que fracasó, en el medio de un clima muy tenso entre militantes del MPN y los docentes. Los primeros se conformaron como un actor más en la disputa, puesto que participaban en los episodios de protesta prestando apoyo al gobierno. La frustrada reunión no prosperó debido a desencuentros que lo único que consiguieron fue el reforzamiento de las posiciones intransigentes.

El titular de Educación se había comprometido a recibir a docentes de Rincón de los Sauces si el corte en esa localidad se flexibilizaba, cuestión que así ocurrió, pero al momento de formar parte de la reunión a los maestros de la localidad petrolera se les informó que podían participar sólo con unos pocos representantes. La postura de ATEN era otra: de la reunión debían formar parte toda la conducción, lo cual incluía a representantes de toda la provincia y no sólo de Rincón de los Sauces. Ese desencuentro lo único que generó fue un mayor enfrentamiento discursivo y menor posibilidad de

¹⁵ Los cruces entre funcionarios y el gremio durante el conflicto fueron una constante. El exabrupto de la intendenta emepenista de la localidad de Plottier, Pilar Gómez, así lo refleja. En un acto de inauguración de una feria local, la Intendenta, con el Vicegobernador Brollo a su lado, le hizo “fuck you” e insultó a un grupo de padres y docentes que protestaban y reclamaban por problemas de infraestructura (el Concejo Deliberante de la ciudad había declarado la emergencia educativa). Luego Gómez salió al aire en el canal de televisión de la provincia y admitió su error.

salida. Ahora, el gremio sólo iba a acceder a un cambio de postura en el conflicto si les llegaba una propuesta por escrito y continuarían con los paros y los cortes en las rutas y caminos provinciales. En ese momento la Ministra de Seguridad y Trabajo, Susana Arévalo, declaró: “Lo más fácil hubiera sido utilizar la fuerza policial (...) no lo hicimos ni lo vamos a hacer” y consideró que con piquetes “no se construye la paz social y no hay acuerdos posibles” (Diario Río Negro, 30/03/2006, p.9).

El día número 24 de paro marcó un quiebre en el conflicto. El 30 de marzo, en un piquete ubicado en la refinería de YPF en la localidad de Plaza Huincul, los docentes fueron desalojados en forma violenta por trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) junto a algunos trabajadores petroleros. A pedradas y empujones, los trabajadores de la educación debieron abandonar el corte ante la pasividad de la policía y el accionar impúdico de unos 200 manifestantes que ocasionaron 5 heridos.

Inmediatamente a este hecho, desde todos los ámbitos se enfrentaba a los docentes y su lucha. Por distintos medios se intentó desacreditar la actitud y metodología del gremio, ya sea a través de solicitadas en los diarios, de volantes públicos o de comunicados. Era la repuesta de la estructura del MPN: a través de actores ligados al sistema prebendarlo montado por el gobierno, se acusaba de un daño severo a la institucionalidad de la provincia. Así, cámaras empresarias, sindicatos oficialistas, militantes y dirigentes del MPN y partidos afines al oficialismo, iniciaron una ofensiva para solicitar el despeje de las rutas. Incluso un grupo identificado como Padres Autoconvocados Neuquinos repartía volantes pidiendo rutas y escuelas abiertas.

Lo que no hubo de parte de los funcionarios provinciales ni del partido gobernante fueron pronunciamientos repudiando los sucesos acontecidos, tampoco autocríticas. El ataque sufrido por los docentes fue el punto de inflexión en el conflicto. Las imágenes de los hechos fueron captadas por el canal de televisión “Todo Noticias” y recorrieron todo el país. Cinco mil personas marcharon en la capital neuquina repudiando los hechos de Plaza Huincul, el sacudón fue muy grande y a partir de allí el gremio flexibilizó su postura en pos de un encuentro con el gobierno. Hasta ese entonces había seis cortes en distintos puntos de la provincia con diferentes modalidades: en algunos había corte total intermitente, en otros cortes parciales permanentes. Ahora decidían alejarse de las rutas, pero el paro continuaba, de manera que lo que se buscaba era una rápida reunión con el Gobierno.

El obispo Marcelo Melani se ofreció como mediador luego de los hechos de Plaza Huincul, muy preocupado por el nivel que había alcanzado el conflicto. Finalmente, luego de 29 días con paros y piquetes (el 4 de abril se selló el acuerdo y se firmó el acta), las partes se reunían y al día siguiente, luego de que ATEN deliberó en asamblea la propuesta del gobierno, se alcanzó un acuerdo. Las asambleas gremiales convalidaron la propuesta oficial y finalmente se firmó el convenio.

El episodio demostraba una vez más el estilo de Sobisch. El Gobernador, declaraba una y otra vez ante los medios de todo el país que había desterrado los piquetes en su provincia, era desmentido por la propia realidad. Probablemente no se trataba de un costo político o de imagen lo que el mandatario sufriría producto del accionar contra los docentes, más bien parecía ser una actitud y una acción claramente orquestada. En lugar del desalojo de un piquete a manos de la policía, lo que se montaba era un supuesto enfrentamiento entre gremios con una pasividad policial como contexto. En rigor, esa tesis no duraría nada en desvanecerse ya que los docentes sostuvieron, desde un primer momento, que existió una “zona liberada” frente a la destilería de Plaza Huincul y que hubo militantes del MPN entre los manifestantes de la UOCRA. Ese día la policía provincial no intervino hasta después de varios minutos, cuando ya se había calmado en gran medida la situación. Y en realidad, entre los supuestos albañiles de casco amarillo, participaron punteros políticos, dirigentes y referentes barriales y empleados de la Legislatura.

Es importante señalar que a las pocas horas de los incidentes la jefatura de Policía de la provincia descabezó a la dirección de Seguridad que intervino en el conflicto. En un comunicado de prensa, se aclaró que la determinación no corrió por cuenta de la máxima autoridad del área, la Ministra Arévalo, sino que partió desde la misma institución. El jefe de la policía argumentó esa decisión en función de haber hablado con la prensa cuestiones que no debían difundirse, y no a causa de la denuncia formulada que desnudaba la postura del gobierno. El subcomisario Mario Zambrano y otros jefes policiales denunciaron públicamente haber recibido órdenes de no intervenir por parte del subjefe de la policía Soto, facilitando de ese modo el accionar de fuerzas irregulares. En la denuncia de los jefes arrepentidos, se admitió que se camuflaron agentes policiales de civil y que Juan Antío, funcionario y titular de la seccional Cutral Co del MPN, daba las órdenes al grupo policial.

Casi veinte días después de los hechos, el gobernador reafirmaba su postura respecto a la labor policial y al plan de Seguridad: “Vengo a ratificar, como

Gobernador, al Jefe de la policía, al subjefe y a toda su plana mayor con el apoyo político para llevar adelante las tareas que le competen (...) de la misma manera que a mí me ratificaron a través de la legitimidad del voto, yo asumo el derecho sagrado de la legitimidad que me dan el pensamiento y los sueños de hombres y mujeres de la provincia para ratificar el plan de seguridad”. Y al mismo tiempo se desligaba de los episodios: “Cuando hay de por medio una investigación judicial yo no emito opinión” (Todas en Diario Río Negro, 18/04/2006, p.9).

Específicamente sobre lo sucedido en Plaza Huincul y el desalojo docente, se refirió en un acto político: “El jefe político de la policía soy yo, y la responsabilidad de no actuar de la fuerza tiene nombre, apellido y responsable: Jorge Sobisch”¹⁶. Además, sostuvo que emitió esa orden para “que no actúen cuando yo creía que estaba en riesgo la paz social” (Ambas en Diario Río Negro, 20/04/2006, p.11). Al admitir ser responsable de la inacción policial, quedó vinculado al accionar del grupo parapolicial. Es decir, se hizo cargo de permitir las agresiones, teniendo en cuenta además que jamás se pronunció condenando los hechos. Los docentes mantenían el corte en un clima de tensión, con amenazas y posibles desalojos violentos. Inicialmente la rispidez fue con los trabajadores petroleros, pero luego aparecieron los de la UOCRA, uno de los gremios más afines a la gestión del gobernador, y actuaron impunemente.

Ningún funcionario efectuó un repudio a los sucesos. La Ministra de Seguridad Arévalo no realizó autocríticas y afirmó que la policía “evolucionó de acuerdo con el crecimiento económico y poblacional que experimentó Neuquén en los últimos años”; y en relación al plan de integral de seguridad, sostuvo que el mismo “en toda su integridad está recorrido por la concepción vital de saber que la seguridad es el bien social por excelencia” (Ambas en Diario Río Negro, 18/04/2006, p.8). Por su parte, el presidente del bloque del MPN, Manuel Gschwind, en una sesión en la legislatura señaló: “Respetamos a nuestra policía y reivindicamos su accionar, como el de Arévalo y del Gobernador. “Pareciera que se olvidan de que veníamos con unos días de rutas cortadas en la provincia” (Diario Río Negro, 12/05/2006, p.10). Ese día el MPN aplicó la mayoría automática y archivó dos proyectos de resolución que había presentado la oposición para que la Ministra Arévalo concurriera al edificio legislativo a dar explicaciones por los hechos de violencia del 30 de marzo en Plaza Huincul.

¹⁶ En junio de 2014 Sobisch resultó absuelto en el juicio que se le llevó adelante por abuso de autoridad. La Justicia determinó que dicha declaración no puede ser utilizada como prueba de que hubiera una orden directa o indirecta a la policía de no actuar y permitir el accionar de la patota.

4.2.2 - Ecos de la “Zona Liberada”

Luego del “acuerdo” post-represión, la situación no volvió a la normalidad. El acta entre las partes establecía entablar el diálogo y el debate en el marco de una mesa permanente, en pos de alcanzar acuerdos. Esa “mesa permanente” se instrumentó, pero no hubo acuerdo y debieron volver a reunirse el 9 de mayo. Allí tampoco hubo acuerdo y el gremio resolvió hacer un paro con movilización. De esa reunión Morán salió muy enojado y molesto por la participación de los estudiantes en las protestas, los cuales también se unieron al conflicto: “Los hacemos responsables de cualquier cosa que pueda llegar a ocurrirle a los chicos” (Diario Río Negro, 11/05/2006, p.6). Efectivamente, el 11 de mayo hubo una marcha masiva al CPE y a Casa de Gobierno, de la que participaron tres mil personas aproximadamente.

Finalmente, el 13 de mayo se produjo el acuerdo definitivo entre el gremio y el gobierno. El secretario general de ATEN se mostró contento y afirmó: “Dimos un paso adelante, nos falta solucionar el tema de los auxiliares de servicio”. Pese a ello, la crisis educativa seguía al no resolverse la situación con los estudiantes: 25 establecimientos mantenían medidas de fuerza y 15 de ellos estaban tomados. Al respecto, el vicegobernador Brollo sostuvo: “en un establecimiento de 1000 chicos, hay 30 o 40 chicos, quizás menos del 5% que, con sus ideales, con su polenta de los 12 y 15 años están confundidos”. La ocupación de los colegios le disgustaba y así lo hacía saber: “hay 950 que quieren estudiar y un grupo de chicos a los que les está faltando en sus casas esos valores” (...) “es necesario que apuntalemos a esas familias” (Diario Río Negro, 18/05/2006, p.9).

El diálogo no existía, el conflicto se dilató y se llegó a la toma de los colegios. Finalmente, la titular del CPE Mara Álvarez se comprometió a fijar fechas concretas de compromiso para cumplimentar con los pedidos de los jóvenes: aumento de viandas y becas, entre otras cosas, fijando plazos y estableciendo por escrito un cronograma de obras de infraestructura. La parte irresuelta del conflicto educativo de 2006, la de los auxiliares de servicio, afloró en poco tiempo. A fines de mayo ya se barajaban probables medidas de fuerza que en el mes de junio se efectivizaron. El gobierno nuevamente

reaccionó tarde y debió salir a contratar personal eventual para hacer la limpieza y reabrir las escuelas.

Este panorama tan conflictivo llevó a que la oposición pidiera una asamblea popular pedagógica, como respuesta a la crisis del sistema educativo neuquino. Las escuelas estaban en asamblea todos los días prácticamente. Se buscaba con ello la participación de todos los sectores sociales, para que discutieran y elaboraran políticas educativas a corto, mediano y largo plazo. En el primer cuatrimestre de 2006 Enargas clausuró el servicio en 280 establecimientos, lo cual obligó al gobierno a invertir 24 millones de pesos que no estaban previstos en el presupuesto educativo, de acuerdo a las palabras del Ministro Morán. El proyecto buscaba canalizar esa energía, sacarle provecho e institucionalizar soluciones de fondo, de acuerdo a las palabras de los impulsores de la iniciativa. En ese contexto, finalmente la legislatura provincial elaboró una resolución que creó la actividad programática denominada “Compromisos educativo para el decenio 2007-2017”.

4.2.3 - El 2006 de Sobisch con vistas a 2007

El Gobernador neuquino inició el año 2006 firmemente decidido a instalar su nombre en la carrera presidencial hacia 2007. Así, a fines de enero concurrió al programa televisivo de Mirtha Legrand y expuso sus ideas respecto a la situación nacional y provincial. Detalló varios indicadores sobre Neuquén y sostuvo que su intención era poder copiar en otras provincias muchas de las acciones logradas en su gestión. Sobich se galardonaba afirmando que estaba reformando la Carta Magna provincial, dando a entender una pluralidad democrática; pero lo cierto es que el panorama en la región patagónica no era el mejor, puesto que a los pocos días de su presencia en el living de la conductora televisiva los mapuches fueron reprimidos en la Convención Constituyente. Y en ese mismo mes, un conflicto por falta de agua en la localidad de Cutral Có obligó al mandatario a instalarse en la ciudad hasta poder resolver la situación. La falta de suministro generó una protesta masiva que incluyó cortes de ruta durante varios días, lo cual desmitificaba muchas de sus declaraciones públicas¹⁷.

¹⁷ Neuquén estuvo repleto de protestas de todo tipo. Por ejemplo, en mayo de 2006 un grupo de discapacitados cortó en forma intermitente durante varias horas el tránsito en el puente que une Neuquén

Sobisch ofreció a lo largo de todo el año, fiel a su estilo político, discursos contradictorios. Luego del caso “Zona liberada”, el año legislativo fue inaugurado con un discurso sin grandes anuncios resonantes como otrora acostumbraba formular. El tono moderado utilizado en dicha ocasión contrastó con las palabras proferidas en los festejos de la CGT de Neuquén Capital por el día del Trabajador: “es bueno que haya otros dirigentes que piensen que a partir de instalarse en el sistema democrático pueden competir. Ya se dieron cuenta que no van a competir cortando rutas o puentes, sino con ideas y propuestas, así que bienvenidos sean. Es bueno que hayan dejado esas herramientas que no le hacen bien a la paz social y a la construcción”, sostenía en alusión a Unión de los Neuquinos (Une), el brazo político del gremio estatal ATE (Diario Río Negro, 02/05/2006, p.9).

Las expresiones en contra de los protagonistas de la protesta también fueron recurrentes, y se enmarcaban dentro de una estrategia en la cual buscaba posicionarse como el líder de una corriente de derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2007. Para la formación de dicho espacio tuvo contactos con diversos dirigentes políticos y personalidades: Mauricio Macri, Luis Patti, Antonio Bussi y Juan Carlos Blumberg, entre otros, participaron de encuentros con el gobernador patagónico, en el marco de la búsqueda de acuerdos para enfrentar al kirchnerismo. En el mes de julio Sobisch señaló: “si para conseguir aumentos de sueldo en la provincia del Neuquén, vamos a seguir apelando a la extorsión y nadie dice nada, la torta se la van a llevar los que más rompen vidrios, los que más cortan calles, los que más queman cubiertas” (Diario Río Negro 12/07/2006, p.12).

En cada oportunidad que aludía a los piqueteros y a los sectores en lucha los descalificaba. Ese posicionamiento que Sobisch buscaba se asentaba sobre otra idea fuerte: la defensa irrestricta de las fuerzas de seguridad. En su proyecto de país, las fuerzas armadas debían ocupar un lugar destacado y por eso frecuentemente daba muestras de simpatía para con ellas. En el acto por el 68 aniversario de la Gendarmería Nacional sostenía, sobre las fuerzas armadas y de seguridad del país, que estaba dispuesto “a jerarquizarlas para que tengan en la sociedad el lugar que se merecen” (Diario Río Negro, 29/07/2006, p.13).

En el marco de esta estrategia de campaña ultra anticipada, decidió poner en práctica un nuevo método de contacto con la prensa. Así, en agosto inició una nueva

con Cipolletti. Lo que allí se pedía era un aumento a las pensiones provinciales por invalidez y el cumplimiento de los beneficios para las personas con discapacidad, previstos por ley.

etapa en la relación con el periodismo, instrumentando contactos a “agenda abierta” en los que pretendía entablar encuentros de forma habitual para dar a conocer el desarrollo de su gestión. Eran charlas abiertas, en las que el gobernador se mostraba distendido y con intenciones de hablar en forma amplia y precisa de cualquier tema que se le consultara.

En septiembre, octubre y noviembre repitió esa metodología. De esa forma, recibía a los periodistas (con música de fondo, de acuerdo a las crónicas periodísticas) y se mostraba atento ante cualquier consulta o inquietud. Abierto, hablaba de todos los temas y señalaba que convocaría a los representantes de los gremios ATE y UPCN a una mesa de discusión salarial para debatir una recomposición de los sueldos. Reconocía que dicha mesa salarial formaba parte de una estrategia para reducir la conflictividad social de un año electoral como 2007.

Pero lo más significativo fue lo ocurrido en octubre, cuando recibió en su despacho a los representantes del gremio ATEN, bajo la misma metodología aplicada con la prensa. Cerca de dos horas estuvieron reunidos y plantearon sus diferentes posturas en torno al sistema educativo y a una serie de reclamos y reivindicaciones que el gremio tenía. El acuerdo alcanzado en el primer semestre de 2006 había representado una conquista parcial de parte de ATEN, ya que en esa ocasión no se había resuelto lo referente a la transferencia de los montos que los maestros perciben en concepto de presentismo al salario básico. Fue un encuentro inesperado, tras años sin acceder a los despachos de Casa de Gobierno de forma oficial.

4.2.4 - El otro foco de conflicto en educación

A fines de octubre afloró nuevamente la conflictividad en el plano educativo. Los estudiantes secundarios nucleados en la CUES (Central Única de Estudiantes Secundarios) marcharon en reclamo del incumplimiento de una serie de acuerdos alcanzados en actas firmadas en mayo (para un plan de obras escolares), durante un reclamo estudiantil que incluyó “tomas” en unas 20 escuelas en toda la provincia. En la protesta arribaron al CPE y una vez allí exigieron una reunión inmediata con autoridades educativas. Ante la negativa obtenida frente al pedido, decidieron efectuar la “toma” del edificio, lo cual generó la respuesta categórica del ministro de Educación:

“Hay irracionalidad en los pedidos y hay violencia en las acciones que consideramos totalmente injustificadas” (Diario Río Negro, 25/10/2006, p.17).

Mientras el conflicto duró, los jóvenes llevaron adelante diferentes tipos de acciones tendientes a visibilizar el problema y generar espacios de diálogo. Pero las autoridades se negaban a programar audiencias en tanto continuara la toma del establecimiento, por lo que la situación se fue dilatando y las medidas se fueron extendiendo. La demora en la generación de instancias que permitieran abrir un diálogo y alcanzar a través de esa vía acuerdos, llevó a que los estudiantes que respaldaban la toma del CPE realizaran tres cortes en la ciudad, dos sobre la multitraza de la ruta 22 y uno en el acceso al aeropuerto de Neuquén. Cerca de tres horas permaneció allí el tránsito interrumpido, luego de que tomaran la medida al no poder obtener una reunión de forma grupal con el gobierno. Éste sostenía una y otra vez que accedería al diálogo “escuela por escuela”, algo que los estudiantes rechazaban de pleno.

El Ministro Morán en esa oportunidad salía a defender el accionar del gobierno: “No hay nada que sea fundamental que no se haya cumplido”, y se mostraba dispuesto “a dialogar con los jóvenes, pero no en las condiciones que nos quieren imponer”. Mientras tanto, el jefe de gabinete Jorge Lara criticaba la metodología de los jóvenes y cargaba contra los sectores opositores al MPN: “los reclamos pueden ser genuinos pero no es el método para reclamar, sobre todo en Neuquén, donde se ha hecho muchísimo esfuerzo (...) también otra gente nos dice que están permanentemente fogoneados por la gente de Zanón, y del PO, que son minoría cada vez que hay elecciones” (Todas en Diario Río Negro, 04/11/2006, p.16).

El gobierno intentó buscar mediaciones y acudió a la Defensoría del Niño y el Adolescente para que instara a los jóvenes al diálogo. El organismo emitió una recomendación en pos de resolver el conflicto, ante lo cual los estudiantes reafirmaron su postura: “si nos dicen que van a recibirnos a dos representantes por colegio y todos juntos, entonces levantamos la medida de fuerza”. Paralelamente, otros colegios fueron “tomados” en respaldo a la toma del CPE, la cual se convertía en la herramienta y bandera de lucha.

La posibilidad del diálogo estaba trabada por las formas que éste adoptaría: mientras los estudiantes querían un encuentro grupal con las autoridades educativas, el gobierno planteaba un encuentro por separado, escuela por escuela, y sostenía que para posibilitar la reunión era necesario que la CUES desistiera con la toma. El quiebre en el conflicto se produjo el 10 de noviembre, cuando en una marcha nutrida un grupo

minúsculo de 30 personas produjo graves incidentes. El saldo fue de varios automóviles incendiados, tres impactos de bala sobre el edificio de la gobernación y cinco menores demorados. Además de ello, se produjeron luego destrozos en el edificio del CPE y el posterior abandono de la toma. Las versiones de los incidentes fueron encontradas: por un lado, el gobierno sostenía que los jóvenes eran los autores de los daños materiales; por el otro, los estudiantes afirmaban que se trataba de infiltrados, de una “patota del gobierno provincial”.

Ese día se denunció que cinco jóvenes fueron detenidos por efectivos de la policía provincial y sufrieron apremios ilegales, y que en un caso, durante las horas que permanecieron demorados en la comisaría primera de la capital, hubo torturas. Las autoridades desmintieron rotundamente esto. Respecto al conflicto, el flamante subsecretario de Seguridad Pascuarelli, afirmó: “el que se tapa la cara no está haciendo un reclamo con claridad” (Diario Río Negro, 12/11/2006, p.8). El gobierno cargó contra el gremio ATEN “cuya conducción tiene el 10% de los votos” (Morán en Diario Río Negro, 16/11/2006, p.11) y contra Zanón: “yo vi a las vocales gremiales del CPE y a dirigentes de Zanón acompañar a los alumnos en la protesta y en la marcha (...) Estos sectores avalaron la toma dándoles comida, colchones y abrigo” (Mara Álvarez en Diario Río Negro, 12/11/2006, p.9).

Después de los incidentes, la investigación se dividió en dos direcciones: por un lado, el caso de los robos y daños que ocurrieron en el edificio del CPE; por el otro, los disparos contra la Gobernación. Producto del conflicto, el gobierno decidió cortar la mesa de diálogo que venía sosteniendo con el gremio docente y Morán afirmaba: “A ATEN no le interesa el diálogo sino el conflicto porque es incapaz de aportar algo positivo”. A ello agregó: “Esto fue perfectamente planificado. Debe quedar claro que mientras estábamos en la mesa de negociación (con el gremio) estaban planificando la toma del CPE. Quienes estuvieron activamente planificando fueron las vocales gremiales, que pertenecen a ATEN. Ellos llevaron adelante este desatino” (Ambas en Diario Río Negro, 30/11/2006, p.12).

Luego de varios días el gobierno configuraba una versión de lo sucedido. Sin embargo, para la oposición eso se trataba de un “show mediático” para ensuciar y deslegitimar la lucha estudiantil y no asumir las culpas por la falta de diálogo en el conflicto. Las balas de Gobernación no se podían peritar y tampoco quedaba del todo clara la magnitud de los destrozos, puesto que los estudiantes afirmaban que muchos de los sectores dañados nunca habían sido habitados durante la medida.

La toma del CPE duró 17 días y terminó de forma violenta con los incidentes frente a casa de Gobierno. Luego de eso, la relación entre el gobierno y ATEN, quienes habían estado durante el año y fundamentalmente en los últimos meses en una etapa de negociaciones salariales, se quebró. Morán le atribuyó responsabilidades sobre la protesta al sindicato y de allí en adelante no hubo contactos de ningún tipo. ATEN en diciembre no dudaba en afirmar: “si tenemos que salir a la calle otra vez lo vamos a hacer” (Silvia Venero, secretaria adjunta del sindicato, en Diario Río Negro, 29/12/2006, p.12).

4.2.5 – Redondeando el Plan de Seguridad

Los funcionarios provinciales le adjudicaban al plan de seguridad una enorme relevancia de cara a la solución de diversas problemáticas. Pero los gastos que el mismo demandó eran toda una incógnita. El plan Integral de Seguridad incluía la compra de vehículos, helicópteros, patrulleros y un moderno sistema digital de comunicaciones para la policía. El gobierno pretextó razones de confidencialidad ante los pedidos de la oposición y de la prensa crítica de saber con exactitud el monto y la forma de adquisición del equipamiento y del plan integral. En rigor, el sistema de comunicación para las fuerzas de seguridad se efectuó en forma directa y no bajo licitación pública, tal como lo estipula una ley provincial. Y de acuerdo al testimonio del gobernador, en visitas a estudios de televisión en Buenos Aires, 150 millones de dólares se utilizaron para la gestación del plan completo.

La instrumentación del plan se llevó adelante en diferentes etapas. En agosto, el jefe de la policía Carlos Zalazar señalaba que desde la fuerza se estaba elaborando una nueva estrategia de acción en el microcentro neuquino, que se pondría en práctica en menos de dos meses, enmarcada en el nuevo plan de seguridad. “No sabemos por qué se ha instalado tanto la violencia en la ciudad, pero parece que hoy no existe el diálogo y cuando ocurre una palabra hay agresión y violencia” (Diario Río Negro, 01-08-2006, p.7). Esa estrategia se iba a implementar en la zona céntrica, la cual se presentaba en los últimos tiempos como la más problemática. Esa explicación la efectuó en el marco de un acto oficial con la Ministra de Seguridad, en el que se dio a conocer la noticia de que dos meses atrás once cámaras se habían instalado en la ciudad en puntos estratégicos. El

gobierno provincial pretendía instalar más cámaras aún, ya que las consideraba una herramienta central del sistema de monitoreo, como parte fundamental del Plan de Seguridad.

En septiembre, la Ministra de Seguridad Arévalo afirmó: “El plan de seguridad está en construcción permanente y la referencia que hay que tener es el plan de salud neuquino que comenzó en la década del 70 y sigue avanzando”. A ello agregó: “La tecnología fue bien aceptada por los efectivos, y hay una baja del delito que creemos que en parte se debe a la capacitación y el equipamiento que hicimos” (Diario Río Negro, 12/09/2006, p.12). Así, enmarcaba otro de los ejes del plan: el equipamiento tecnológico de la policía, la cual pasaba a ocupar un rol muy destacado.

Ese mismo mes además hubo recambio de autoridades, y Raúl Pascuarelli asumió como Subsecretario de Seguridad en reemplazo de Hugo Acuña. El flamante funcionario sostuvo que su misión sería continuar con el plan, implementando la última parte: “tal vez no técnicamente, pero sí políticamente la más complicada porque consiste en hacerlo conocer”. Concretamente sobre cómo se implementaría la última etapa afirmó: “Fundamentalmente en la misma fuerza. Lo primero que tenemos que lograr es que llegue al resto de la fuerza, más allá de que en su elaboración ha participado un sector de la fuerza. Tiene que llegar desde el policía común al jefe policial y esto requiere de una estrategia para ir bajando ese plan a los distintos niveles primero, y luego a la comunidad” (Diario Río Negro, 26/09/2006, p.8). Del mismo modo, en la presentación de Pascuarelli el Gobernador señaló que el Plan de Seguridad neuquino era “modelo” y motivo de “orgullo” no sólo de la provincia sino también del país. Y lo caracterizó como “único en Latinoamérica”.

Todos los funcionarios no dudaban en elogiar las cualidades del plan y las potencialidades que su instrumentación conllevaba. La Ministra del área señalaba en octubre: “La capacitación neuquina es tan buena que vienen de otras provincias a capacitarse acá (...) La policía de Neuquén tiene un instituto de capacitación de excelencia” (Diario Río Negro, 04/10/2006, p.11). Por su parte el gobernador, en una exposición ante 400 efectivos de la policía de Neuquén realizada a fin de año, ya advertía sobre sus intereses y perspectivas: “Cuando tenga que dar una orden la daré y me hago responsable. No voy a dejar a nadie colgado del pincel” (Diario Río Negro, 12/12/2006, p.7). En esa disertación, de la cual también participaron Arévalo y el jefe de la policía Salazar, desarrolló los lineamientos técnicos y estratégicos del plan, al mismo tiempo que respaldó a los integrantes de la fuerza. Mientras tanto, la ministra aclaraba:

“¿Por qué es integral? Porque la seguridad es considerada como el bien social por excelencia y si la sociedad se siente segura puede desarrollar el resto de sus actividades. Y hay que integrar a otros sectores, como clubes, municipios” (Diario Río Negro, 12/12/2006, p.7).

Todas estas declaraciones revelan un mensaje absolutamente explícito de los funcionarios. Sin rodeos ni vueltas, intentaban dejar en claro ante las fuerzas de seguridad cómo debían operar. Sobisch afirmaba de manera contundente que iba a respaldar el accionar de la fuerza cuando tuviese que actuar en las circunstancias que correspondieran, aunque según él, siempre que fuera en el marco de la ley.

4.3 - 2007: La puesta en práctica y difusión del plan

Para Sobisch 2007 era el año crucial de su carrera política. Todas las fichas estaban puestas en su aspiración presidencial, en consecuencia varias ciudades turísticas de la costa bonaerense tenían afiches y gigantografías con su imagen. Pero al mismo tiempo en la provincia patagónica los conflictos surgían constantemente. En enero, la población de Añelo cortó los accesos a la localidad y a áreas de explotación hidrocarburífera en reclamo por agua potable. Y en el mes de febrero un hecho trágico convulsionó a la capital provincial: el brutal asesinato de un chofer de taxi.

Ante ello, los taxistas rápidamente se organizaron y decidieron efectuar una serie de piquetes en protesta por el episodio, reclamando por el esclarecimiento del homicidio y por mayor seguridad. De esa manera, dejaron la ciudad prácticamente sitiada con cortes en todos los puntos de ingreso y salida a la capital provincial. Ningún automóvil, a excepción de las ambulancias, podía ingresar o egresar a la ciudad. Empresas de colectivos de media y larga distancia paralizaron sus actividades, al mismo tiempo que el resto de la comunidad vio alterada su rutina habitual.

El tan promocionado plan de seguridad estaba en el ojo de la tormenta. Y Sobisch salió a defenderlo: “Exhibiré las estadísticas que demuestran con números concretos una notoria mejoría en materia de seguridad” y “Tendremos la policía mejor equipada de Latinoamérica” fueron algunas de sus expresiones (Ambas en Diario Río Negro, 19/02/2007, p.6). Luego de casi un día y medio con cortes, los taxistas de Neuquén, Centenario y Plottier levantaron las medidas tras un acuerdo entre

representantes de su sector y funcionarios de la policía provincial. Un acta-acuerdo se firmó entre las partes y el gobierno se comprometía a realizar una serie de medidas tendientes a mejorar la seguridad de los choferes.

El gremio de los taxistas está identificado con el MPN, de allí seguramente la inexistencia de críticas respecto a los métodos de protesta utilizados. Por ende, tampoco se escucharon repudios y descalificaciones cuando un grupo de choferes provocó destrozos en el Concejo Deliberante el día en el que el Intendente de la Ciudad y candidato a gobernador por la oposición, Horacio Quiroga, intentó inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias.

Por otro lado, el 1 de marzo Sobisch dio el discurso de apertura del 36° período de sesiones ordinarias de la Legislatura Neuquina. En esa jornada choferes de taxi y obreros de FASINPAT marcharon hasta el edificio legislativo para efectuar reclamos puntuales y se retiraron antes del discurso del gobernador. Éste, con un repaso y análisis de las acciones en los períodos 1991-95 y 1999-2007, brindó una enorme cantidad de datos estadísticos durante algo más de una hora. Entre lo más significativo del discurso se puede señalar, por un lado, la difusión de los índices de delito en la provincia que según los datos brindados disminuyeron a partir de la implementación del Plan de Seguridad; por el otro, la alusión al reclamo docente por mejoras salariales, al que calificó de “un absurdo al que no hay que agregarle comentarios” (Diario La Mañana de Neuquén, 02/03/2007, p.3). Además, aseguró que el sistema educativo debía rendir cuentas ante el gobierno y los padres, en el medio de un conflicto que ya estaba instalado.

4.3.1 - El caso Fuentelba

El panorama educativo de cara al ciclo lectivo 2007 no era nada alentador. La relación entre el gobierno y ATEN estaba en muy malos términos. En noviembre de 2006 el secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, afirmaba: “si no existe una resolución concreta sobre los planteos gremiales avizoramos un inicio muy complicado para el ciclo lectivo 2007 (...) El diálogo con el gobierno entró en una vía muerta y no por nuestra responsabilidad sino por la decisión de la provincia de no priorizar algunos aspectos centrales como la recomposición salarial” (Diario Río Negro, 07/11/2006,

p.10). Por su parte, el Ministro Morán declaraba: “A ATEN no le interesa el diálogo sino el conflicto porque es incapaz de aportar algo positivo, pero es lo que le sirve para estar en la cresta de la ola...”, “La dirigencia tiene los cables pelados y un grado de desequilibrio muy fuerte” (Ambas en Diario Río Negro, 22/11/2006, p.13).

Las acusaciones cruzadas fueron una constante y recién a fines de febrero el gobierno finalmente convocó al gremio a discutir diversas problemáticas del sector. El Ministro de Empresas Públicas Alfredo Esteves, a cargo interinamente de la cartera educativa¹⁸, señalaba que el gobierno estaba dispuesto a dialogar y a negociar un aumento de haberes para los docentes superior al establecido por Nación para todo el país. Sin embargo, los pedidos de los maestros eran mucho más amplios y no se reducían a la superación de ese piso nacional.

Así, el Ministerio de Educación convocó a ATEN a conformar una mesa de negociación con el objetivo de debatir el salario docente y otros reclamos gremiales, pero el resultado del encuentro no fue positivo. El gremio rechazó la propuesta y convocó a un paro de 72hs. a partir del lunes 5 de marzo. Los primeros días de ese mes hubo una nueva reunión, sin embargo nuevamente el sector docente consideró insuficiente la propuesta del ejecutivo. De esta forma, se configuraba otro inicio de clases conflictivo. En los últimos 20 años, más de la mitad de los inicios de los ciclos lectivos comenzaron con conflictos entre el gobierno y los docentes.

El 6 de marzo, en la apertura del ciclo lectivo con un paro de 72 hs como telón de fondo y con una muy alta adhesión, Sobisch señaló: “(El gobierno) va a seguir trabajando para construir espacios solidarios (...) En este año difícil tenemos que estar predispuestos al diálogo, a la discusión serena” (Diario La Mañana de Neuquén, 06/03/2007, p.3). Mientras, el secretario general de ATEN sostenía que les habían ofrecido “migajas”. En rigor, con la propuesta oficial los salarios se ubicarían por encima del piso que Nación había establecido, pero el gremio lo consideraba insuficiente debido a la situación de la provincia patagónica, donde los ingresos y recursos disponibles eran mucho mayores a los de la media de las provincias, por lo que la consigna era “salario igual a canasta familiar”.

El Ministro Esteves afirmaba ante la prensa que la mesa de negociación había dejado de ser de diálogo y pasaba a ser una negociación en la que “me das lo que te pido o continuo de paro. Más que una mesa pasó a ser un chantaje”, aunque manifestaba su

¹⁸ El Ministro de Educación se encontraba de licencia por problemas de salud, los cuales lo obligaron a presentar su renuncia los primeros días de marzo.

intención de separar la actitud de los docentes de la actitud del gremio, puesto que a su criterio los paros sólo tenían un acatamiento del 14%. La rigidez en los posicionamientos obturaba la posibilidad de nuevas negociaciones. El gremio pretendía una propuesta “integral” y que incluyera a los auxiliares de servicio, mientras evaluaba una profundización de las medidas de fuerza si el gobierno no daba respuestas.

Así, el mismo 6 de marzo ATEN resolvió continuar la huelga por tiempo indeterminado. Ante ello, el gobierno multiplicó sus críticas a los dirigentes gremiales y, al mismo tiempo, intentaba minimizar los efectos de los paros. En ese escenario, ninguno de los actores cedía terreno y los cruces eran recurrentes. “Marchas provinciales” escenificaban el repudio a las propuestas del gobierno, el cual había entablado nuevamente charlas con el gremio. Cuando el paro iba por su segunda semana y las negociaciones estaban estancadas, el gobernador se expresaba e intentaba mostrarse conciliador: “vamos a seguir en todo momento privilegiando el diálogo (...) se va a seguir negociando hasta cuando sea necesario con una gran paciencia” (Diario Río Negro, 15/03/2007, p.9). Días después, las visiones respecto a las adhesiones a la huelga seguían siendo completamente disímiles: mientras el gobierno señalaba que el promedio era del 7%, para ATEN ese porcentaje superaba el 80.

En el undécimo día consecutivo de paro, las negociaciones se interrumpieron y el gobierno endureció aún más su postura. “No hay más plata y no vamos a sentarnos a negociar con paros” (Esteves en Diario Río Negro, 20/03/2007, p.6). El ministro volvía a utilizar el término chantaje y descalificaba el reclamo: “están muy ocupados trabajando en tratar que los chicos no vayan a las escuelas”. Por su parte, los docentes efectuaban una demostración de fuerza con una movilización multitudinaria de la que participaron cerca de seis mil personas, de acuerdo a las crónicas periodísticas. Guagliardo también reflejaba un endurecimiento de la postura del gremio: “No habrá turismo ni tampoco Semana Santa si el gobierno no hace una propuesta concreta” (Diario Río Negro, 20/03/2007, p.6).

Cuando ya se llevaban perdidos 15 días de clases por el conflicto, una nueva propuesta fue presentada por escrito por el gobierno, pero los docentes la rechazaron y respondieron especificándoles qué puntos debían modificarse para alcanzar un acuerdo. Asimismo, anunciaban el comienzo de cortes sistemáticos en rutas de la provincia. Frente a eso, Esteves consideró que de esa forma “ATEN está haciendo apología del delito ¿Piensan que esto molesta al gobierno? Están perjudicando a la actividad productiva de la provincia. Así que están perjudicando a toda la comunidad” (Diario Río

Negro, 27/03/2007, p.13). Efectivamente, el 27 de marzo más de 5 mil trabajadores de la educación marcharon al puente que une Neuquén con Cipolletti y lo mantuvieron cortado durante tres horas, como un anticipo de lo que sucedería en Semana Santa si el gobierno no convocaba a una mesa de negociación.

Luego de la última propuesta, el contacto se había cortado y ambas partes endurecieron sus posiciones. El gremio decidió ir a las rutas provinciales para interrumpir el flujo de turistas y los circuitos productivos. De esa forma, en la capital provincial y en Centenario se efectivizaron las medidas durante tres horas, pero en otras localidades del interior los cortes fueron permanentes. De esa manera, docentes de todo el centro y norte neuquino mantenían cortadas las principales rutas. Inmediatamente, las cámaras que agrupan a empresarios y comerciantes de Neuquén, San Martín de los Andes y Chos Malal se pronunciaron contra los cortes de ruta y las pérdidas económicas aparejadas por esa metodología empleada, anunciando que además iban a recurrir a la Justicia. Por su parte, el Subsecretario de Seguridad Raúl Pasquarelli y el jefe de Seguridad de la Provincia, Mario Rinsafri, coincidieron en afirmar que la policía no desalojaría las rutas a menos que mediara una orden judicial: “La policía no puede actuar, salvo una orden específica de una autoridad judicial que pida la liberación de las rutas, de lo contrario no puede actuar” (Diario Río Negro, 30/03/2007, p.9).

Finalmente, los empresarios turísticos y comerciantes acudieron a la justicia solicitando el cese de los piquetes, mientras que los maestros definieron flexibilizar los cortes durante el fin de semana. Del mismo modo, en un plenario de secretarios generales, el gremio resolvió levantar todos los cortes (excepto el de Zapala) durante 24 horas como una manifestación de buena voluntad. Sin embargo, al mismo tiempo lo instaba al gobierno a actuar: de no recibir un llamado de las autoridades para conformar una mesa de negociación instalarían piquetes por tiempo indeterminado. La idea era efectuarlos en puntos estratégicos, de manera de entorpecer el flujo turístico de Semana Santa. Al respecto, el Jefe de Gabinete Lara afirmaba que “el gobierno no va ejercer la fuerza” para desalojarlos (Diario Río Negro, 03/04/2007, p.6).

Con 22 días de clase perdidos, el gobierno le solicitó a la Subsecretaría de Trabajo que dictara la conciliación obligatoria, pero el gremio no la aceptó y radicalizó su postura. Así, definió llevar a cabo un corte total en las inmediaciones de la localidad de Arroyito, un punto clave en la distribución de los turistas hacia los centros cordilleranos. El piquete se realizó y pese a los pronunciamientos de los funcionarios en

los días anteriores, la policía actuó. Un operativo violento desató la represión¹⁹, que incluyó gases lacrimógenos y balas de goma. Y la consecuencia más triste y lamentable: el fusilamiento de un maestro en manos de un integrante de la policía provincial.

Carlos Fuentealba, que se encontraba en la parte de atrás de un auto que participaba del corte, recibió en su cabeza un disparo proveniente de una pistola lanzagases. El impacto, efectuado a un metro y medio de distancia, perforó la luneta del vehículo y lo hirió gravemente. El profesor de química estuvo internado en terapia intensiva, pero al día siguiente luego de decretarse su muerte cerebral se le retiró el respirador artificial. De esa manera, el tan promocionado plan de seguridad alcanzaba la última parte de su instrumentación: la de la difusión. En todo el país y en el mundo entero Neuquén era noticia y no por las virtudes del Plan de Seguridad. Neuquén era noticia por el asesinato de un maestro en una represión policial de una protesta social.

4.3.2 - Post Fuentealba

La violencia simbólica y material/física del gobierno provincial contra los docentes luego de la muerte de Fuentealba y del posterior acuerdo no se detuvo, sino que se profundizó. El fallecimiento del docente, lejos de generar un quiebre tendiente a encontrar una solución inmediata en el reclamo, potenció las diferencias. Recién el 28 de abril se produjo un acuerdo y se comprometió el inicio de clases tras 55 días de huelga. La cantidad de material existente referido a expresiones de funcionarios, particularmente de Sobisch, luego del fusilamiento es enorme. Todo ello dentro del conflicto educativo 2007, o por si solo, es un tema de investigación, y teniendo en cuenta que el abordaje de este trabajo culmina con el fallecimiento del trabajador de la educación, no se reproducirán esas declaraciones. Sin embargo, si bien aquí se analiza la forma en que se dio el proceso que condujo al triste episodio, cabe señalar que esas valoraciones y percepciones de los funcionarios refuerzan las ideas que este trabajo plantea. Sobisch asumió su responsabilidad política por el homicidio y se mostró desafiante: aseguró que volvería a hacer todo tal como lo hizo entonces.

¹⁹ Ver en anexos los casos de represión en los que participaron las fuerzas de seguridad en 2007.

4.4 - Reflexiones parciales

En 2005 en Neuquén se perdieron 24 días de clases por un conflicto con los docentes, originado por demandas salariales y problemas de infraestructura en los edificios escolares. Los días caídos no se recuperaron y la meta ideal de un calendario de 180 días no se obtuvo. El 2006 también fue caótico: el conflicto con ATEN se sucedió en dos tiempos. El primero comenzó el 6 de marzo y concluyó el 4 de abril con la firma de un acta-acuerdo entre la conducción sindical y el Ministro Morán. Sin embargo, las interpretaciones encontradas sobre lo acordado derivaron en una reanudación de la huelga, por lo que se produjeron nuevas medidas de fuerza entre el 10 y 12 de mayo. Finalmente la situación se normalizó y los maestros volvieron a las aulas, aunque algunos colegios presentaban problemas de infraestructura que obligaron a mantener las escuelas cerradas. A los pocos días del acuerdo entre ATEN y el gobierno el conflicto se reanudó, pero en este caso el motivo fue un reclamo de los auxiliares que quedaron afuera del acuerdo original. Este nuevo conflicto concluyó parcialmente el 12 de junio, puesto que uno de los gremios alcanzó un acuerdo con el gremio, pero el otro no arribó a un acuerdo y de esa manera las medidas de fuerza de los porteros imposibilitaban la apertura de varios establecimientos. El dato final arroja un 2006 con 38 días perdidos por medidas de fuerza: ATEN convocó a 26 paros y los porteros cumplieron otras 12 jornadas de huelga; mientras que en 2005 hubo 24 días de paro. En ambos años no se recuperaron los días caídos.

Todo este panorama da cuenta de la crisis que atravesó el sistema educativo neuquino. En la provincia patagónica no se produjo un debate franco, horizontal, profundo y participativo en el área educativa. Es decir: hubo un estado de permanente conflictividad, con un malestar y un descontento generalizado producto de la falta de acuerdos. Fueron varias las falencias del sistema: precarización de las condiciones laborales de los docentes, problemas de infraestructura, pérdida de días de clase, dificultades en la vinculación de las autoridades con la organización gremial y una actitud del gobierno de ignorar la crisis, privilegiando la confrontación y responsabilizando a los docentes de las consecuencias de su propia ineficiencia y desinterés por la educación pública.

En el caso “Zona Liberada” el gobierno neuquino ignoró a los maestros durante días y los militantes del MPN hostigaron fervorosamente la lucha docente, pero finalmente el gobierno terminó otorgando todo lo que el gremio pedía. Los docentes solicitaron audiencia con las autoridades mucho antes de salir a cortar rutas, sin embargo se repitió la fórmula aplicada en anteriores disputas gremios-Gobierno: petitorios que no se responden, luego movilizaciones, después paros y, finalmente, actitudes intransigentes que derivan a último momento en decisiones salomónicas que se adoptan cuando el conflicto ya está totalmente dilatado innecesariamente. Y, por supuesto, con una dosis de represión.

En ese marco, las declaraciones de los funcionarios nunca colaboraron en la búsqueda de consensos. Siempre primaron la desacreditación y el repudio a los sectores en lucha: “Es una huelga que no tiene representatividad (...) Tengo la tranquilidad de que la comunidad está tomando conciencia de que una huelga lo único que hace es perjudicar al niño” (Mara Álvarez, Presidenta del CPE; Diario Río Negro, 12/03/2006, p.10). Los ejemplos de ese tipo, que reflejan un discurso destinado a justificar la denostación de quienes disienten con el proyecto oficial, abundan. Así, constantemente se apela a la sociedad, se la interroga, buscando situarla dentro del proyecto del MPN y fuera de la corriente de quienes se enfrentan al partido.

Esas expresiones además forman parte de un debate y un cruce ideológico que atraviesa varios ejes: se discuten los modos, la legalidad, la legitimidad, etc. De las palabras de los miembros del gobierno se desprenden numerosas lecturas sobre la realidad. Las representaciones que surgen forman parte de sistemas cognitivos en los que se reconoce la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas en las que los sujetos en lucha aparecen siempre negativizados y deslegitimados.

Las representaciones sociales categorizan tanto a lo propio como a lo ajeno, es decir, que no sólo definen al mundo de los intereses particulares sino también se distinguen de otros tantos. En este sentido, cabe señalar que la mayoría de las ideologías son representaciones sociocognitivas de las creencias básicas evaluativas, que sirven a sus propios intereses, de los miembros de un grupo sobre la lucha social y los conflictos de grupo. Por ello resulta fundamental conocer cómo los miembros del grupo se ven a sí mismos y cómo ven a los otros.

Una de las categorías centrales que Van Dijk aborda en muchos de sus trabajos es el esquema de polarización entre “Nosotros” y “Ellos” (Van Dijk, 2003a), en el que se encuentran afectados los grupos y los conflictos de grupos. De esa forma, los grupos

construyen una imagen ideológica de sí mismos y de los otros que (generalmente) “Nosotros” estamos representados positivamente y “Ellos” negativamente. La autorepresentación positiva y la representación negativa de los otros es una propiedad fundamental de las ideologías. Es decir, una de las características estructurales de las ideologías es la de la polarización de grupo: Nosotros versus Ellos. Y el gobierno provincial recurrentemente construye esas figuras, en las que los protagonistas de la protesta social aparecen distantes, ajenos, contrarios al buen proceder y sensatez que caracterizaría a los funcionarios. Pese a la voluntad dialoguista y constructiva que Sobisch pretendió mostrar con la prensa y con los sectores en lucha durante un lapso de tiempo, el abordaje integral de sus declaraciones revela una enorme cantidad de elementos y atribuciones con carga negativa hacia los disidentes del oficialismo y positiva en relación a los integrantes del gobierno.

Por otro lado, es necesario abordar a la legitimación y la deslegitimación (Van Dijk, 2003b), en tanto estrategias discursivas que implican la autorepresentación positiva y la presentación negativa de los otros. Las ideologías son un instrumento de legitimación y, como base de las representaciones sociales de los grupos y sus miembros, presuponen normas y valores. De esa manera, proveen el fundamento del juicio y la acción. De esa manera, los discursos legitimadores presuponen normas y valores y explícita o implícitamente afirman que un curso de acción, decisión o política es “justa” dentro del sistema político o jurídico dado o, más ampliamente, dentro del orden moral predominante en la sociedad.

En el análisis efectuado se advierte cómo la legitimación se convierte en el MPN en una de las estrategias de manejo de crisis: “legitimar acciones en un conflicto social y en una situación de desigualdad en la que un grupo es, o puede ser, desafiado por otro, habitualmente implica la afirmación de que esas acciones están dentro del orden moral general y, por lo tanto, no justificadas sólo por fundamentos partidarios, interesados” (Van Dijk, 1999, p.322).

Por su parte, la deslegitimación opera de varias maneras: aludir cuestiones fuera de contexto, focalizar elementos negativos, enfatizar la violación de valores comunes, enmarcar el discurso con una descripción negativa, etc. Los cortes de ruta y las consecuencias de ese accionar fueron constantemente repudiados por el gobierno provincial, destacando generalmente las consecuencias negativas que generaba esa medida en el bien común de la sociedad. Se criticaba la metodología, la legalidad, los repertorios, las ideologías, la violencia, etc.

La (des)legitimación del discurso es importante para comprender el conflicto y la reproducción ideológica. La relevancia de mencionar la cuestión de las ideologías es que pueden ser definidas en términos de su papel en la legitimación de la dominación. La ideología y la legitimación interactúan en el control de las relaciones entre grupos, como las de poder, dominación y resistencia.

Se está en presencia de una lucha ideológica, que por supuesto es además una lucha social y política. Los conflictos ideológicos y sociales toman la forma de una lucha no sólo por ideas o por recursos sociales escasos, sino también por la legitimidad. En ese caso, la dominación implicará fundamentalmente aquellas estrategias que están dirigidas a la deslegitimación. Éstas generalmente presuponen normas, valores e ideologías que se presentan como universales o ampliamente aceptadas en la sociedad.

Van Dijk ilustra claramente esta cuestión: “Las estrategias de deslegitimación presuponen poder e implican dominación, es decir, abuso de poder. En el dominio del discurso y la comunicación, ese poder puede no ser simplemente político o socioeconómico, sino también simbólico. Esto es, el discurso dominante puede considerarse legítimo debido a que tiene autoridad y prestigio y, por lo tanto, está asociado con la verdad” (Van Dijk, 1999, p.327).

En definitiva, todos los sucesos descritos se enmarcan en una lucha simbólica entre sectores enfrentados, los cuales intentan imponer su visión de la realidad como la versión dominante. En el caso de las valoraciones y posicionamientos de los funcionarios, se observa una intensa estrategia discursiva criminalizadora de la protesta social. En esta tercera etapa abundan las manifestaciones en las que se ubica al plan de seguridad como la llave maestra que resolvería muchos problemas, entre ellos la cuestión referida a los reclamos que incluyeran cortes de ruta. Sobisch promocionaba firmemente en sus lemas de campaña a presidente su capacidad de gestión y su “mano dura” ante la protesta social, jactándose de haber desterrado los piquetes en la región.

De esa manera, utilizaba el proyecto de seguridad como una bandera, en una estrategia muy clara: instalar la imagen de una provincia que no repara en gastos a la hora de brindar tranquilidad a sus habitantes. Así, la millonaria inversión en recursos era un caballito de batalla, en el que tecnología, patrulleros, videocámaras, helicópteros y un nuevo sistema de comunicación constituían, en definitiva, costosos y sofisticados aparatos al servicio de la comunidad.

Pero la realidad era otra, ya que los conflictos eran recurrentes y la intervención de las fuerzas de seguridad en ese contexto pasaba a ocupar un lugar significativo. La

policía provincial, con una capacitación de excelencia según las autoridades, era la encargada de instrumentar ese plan en 2007. Era la misma fuerza pública que el año anterior había sacado a empujones a los mapuches del Concejo Deliberante, que unos meses después le liberó la zona a un grupo de choque para que agredieran a los docentes en un piquete y que en abril de 2007 difundía el famoso plan de Seguridad ejecutando a un maestro. Todo ello bajo el aval político de las autoridades gubernamentales, que ni antes ni después de los episodios de represión efectuaron autocríticas ni condenas públicas.

La represión en Arroyito desnudó la operatoria oficial y la concepción de poder y gestión de las autoridades. “Un aspecto fundamental de la democracia es el reconocimiento y la legitimación del conflicto, así como la negativa a suprimirlo mediante la imposición de un orden autoritario. Una sociedad democrática y pluralista no niega la existencia de conflictos, sino que proporciona las instituciones que le permiten expresarlos” (Mouffe, 2007). En ese marco, en abril de 2007 la democracia argentina dio uno de sus ejemplos más tristes, transformando un conflicto social en un crimen salvaje.

Sin embargo, el plan represivo no dio los frutos deseados: 6 meses después el proyecto político de Sobisch fracasó rotundamente. En las elecciones presidenciales su fórmula reunió 284.161 votos, que conformaron el 1,56%, quedando así en el sexto lugar. No se impuso ni siquiera en su provincia y sus mejores desempeños fueron en los departamentos más pobres y rurales. En definitiva, el 80% de los neuquinos y el 98% de los argentinos no lo votaron.

CONCLUSIONES

A partir de la información recabada para la realización de este trabajo, se intentó dar cuenta del eje vertebrador de la presente tesis, esto es, indagar las representaciones sociales producidas por las autoridades neuquinas respecto a la “protesta social” entre diciembre de 2001 y abril de 2007. Las preguntas que guiaron el proceso estuvieron vinculadas a las caracterizaciones y valoraciones presentes en las versiones oficiales sobre los episodios de protesta ocurridos en el período abordado, qué imaginarios se construyeron respecto a la protesta social y sus protagonistas, a la presencia de indicadores que dieran cuenta de una criminalización de la protesta social, a la existencia de una continuidad en la mirada del gobierno en el plano discursivo y la intervención material en los conflictos, y a la posibilidad de que la violencia institucional aplicada desde la policía neuquina representara una consecuencia aislada y no deseada o más bien formara parte de una práctica recurrente con objetivos claros.

En este marco, la herramienta metodológica del análisis crítico del discurso (ACD) fue la escogida para efectuar la investigación puesto que, tal como sostiene Fairclough, “es un análisis que apunta a explorar de un modo sistemático las relaciones de causalidad y determinación, a menudo opacas, entre a) acontecimientos, textos y prácticas discursivas, y b) estructuras, relaciones y procesos sociales y culturales más amplios; a investigar cómo esas prácticas, acontecimientos y textos son generados e ideológicamente moldeados por las relaciones de poder y las luchas por el poder; y a explorar de qué manera la opacidad de esas relaciones entre el discurso y la sociedad es, en sí misma, un factor que asegura el poder y la hegemonía” (citado por Van Dijk, 1997a, p.265).

Asimismo, se utilizaron los conceptos de discurso, representaciones sociales, criminalización de la protesta social e ideología como base analítica central. En este sentido, cabe señalar que el lenguaje, además de no ser transparente, tiene un papel crucial en la lucha por las relaciones de poder. Los individuos interactúan dentro de un determinado contexto, y a partir de éste se construyen nuevos mundos que son transmitidos a otros individuos y así sucesivamente, a través de la interacción social, por medio de la cual se evidencian ideologías, creencias y demás saberes propios de una cultura. Tal como afirman Fairclough y Wodak (2005) sólo se puede comprender la

importancia del discurso en los procesos sociales y en las relaciones de poder contemporáneos si se reconoce que el discurso constituye la sociedad y a la cultura, así como es constituido por ellas.

Desde esta perspectiva, la problematización arrojó varias conclusiones y algunos comentarios. En Neuquén, los protagonistas de la protesta social y los funcionarios gubernamentales entablaron una disputa por las relaciones de legitimidad entre las prácticas y los significados que se construyen. En ese contexto, la legitimidad se entiende como la asignación de un sentido válido y reconocido a determinadas prácticas, y por ende a los sujetos de esas prácticas; esa asignación o sanción de un sentido legítimo corresponde a los sectores dominantes, que deben enfrentar alternativas, resistencias, reapropiaciones y resignificaciones por parte de los sectores subalternos.

La clase política que gobernó Neuquén en el período estudiado ejerció no sólo violencia material, sino además un nutrido corpus ideológico desde el cual se denostaban las protestas, desvirtuando sus acciones y objetivos bajo la idea de reestablecer el “orden” y la “seguridad”. En las representaciones sociales creadas por las autoridades se estigmatizó y criminalizó a los sujetos que protestan y se puso énfasis en imágenes basadas en el delito, el descontrol y la barbarie, lo cual da cuenta de una producción ideológica orientada hacia la vigilancia y el disciplinamiento. La protesta social nunca apareció tematizada como una cuestión neutra sino en el mejor de los casos como un grave problema, cuando no como una amenaza contra la sociedad, asociada a ciertos individuos descarriados, desviados, revoltosos e infringidores de la ley.

En el período estudiado se observa que al gobierno provincial le costó dialogar y cuando intentó acercar posiciones con los sectores en disputa lo hizo a regañadientes. Y eso constituye una forma de concebir la protesta social. La política se construye a través de los discursos y por medio de éstos. El discurso de la gestión sobischista expresa un empobrecimiento de la política, en la medida en que la enorme cantidad de episodios reseñados con un ejercicio descontrolado de poder no aparecen como hechos aislados e individuales, sino como expresión de una manera determinada de intervenir en política.

Como se reflejó en el inicio de esta investigación, la clase dirigente neuquina reaccionó ante la crisis política, social y económica nacional que hizo eclosión en diciembre de 2001. El partido gobernante articuló una estructura clientelística y represiva, con el objeto de contener los altos niveles de conflictividad social. Esa estrategia estuvo atravesada por la instauración de un discurso criminalizador de la

protesta social, desde el cual se persiguió la desaparición discursiva del reclamo que origina las medidas de protesta así como la estigmatización de quienes las protagonizan. Sus acciones fueron calificadas como delictivas e ilegales, y que se derivaban de su pertenencia a organizaciones sindicales, piqueteras, sociales, políticas, etc. Así, se desvalorizaba y tergiversaba el reclamo, ubicando a dichas acciones como “antidemocráticas”, por lo que la protesta en lugar de ser concebida desde el Estado como una exigencia de derechos fundamentales, es abordada como un hecho delictivo.

La criminalización de la protesta social no es solo un proceso judicial, es decir, excede la esfera jurídica. Parte de disputas políticas y de disputas simbólicas, por lo tanto es importante abordarla desde una mirada comunicacional. La criminalización es entonces un proceso jurídico, político, mediático, que también juega su papel en el plano simbólico y cuyo objetivo final es ejercer el poder punitivo del Estado, disciplinando y neutralizando las protestas.

Luego de los sucesos de diciembre de 2001 los funcionarios realizaron presiones públicas en declaraciones a los medios de comunicación para que la justicia penal agilizara las causas contra los dirigentes procesados. Es decir, el gobierno provincial presionó a las autoridades judiciales para llevar a los tribunales todo conflicto o protesta social como lucha gremial, estudiantil, vecinal, etc., puesto que las protestas eran concebidas como un “problema” y un “peligro” para la gobernabilidad. En definitiva, la criminalización de la protesta social se configuraba en una herramienta de control social para desarticular las luchas populares.

De esta manera, los problemas sociales y políticos se vuelven procesos penales y los actores sociales, los actores en conflicto, se convierten en excluidos y potenciales criminales producto de la concepción desde la cual el corte de ruta es abordado fundamentalmente como un asunto penal. Así, los jueces se dedican a perseguir a los luchadores sociales en lugar de defender a las minorías despojadas de derechos, mientras los funcionarios se abocan a difundir e instalar imaginarios en los cuales los sujetos aparecen denostados y negativizados.

Como se apuntó en el segundo capítulo, la llegada de Luis Manganaro a la cartera de Seguridad (en el segundo mandato consecutivo de Sobisch) le confirió al gobierno un sesgo autoritario muy fuerte. De allí en adelante se efectuó un reforzamiento en el plano discursivo respecto a la ilegalidad de las acciones de protesta. No sólo desde el ámbito judicial se creaba una enorme cantidad de causas contra luchadores sociales, sino que con el arribo del Ministro la intolerancia y la persecución

de las diferencias ideológicas y políticas con los sectores disidentes serán una constante. Se valorizó negativamente a las personas por sus acciones, por su ideología y por su opinión política; pero además la asociación entre protesta y delito ahora sumaba una arista nueva: la peligrosidad del “otro”, esto es, del que organiza y reclama se combinaba con la preocupación de las autoridades por el aumento de la inseguridad, lo cual radicalizó el accionar represivo. A partir de entonces hubo una utilización sistemática de determinados conceptos con el objeto de construir al que protesta como un desviado, un peligroso, un violento. Al indagar las representaciones sociales, se observó la tergiversación llevada adelante: se invirtió la figura y el que protestaba/reclamaba no era una víctima sino un infringidor de la ley. E inclusive se realizaron arengas públicas a las fuerzas de seguridad a enfrentarse a los delincuentes, esto es, aquellos que “roban, matan, violan, cortan rutas, toman edificios públicos e impiden a los demás ejercer sus derechos” (Luis Manganaro, Diario Río Negro, 07/12/2004, p.10).

De este modo, la “mano dura” y la “tolerancia cero” serán ejes de acción desde los cuales el MPN actuará. El Plan Integral de Seguridad pasaba a ocupar un rol primordial en la agenda política, transformándose en una herramienta central de resolución de los conflictos sociales. Sin embargo, del plan que sería un ejemplo en América Latina lo único concreto fue el millonario gasto en helicópteros, patrulleros y modernos equipos de comunicación. Quienes lo sufrieron y padecieron fueron los protagonistas de la protesta social, las verdaderas víctimas de una producción ideológica y moral que justificó y avaló la violencia estatal.

El Análisis Crítico del Discurso se interesa en el estudio de los discursos ideológicamente sesgados y en la forma en que estos discursos polarizan la representación del “nosotros” y el “ellos”: el discurso ideológico representa al “nosotros” enfrentado al “ellos”. “Tan pronto como las descripciones de sucesos, situaciones, acciones y personas implican buenas y malas cualidades de los grupos sociales, o involucran intereses en conflicto entre grupos, el discurso será por lo general ideológico” (Van Dijk, 1997a, p.62). La estrategia confrontativa reforzada con el arribo de Manganaro expresaba la propuesta de un Estado policial más que de un Estado social. Es decir, un marco ideológico que orientaba la idea de orden asociada a la idea de autoridad y de represión. El MPN fomentó el repudio y el desprecio de las protestas y de los sujetos que en ellas participaron. De esa manera, los cortes de ruta y el piqueterismo fueron ubicados como sinónimos de delito, vagancia, vandalismo,

reclamos injustificados, etc. Y el abordaje de las representaciones sociales producidas desde la dirigencia política provincial refleja cómo la interpretación y comprensión de los conflictos dan cuenta de una legitimación de la violencia institucional.

Chilton y Schaffner (Citado por Van Dijk, 1997a, p.328) señalan que la legitimación y la deslegitimación operan o actúan como funciones estratégicas. Los actores políticos no pueden actuar sólo por la fuerza, por lo que recurren a técnicas tales como la proyección de un liderazgo carismático, el alarde sobre los propios logros y la autopresentación positiva. Del mismo modo, llevan adelante una contraparte: la deslegitimación. Los “otros” son presentados negativamente, para lo cual se recurre a técnicas tales como utilizar ideas de diferencia y fronteras, y actos de habla como culpar, acusar, insultar, etc.

Por otra parte, en diciembre de 2005 con la remoción de la cúpula policial provincial Sobisch ajustó aún más su estrategia política, intentando combatir con una política de seguridad lo que el Estado debería solucionar con políticas de educación, salud y acción social. Así, buscó presentarse ante el país bajo la imagen de un político exitoso, de un líder democrático capaz de tomar decisiones con absoluta firmeza. En su afán por convertirse en Presidente, se erigió como un representante de la derecha nacional, expresando un proyecto neoliberal y neoconservador. Tras ese objetivo, el gobernador y todos los funcionarios provinciales continuaron una lógica discursiva que promovía la figura del “enemigo” con los sectores en disputa. De esa manera, los “desbordes” represivos de la policía nunca fueron condenados y Neuquén se convirtió en una provincia donde la violencia pasó a ser la forma más común de resolver los conflictos sociales.

Todas las declaraciones de los funcionarios que en este trabajo se reseñan dan cuenta de una intención clara de formar paradigmas de sentido. La repetición constante de determinados calificativos respecto a los protagonistas de las protestas, a sus acciones y a sus reclamos persigue la desaprobación y condena social de sus métodos. Y en esa construcción se aprecia una búsqueda de un consenso social que justifique la represión. “Las construcciones de representaciones sociales que emiten los que tienen el ‘poder de decir’ constituyen acciones sociales en tanto están dirigidas a otros individuos y se refieren a otros actores sociales. Todo esto influirá en el sentido y en la significación con que la sociedad trate posteriormente a este grupo y en consecuencia, tendrá incidencia en las relaciones sociales. De este modo se producen y se reproducen estructuras de poder. Las representaciones sociales interviene en la consolidación de las

desigualdades sociales y en la manipulación del consenso posible” (Vasilachis de Gialdino, 2003, p.4).

La descripción de los hechos y conflictos de forma exhaustiva permite contextualizar las palabras de los funcionarios y entender que no se trató de frases intempestivas ni de desbordes orales, sino que forman parte de una política de Estado ejercida durante todo el período estudiado. Si bien Sobisch asume su responsabilidad y se jacta de enviar a reprimir la protesta en la que asesinan al docente Fuentealba, el rastreo y análisis sistemático de declaraciones muestra que la defensa irrestricta y enconada del accionar policial fue una constante desde diciembre de 2001. La explicación de sentido común presenta a la violencia institucional como la resultante de excesos y desbordes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, constituyó un eje central del partido gobernante, quien instrumentó un tejido ideológico que promovía y justificaba el accionar coercitivo/represivo.

En definitiva, se advierte un proceso de criminalización de la protesta como política de Estado. Es decir, no como casos individuales y aislados, sino como expresión de algo mayor, como un modo determinado de intervenir en política. El rol mediador de la política fue una cortina sobre la cual se escondía una aparente idea de diálogo democrático, pero sobre la que se montaba un ejercicio descontrolado del poder, con las fuerzas de seguridad como el bastión de la violencia institucional. En este sentido, resulta irónico el nombre que conserva la escuela de Policía de la provincia de Neuquén. “Staub” es en homenaje al comisario inspector Adalberto Staub, personaje indicado como responsable de haber dado la orden de la tristemente célebre Masacre de Zainuco en 1916, donde fueron masacrados 8 de 16 evadidos de una cárcel regional. Vale aclarar que fue el interventor federal de la Revolución Libertadora en Neuquén, comodoro Francisco Olano, quien colocó en 1963 ese nombre para su denominación.

En definitiva, tal como lo caracteriza Van Dijk, “El ACD es más bien una perspectiva, crítica, sobre la realización del saber: es por así decirlo, un análisis del discurso efectuado ‘con una actitud’. Se centra en los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción y en la reproducción del abuso de poder o de la dominación (...) la investigación realizada mediante el ACD combina lo que, de forma tal vez algo pomposa, suele llamarse ‘solidaridad con los oprimidos’ con una actitud de oposición y disidencia contra quienes abusan de los textos y las declaraciones con el fin de establecer, confirmar o legitimar su abuso de poder. A diferencia de otros muchos saberes, el ACD no niega sino que explícitamente define y defiende su propia posición

sociopolítica. Es decir, el ACD expresa un sesgo, y está orgulloso de ello” (Citado en Wodak y Meyer, 2003, p.144).

Esta tesis, como toda tesis, se dispone para seguir discutiendo. Si bien las fuentes que se utilizaron no son neutrales ya que cuando los diarios difunden una información al hacerlo la transforman y la recrean, su versión de la realidad se utilizó para reconstruir los conflictos, pero fundamentalmente para abordar las declaraciones de los funcionarios. La evidencia empírica producto del relevamiento da cuenta de que hechos y discursos no pueden ser interpretados de forma aislada. Si bien en las tres etapas que esta investigación delimitó hubo dosis de represión, el último eslabón del engranaje político-estratégico lo constituyó el salvaje fusilamiento de Fuentelba.

Es importante tener en cuenta, por último, que la gestión de Sobisch y el uso absolutamente desproporcionado de las fuerzas represivas que instrumentó constituyó una de las experiencias más representativas de una manera de gobernar, pero dicha expresión no se trató de la única ni de la última. Existen en Argentina cientos de personas que año a año son víctimas de la violencia institucional: “Lo que la realidad descarnada nos muestra es que ninguno de esos hechos es un caso aislado, ni fruto de la mala preparación o de desborden individuales. Tampoco son resultado de políticas autónomas de una u otra fuerza, de insuficiente preparación “democrática” o del autoritarismo naturalizado de las burocracias. Los hechos, y el análisis del funcionamiento cotidiano del aparato estatal en su conjunto, incluyendo las agencias de sus tres poderes, demuestran que son sistemática aplicación de una política de estado, que, gobierne quien gobierne, está dirigida a ejercer el control social sobre las mayorías populares, ésas que para que perdure una sociedad dividida en clases deben ser acostumbradas a callar y obedecer” (Verdú, 2009, p.49).

BIBLIOGRAFÍA

- AAVV. (2003). La criminalización de la protesta social. La Plata: Ediciones Grupo La Grieta.
- AIZICZÓN, F. (2009). Zanón. Una experiencia de lucha obrera. Neuquén: Ediciones El Fracaso
- AUYERO, J. (2002). La protesta. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática. Buenos Aires: Ediciones del Rojas.
- BERGER, P. y LUCKMANN, T. (2001). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu editores
- BONIFACIO, J.L. (2011). Protesta y organización. Los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- BOURDIEU, P. (1990). Sociología y cultura. México: Editorial Grijalbo.
- _____ (1987). Cosas Dichas. Barcelona: Editorial Gedisa.
- BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. (1995). Respuestas. Por una antropología reflexiva. México: Grijalbo.
- BOURDIEU, P. y WACQUANT, L. (2005). Una invitación a la sociología reflexiva. Buenos Aires: Siglo XXI.
- BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J.C.; PASSERON, J. C. (2004). El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.
- CALSAMIGLIA, H. y AMPARO, T. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Madrid: Ariel
- CELS (2003). El Estado frente a la protesta social. 1996-2002. Buenos Aires: Siglo XXI editores.
- CELS (2008). Derechos Humanos en Argentina. Informe 2008. Recuperado de: http://www.cels.org.ar/common/documentos/ia_2008.pdf
- MOUFFE, C. (2007). Alteridades y subjetividades en las ciudadanías contemporáneas, en DIA-LOGOS de la Comunicación, n° 75. Recuperado de: <http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/75-revista-dialogos-alteridades-y-subjetividades-.pdf>
- FAIRCLOUGH, N. y WODAK, R. (2005). Análisis Crítico del Discurso: En: El Discurso como Interacción Social II. Barcelona: Gedisa.

- FAVARO, O. (2002). Neuquén. La sociedad y el conflicto. ¿Viejos actores y nuevas prácticas sociales? CEHEPYC, Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cehepyc/neuquen.doc>
- FAVARO, O. y IUORNO, G. (2005). Poder político y estrategias de reproducción en los territorios de Neuquén y Río Negro, Argentina. 1983-2003. En O. Favaro (Ed.), Sujetos sociales y políticas.
- GARGARELLA, R. (2005). El derecho a la protesta. El primer derecho. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones UBA y Editorial Ad-Hoc.
- _____ (2006). Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- _____ (2009). Página/12. Recuperado de <http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-129626-2009-08-08.html>
- GEERTZ, C. (1987). La interpretación de las culturas. México: Gedisa Editorial
- GOFFMAN, E. (1995). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrutu editores.
- _____ (2006). Los marcos de la experiencia. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid.
- KORNBLIT, A. (Ed.) (2004). Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- KOROL, C. (coord.) (2009). Criminalización de la pobreza y de la protesta social. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.
- MARTÍN-BARBERO, J. (1987). Procesos de comunicación y matrices de cultura: Itinerario para salir de la razón dualista. México: Ediciones Gilis Gustavo. S.A.
- _____ (2003). De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía. Colombia: Editorial Gustavo Gili.
- NARVAJA DE ARNOUX, E. (2006). Análisis del discurso. Modos de abordar materiales de archivo. Buenos Aires: Santiago Arcos.
- PETRUCELLI, A. (2005). Docentes y Piqueteros. De la Huelga de Aten a la pueblada de Cutral Có. Buenos Aires: Ediciones El Cielo por Asalto - El Fracaso.
- RAITER, A. (1999). Lingüística y política. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- _____ (Ed.) (2002). Representaciones sociales. Buenos Aires: Eudeba.

- RODRÍGUEZ ALZUETA, E. (2007). Territorio Digital. Recuperado de <http://www.territorioidigital.com/nota.aspx?c=4236725030446172>
- RODRÍGUEZ ALZUETA, E. (2003). La administración de la muerte. Buenos Aires: Mimeo.
- SAUTU, R. (2003). Todo es teoría. Buenos Aires: Ediciones Lumiere.
- SCHMUCLER, H. (1984). Un proyecto de comunicación/Cultura. Revista Comunicación y Cultura N° 12. México.
- _____ (1997). Memoria de la comunicación. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- SVAMPA, M. (2005) La sociedad Excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires: Editorial Taurus.
- SVAMPA, M. y PANDOLFI, C. (2004). Las vías de la criminalización de la protesta social en Argentina. Revista del OSAL Año V N° 14 [mayo-agosto 2004] Buenos Aires.
- SVAMPA, M. y PEREYRA, S. (2004). Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras. Buenos Aires: Editorial Biblos, Segunda edición.
- VAN DIJK, T. (1983). La ciencia del texto. Barcelona/Buenos Aires: Paidós.
- _____ (1996). La noticia como discurso. Barcelona: Ediciones Paidós.
- _____ (1997) Racismo y análisis crítico de los medios. Barcelona: Paidós.
- _____ (1999). Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa Editorial.
- _____ (2001). El discurso como interacción social. Barcelona: Gedisa, Barcelona.
- _____ (2003a). Racismo y discurso de las elites. Barcelona: Gedisa Editorial.
- _____ (2003b). Dominación étnica y racismo discursivo en España y América Latina. Barcelona: Gedisa.
- _____ (2005) El discurso como estructura y proceso. Estudios sobre el Discurso I. Una Introducción Multidisciplinaria. Barcelona: Gedisa.
- _____ (2006). El discurso como interacción social Estudios sobre el Discurso II. Una Introducción Multidisciplinaria: Barcelona: Gedisa.
- TARANDA, D.; MASES, E.; BONIFACIO, J. L. (2007). La protesta social en Neuquén. Viejas y nuevas formas. Neuquén: Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.
- TAYLOR, S. J. y BOGDAN, R. (1987) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós.

VASILACHIS de GIALDINO, I. (1992). Métodos cualitativos I. Los problemas teórico epistemológicos. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

_____ (1997). Discurso político y prensa escrita. La construcción de representaciones sociales. Barcelona: Gedisa Editorial.

VASILACHIS de GIALDINO, I.; FORNI, F.; GALLART, M. A. (1993). Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

VERDÚ, M. C. (2009). Represión en democracia. De la "primavera alfonsinista" al "gobierno de los derechos humanos". Buenos Aires: Herramienta Ediciones.

VERÓN, E. (1971). Ideología y Comunicación de Masas: La Semantización de la Violencia Política. En: AAVV. Lenguaje y Comunicación Social. Buenos Aires: Nueva Visión.

_____ (2007). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad. Buenos Aires: Editorial Gedisa

WACQUANT, L. (2000). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.

WODAK, R. y MEYER, M. (2003). Métodos de Análisis Crítico del Discurso. Barcelona: Gedisa.

WAINERMAN, C. y SAUTU, R. (Comp.) (1998). La trastienda de la investigación., Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

ANEXOS

Los episodios que a continuación se reseñan surgieron producto del relevamiento de cada uno de los ejemplares publicados por el Diario “Río Negro” entre diciembre de 2001 y abril de 2007. En los hechos apuntados hubo violencia física y/o verbal y en la gran mayoría de ellos la policía provincial estuvo directa o indirectamente involucrada:

* 2004:

- En mayo se realizó una denuncia en la Defensoría del Menor y el Adolescente por los ataques que un menor de 18 años sufrió de parte de la policía. La madre del joven relató que la golpiza fue efectuada en el marco de los incidentes producidos luego de que los hinchas de River festejaran un triunfo frente a Boca en el Barrio Ciudad Industrial, en la capital provincial.
- En septiembre el trabajador de Zanón Pedro Alveal, que el año anterior había perdido un ojo luego de una violenta represión policial, fue golpeado por dos policías en el ojo donde tiene una prótesis. El joven caminaba hacia su casa cuando los uniformados lo detuvieron por averiguación de un robo que no había cometido y en ese contexto fue agredido.
- En octubre más de un centenar de personas marcharon en la localidad de Chos Malal hacia una Comisaría, a raíz de un hecho en el que un menor de edad fue detenido durante 12 horas por un policía y golpeado.

* 2005:

- En enero la familia del joven Víctor Guíñez (el mismo que en abril del año anterior había perdido un ojo por una bala de goma policial) volvió a efectuar una denuncia contras las fuerzas de seguridad. En este caso, acusaron a la policía de perseguir al joven, al cual maltrataron y golpearon luego de interceptarlo en una calle céntrica de la capital provincial. La familia solicitó una audiencia en casa de Gobierno con autoridades a raíz del nuevo episodio. Cabe señalar que el autor de los balazos que le provocaron la pérdida de un ojo en 2004 nunca fue identificado.
- En febrero la policía desalojó a manifestantes que protestaban cortando la ruta 7 en la localidad de Centenario. Como consecuencia de esa intervención, hubo un herido de bala de goma. Los protagonistas de la interrupción del tránsito eran trabajadores de la

UOCRA que reclamaban por la reducción de los subsidios que recibían. Ante esos hechos el Subsecretario de Empleo de Neuquén, Rubén Vaudagnotto, señaló respecto al desalojo de la ruta que ello debía tomarse “como una señal” de que el gobierno no permitirá que se corten las rutas “para manifestar desacuerdo” (Diario Río Negro, 18/02/2005, p.21).

- A fines de febrero integrantes de la Defensoría del Niño y el Adolescente sufrieron amenazas e intimidaciones telefónicas. Estos hechos se produjeron en el marco de la modificación a la normativa sobre minoridad que impulsó el Ministro Manganaro y que era rechazado no sólo por el área a la que pertenecen las víctimas de las amenazas, sino también por sectores opositores, sociales y políticos. Las personas que recibieron las amenazas fueron Nara Osés y Edith Galarza, defensoras titular y adjunta del Niño y el Adolescente.

- También a fines de febrero el diputado opositor Jesús Escobar realizó dos denuncias en la Comisaría primera de la capital provincial en la que acusó de agresiones y amenazas a militantes y punteros del MPN. Al mismo tiempo señaló que la sede de su partido político - Patria Libre - fue atacada por intrusos, quienes efectuaron pintadas en su contra con fotos y leyendas intimidatorias.

- En marzo el secretario general del gremio ceramista Raúl Godoy, su mujer y el adjunto del sindicato, Alejandro López, recibieron amenazas de muerte por teléfono. En este caso, días más tarde el gobierno provincial a través del Subsecretario de Seguridad, Hugo Acuña, sostuvo que esas amenazas se trataron en realidad de una “autoamenaza”.

- Unos días después de la supuesta “autoamenaza” la esposa de un trabajador ceramista denunció que fue amenazada de muerte y golpeada por tres personas, las cuales la ingresaron en un automóvil y allí le provocaron heridas con un bisturí. De acuerdo a la denunciante en el medio del episodio le señalaron: “Esto tiene que ver con la Zanón” (Diario Río Negro, 05/03/2005, p.14).

- Una semana después del suceso anteriormente narrado fue atacada la vivienda de un trabajador de Zanón. La esposa del obrero efectuó una denuncia en la que relata las amenazas y el encierro que sufrió en su hogar junto a sus hijos, al mismo tiempo que los protagonistas de las intimidaciones destruyeron los bienes de la casa pero no llevaron adelante ningún robo material. Estos hechos se inscriben en una serie de sucesos de amedrentamiento de los luchadores sociales. Las palabras del Ministro Manganaro, pronunciadas en diciembre de 2004, en las que libraba una lucha contra los obreros y

tomaba una postura frente al litigio judicial, hicieron eco de un modo u otro, puesto que la disputa simbólica entre el Gobierno y el grupo de trabajadores fue cada vez mayor. Los sucesos denunciados ante la Justicia no lograron ser esclarecidos, lo cual sumó mucha mayor confusión en lugar de certezas. Así, las sucesivas intimidaciones y agresiones lo único que aportaron fue un aumento de la tensión social y de la confrontación entre los actores intervinientes.

- En abril fue baleada la casa del secretario gremial de la seccional de ATEN Capital, Alejandro Castelar. La vivienda del sindicalista recibió seis disparos que impactaron en las ventanas y uno de ellos entró al dormitorio.

- En abril nuevamente agredieron a la esposa del trabajador ceramista que en marzo último había sido atacada. En este caso, la denuncia se efectuó en la Fiscalía General por una brutal agresión en la vivienda de la víctima.

- En septiembre un grupo de manifestantes de ATEN fue agredido y amenazado en la localidad de Centenario, durante la inauguración del hospital de la localidad que contó con la presencia del Gobernador Sobisch. A raíz del hecho se llevó adelante una denuncia ante la Fiscalía General y de Coordinación.

- En octubre un joven en supuesto estado de ebriedad perdió un ojo tras recibir un balazo de goma de un policía que ingresó a su domicilio luego de que los vecinos denunciaran ruidos molestos.

- Los primeros días de noviembre se produjeron agresiones contra militantes de UNE (Unión por los Neuquinos), el partido político creado por el gremio estatal ATE con otras fuerzas del interior.

- En la primer semana de noviembre fue incendiado el automóvil de Sergio Aguirre, militante del MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados), ceramista de Zánón e integrante del partido político UNE.

- A mediados de noviembre dos policías balearon y golpearon a un grupo de adolescentes que caminaban desde Plottier en dirección al oeste de la capital neuquina. En el grupo había una chica que, de acuerdo a los testimonios de las víctimas, la obligaron a levantarse la ropa.

- A fines de noviembre un policía mató por la espalda a un joven que creyó autor del robo de una bicicleta en la localidad de Plottier. Minutos antes la policía había recibido la denuncia del hecho y a partir de allí se inició la persecución que terminó con la vida del joven.

- En los últimos días de noviembre obreros de Zanón denunciaron que fueron golpeados por policías y que les fue denegada la atención médica. Por su parte, las fuerzas de seguridad ofrecieron una versión muy diferente de la de las víctimas.

- En diciembre, al momento de desarrollarse la Convención Constituyente, en las afueras de la legislatura provincial la policía intervino en un enfrentamiento entre militantes del MPN y de los gremios estatales. El accionar de las fuerzas de seguridad, que incluyó gases lacrimógenos y balas de gomas, dejó un saldo de 13 heridos.

* 2006:

- A fines de enero 150 miembros de la comunidad mapuche se concentraron frente al Concejo Deliberante, donde se celebraban las sesiones para reformar la Constitución. Al enterarse que no se incluirían los derechos de las comunidades indígenas, intentaron ingresar al edificio para protestar y fueron reprimidos por la policía.

- El anteúltimo día de enero, en la Unidad de Detención N°11 de la capital provincial, la policía reprimió con balas de goma y causó heridas en cuatro internos. Sólo uno de ellos efectuó la denuncia ante la fiscalía a través de la Asociación Zainuco, la cual defiende los derechos de las personas privadas de su libertad. Esta cárcel es la misma en la que se produjeron los casos de torturas en abril de 2004 y que luego no pudieron ser comprobadas en el juicio llevado adelante en 2010.

- El primer día de febrero el secretario general del gremio docente, Marcelo Guagliardo, denunció que entraron a robar a su domicilio. A comienzos de 2005 ya había sufrido un robo en su vivienda, a poco de haber asumido en su cargo. Además, el día en que se realizaban las elecciones de vocalías del Consejo Provincial de Educación, a fines de 2005, su auto fue sustraído de la puerta de la sede de ATEN.

- A fines de febrero un hombre perdió un ojo tras recibir un balazo de goma en el rostro durante una discusión que mantuvo en la puerta de su casa con un grupo de policías. Su esposa y su hijo también recibieron heridas producto de los disparos de los uniformados.

- A mediados de marzo un grupo de mapuches se manifestó frente a una comisaría de la localidad de Cutral Co reclamando y denunciando que dos miembros de la comunidad fueron golpeados cuando se los había detenido durante algunas horas. Las dos personas, un padre y su hijo (menor de edad), permanecieron arrestados por el presunto delito de

robo de cables, pero se los capturó y envió a la comisaría donde se los maltrató y golpeó.

- En marzo un grupo de desconocidos amenazaron de muerte y golpearon a la diputada del MPN Irma Vargas. Coincidentemente, la legisladora era la única del oficialismo que se había opuesto a varias medidas adoptadas por su partido, entre ellas el intento de Luis Manganaro de modificar la ley del niño.

- En abril 200 efectivos policiales llevaron adelante, por orden judicial, un desalojo de 70 ocupantes de terrenos en el Barrio Huiliches de la capital provincial. Los manifestantes, muchos de ellos mujeres y niños, se resistieron y la situación fue caótica. Luego del violento operativo de los uniformados, grupos juveniles atacaron con piedras, palos y bombas molotov. La situación derivó en una batalla campal: que dejó como saldo una decena de heridos entre manifestantes y uniformados (algunos por disparos de armas de fuego), detenidos y roturas en comercios de la zona.

- En abril 5 personas resultaron heridas tras 10 horas de incidentes entre jóvenes y efectivos de la policía tras un accidente fatal de una nena de 6 años en el barrio San Lorenzo, ubicado en la capital provincial. Un camión la atropelló y los vecinos del lugar golpearon al conductor e intentaron quemar el camión, ante lo cual la policía se opuso y a partir de allí se iniciaron los choques, que finalmente derivaron en ataques de los jóvenes a la comisaría de la zona y balas de goma y gases lacrimógenos de los uniformados.

- A mediados de abril fue herido un joven de 18 años, Esteban Cevallos, quien recibió un disparo en la cara de parte de la policía y sufrió la pérdida de la visión (dependiendo de la evolución inclusive podía perder el ojo). Además, la familia señaló que el hermano mayor del adolescente herido fue detenido por policías, golpeado y amenazado.

- El domingo 23 de abril hubo incidentes y destrozos en el microcentro de la capital neuquina. Grupos de jóvenes mantuvieron una disputa y cuando la policía intervino en ese episodio se desató durante casi dos horas una ola de incidentes: vidrieras rotas, destrozos generalizados, saqueos, pedrazos, cuatro policías heridos y también un custodio privado. Finalmente, los dos grupos antagónicos confluyeron en torno a la resistencia contra la policía y allí se gestó el conflicto posterior, que finalizó con un saldo de 19 detenidos y más de 70 vidrios rotos. Como en su mayoría eran jóvenes menores, el episodio generó el pedido de la Ministra de Seguridad de trabajar en la modificación de la ley del niño.

- A fines de abril vecinos del barrio Mariano Moreno (de la capital provincial) denunciaron en la Fiscalía General a efectivos policiales por golpear a dos mujeres y por amedrentamientos con disparos de bala al aire y al piso. Las víctimas señalaron que los uniformados pretendían detener a una de ellas y que al resistirse se generó una respuesta desproporcionada de parte de la policía, que se llevó detenidas a dos personas sin justificación. Cuando las madres de las jóvenes fueron a la comisaría a requerir por sus hijas también fueron detenidas hasta el otro día.
- En mayo fueron denunciadas agresiones verbales por parte de dos policías hacia dos alumnas, que habían sido demoradas a la salida de un colegio. Una de ellas no contaba con su documento, a partir de lo cual se produjeron los episodios denunciados.
- En septiembre Julio Acuña, una persona que no tenía antecedentes y nunca había sido detenido, perdió un ojo debido a que fue alcanzado por una bala de posta de goma disparada por policías. También varios jóvenes y tres policías sufrieron heridas luego del feroz accionar policial en el Barrio Provincias Unidas, ubicado en la capital provincial. El subjefe de la policía, Moisés Soto, defendió la intervención oficial y señaló que se respondió al llamado de un vecino que alertó sobre disturbios en la zona. Al llegar, la fuerza fue recibida a pedrazos y en ese contexto se llevó adelante el uso de balas de goma. Por su parte, las víctimas de la represión ofrecían una versión diferente (también señalaban que todo se había iniciado producto de un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos del barrio) y manifestaban un enérgico repudio de la intervención desmedida y desproporcionada de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la autoridad policial defendía las tareas emprendidas: “Vamos a seguir velando por la seguridad de la gente que quiere vivir bien, estas cosas ya son conocidas por nosotros” (Diario Río Negro, 09/09/2006, p.35). 72 horas después la Ministra de Seguridad de la provincia habló del tema pero no hubo allí ningún tipo de autocrítica o reflexión condenatoria de los episodios. Informó que los agentes partícipes del operativo fueron separados provisoriamente, que Asuntos Internos se abocaría en la investigación del tema y que cuando la policía concurre a los barrios “generalmente es agredida”.
- A fines de septiembre las madres de cuatro jóvenes (tres de ellos menores de edad) del barrio Gran Neuquén Sur, ubicado en la capital provincial, denunciaron excesos policiales. Una de ellas señaló que su hijo presentaba lesiones en todo el cuerpo producto de la violencia de los uniformados.
- En diciembre dos manifestantes fueron heridos luego de un desalojo policial en la localidad de Ramón Castro. Uno de ellos debió ser internado producto de una herida en

uno de sus ojos. Allí un grupo de trabajadores pretendía cortar una ruta en reclamo por el pase a planta permanente en la comuna local, ante lo cual la policía a través de balas de goma y gases lacrimógenos reprimió salvajemente la protesta. De acuerdo a los manifestantes, se trató de una cacería humana; por su parte, la policía afirmó que había cumplido con una orden judicial de garantizar el libre tránsito.

* 2007:

- A fines de febrero la policía dispersó a un grupo de obreros de la construcción que intentaba tomar el ingreso a la refinería de Repsol YPF y luego cortar la ruta 22. El reclamo era por puestos de trabajo y el accionar policial dejó un saldo de 29 detenidos. Hubo dos días de protestas y en ambas intervenciones policiales no fueron reportados heridos, pero los testimonios de los manifestantes aludían a un accionar desmedido de las fuerzas de seguridad.

“Pegarle a un maestro”*

Lo sabe un chico de cuatro años, de salita celeste, que ni siquiera sabe hablar correctamente.

Lo sabe un chico de seis años, que ni siquiera sabe escribir.

Lo sabe un chico de doce años, que desconoce todas las materias que le deparará el secundario.

Lo sabe un adolescente de diecisiete años, aunque sea la edad de las confusiones, la edad en la que nada se sabe con certeza.

Lo saben sus padres.

Lo saben sus abuelos.

Lo sabe el tutor o encargado.

Lo saben los que no tienen estudios completos.

Lo sabe el repetidor.

Lo sabe el de mala conducta.

Lo sabe el que falta siempre.

Lo sabe el rateado.

Lo sabe el bochado.

Lo sabe hasta un analfabeto.

No se le pega a un maestro.

No se le puede pegar a un maestro.

A los maestros no se les pega.

Lo sabe un chico de cuatro años, de seis, de doce, de diecisiete, lo saben los repetidores, los de mala conducta, los analfabetos, los bochados, sus padres, sus abuelos, cualquiera lo sabe, pero no lo saben algunos gobernadores.

Son unos burros.

No saben lo más primario.

Lo que saben es matar a un maestro.

Lo que saben es tirarles granadas de gas lacrimógeno.

Lo que saben es golpearlos con un palo.

Lo que saben es dispararles balas de goma.

A los maestros.

A maestros.

Lo que no saben es que se puede discutir con un maestro.

Lo que no saben es que se puede estar en desacuerdo con lo que el maestro dice o hace.

Lo que no saben es que un maestro puede tener razón o no tenerla.

Pero no se le puede pegar a un maestro.

No se le pega a un maestro.

A los maestros no se les pega.

Y no lo saben porque son unos burros.

Y si no lo saben que lo aprendan.

Y si les cuesta aprenderlo que lo aprendan igual.

Y si no lo quieren aprender por las buenas, que lo aprendan por las malas.

Que se vuelvan a sus casas y escriban mil veces en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos, que lo repitan como loros hasta que se les grabe, se les fije en la cabeza, lo reciten de memoria y no se lo olviden por el resto de su vida; ellos y los que los sucedan, ellos y los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de los sucesores, que aprendan lo que saben los chicos de cuatro años, de seis, de doce, los adolescentes de diecisiete, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o encargados, con o sin estudios completos:

Que no se le pega a un maestro.

No se le puede pegar a un maestro.

No debo pegarle a un maestro.

A los maestros no se les pega.

Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan este concepto, aunque les cueste porque siempre están distraídos, presten atención y métanselo en la cabeza: los maestros son sagrados.

* Nota publicada por Mex Urtizberea en el Diario La Nación el 10 de abril de 2007.